

de circulante alcanzó los 150 millones de pesos de papel: la cantidad se había triplicado desde 1903. Algunos chilenos siguieron en contra del papel moneda. La municipalidad de Limache lo describió como «el más odioso de los expoliadores, ya que se explota con él el hambre de más de cuatro millones de chilenos, que forman la nación más rica del mundo»¹²—opinión compartida por la Cámara de Comercio de Valparaíso—: «El pueblo no quiere ni un peso más de papel; quiere y desea una moneda sana, efectiva, una medida inalterable de los valores»¹³. Estas eran las voces que se oían en la selva.

Si bien la política monetaria reflejaba un enfoque complaciente, también lo hizo el abandono de las reformas fiscales de 1878-1879. Durante la década de 1880, el Congreso liberó de sus contribuciones a los ricos aboliendo los impuestos sobre la Renta, las Donaciones y las Propiedades, y prefiriendo depender de los impuestos aduaneros al salitre. Justo después de una década (1879-1889), los impuestos a las exportaciones aumentaron los ingresos habituales del país del 4% al 45%¹⁴. De hecho, desde finales de la década de 1880 hasta 1930, la industria del salitre generó más de la mitad de todos los ingresos habituales del gobierno.

El colapso del precio del salitre en 1914 obligó a reestructurar las políticas tributarias. Enfrentados a unos ingresos repentinamente en baja, el gobierno redujo los salarios públicos en un 10% y estableció impuestos sobre el alcohol, el tabaco, las donaciones, las propiedades de tierra y las transacciones de acciones, así como a la exportación de bórax. La Moneda también aumentó los gravámenes sobre las importaciones e impuso recargos especiales a los impuestos preexistentes. Las medidas de este tipo, sin embargo, eran de poca ayuda en la crisis, que se había visto exacerbada por la necesidad de subsidiar la decadente industria del salitre. La situación se volvió tan crítica que el Congreso hizo lo que hasta entonces se había considerado impensable: autorizó el gravamen a la Renta, las Inversiones en capital y la Propiedad.

Dado que estos impuestos produjeron demasiado poco, el gobierno tuvo que recurrir a la imprenta para sacar de apuros al sistema bancario nuevamente en problemas: el comienzo de la guerra había precipitado otro asedio a los bancos, institución que perdía el 66% de sus depósitos de la noche a la mañana. El gobierno prestó a los bancos aproximadamente 30 millones de pesos, aumentando el volumen de circulante a 225 millones de pesos. Cuando las compañías del salitre pagaron sus subsidios, el volumen de circulante rápidamente disminuyó. Sin embargo, en 1918, con otro gran déficit en ciernes, el Congreso autorizó la emisión de 20 millones de pesos. Ese año, más de 227 millones de pesos estaban circulando en la economía. Este aumento de circulante no pareció espe-

¹² *El Mercurio*, Valparaíso, 2 de agosto de 1907.

¹³ *El Mercurio*, Valparaíso, 21 de julio de 1907.

¹⁴ Esta cifra no incluye los ingresos provenientes de los ferrocarriles del Estado.

cialmente crítico. La balanza comercial mejoró sustancialmente: las exportaciones excedieron más o menos en siete veces a las importaciones. En 1918, el valor internacional del peso aumentó aproximadamente un 25%, haciendo posible que Chile volviera, sin grandes aspavientos, al codiciado patrón oro.

Las finanzas del país seguían siendo precariamente dependientes de los impuestos a las exportaciones. En 1918-1920, los impuestos directos, que cayeron en su mayor parte sobre la clase alta, oscilaron entre el 3,6% y el 10% del total. Los ricos pagaban menos impuestos en el periodo parlamentario que antes, en la década de 1870 y 1880. De esta manera, el colapso salitrero de posguerra obligó al gobierno a crear nuevos impuestos e imponer sobretasas en los antiguos, especialmente en los artículos suntuarios, por un mínimo del 50%. Al descubrir que estos impuestos no podían generar ingresos suficientes, el gobierno pidió un préstamo de 60 millones de dólares. Ni los nuevos impuestos, ni los nuevos préstamos extranjeros pudieron cubrir el déficit. Se emitieron nuevos bonos, que tuvieron el mismo impacto que el papel moneda. Entre 1918 y 1925, la cantidad de papel circulante del gobierno aumentó de 227 a 400 millones de pesos.

LA REPÚBLICA PARLAMENTARIA: ASPECTOS SOCIALES

Población, inmigración, cambio social

Se estima que alrededor de 1918 había 3.900.000 chilenos. Esta cifra puede muy bien subestimar la realidad. Aunque el Registro Civil existía desde mediados de la década de 1880, muchas personas no se preocupaban de inscribir el nacimiento de sus hijos. De manera similar, la gente no siempre hacía uso del nuevo derecho al matrimonio civil. La ley misma era defectuosa: si bien sólo reconocía los matrimonios civiles, no prohibía las uniones sancionadas por la Iglesia, ni tampoco requería (como lo hace ahora) que todos lo que quisieran realizar la ceremonia religiosa tuvieran que pasar previamente por el matrimonio civil. La jerarquía católica, dirigida por el obispo Joaquín Larraín Gandarillas, insistió a sus fieles a casarse sólo por la Iglesia y a ignorar así la ley secular. En 1897, y entonces sólo a instancias del Papado, el clero chileno dio instrucciones a los fieles de efectuar el matrimonio del Estado después de recibir los sacramentos de la Iglesia. En 1905, la tasa de matrimonios había vuelto a ser la que era antes de 1885. A pesar de esto, la cantidad de nacimientos ilegítimos siguió aumentando significativamente. De hecho, a comienzos del siglo xx, bastante más de un tercio de todos los niños chilenos (en Santiago, más de la mitad) nacían fuera del vínculo matrimonial. La Iglesia tachaba de «bastardos» a todos los niños nacidos de los matrimonios civiles, opinión que enfurecía en especial a los radicales inflexiblemente anticlericales.

La población nunca aumentó con la suficiente rapidez como para satisfacer la demanda de mano de obra —al menos en la opinión de los hacendados, los fabricantes y los salitreros, quienes solían lamentarse de que había muy pocos hombres dispuestos a trabajar en sus campos, plantas o minas; y muy pocas mujeres dispuestas a ser sirvientas—. Resulta difícil aceptar estas afirmaciones, pues la prensa también se quejaba constantemente de la enorme vagancia y de las hordas de mendigos que atestaban las calles. La falta de fuerza de trabajo, si es que existió, bien puede haber estado relacionada con el ciclo de repetidos auges de las salitreras. En épocas de clara escasez de mano de obra, sin embargo, hubo frecuentes incentivos para impulsar la inmigración extranjera. A pesar de ello, sólo ciertas nacionalidades eran bienvenidas. Tal como los chilenos habían desalentado antes la inmigración de judíos e italianos, ahora rechazaban a los japoneses, citando las amenazas del peligro amarillo, y a los negros, cuya presencia, decía el político Malaquías Concha, «enerva el vigor físico y deprime el carácter y la inteligencia de los habitantes de un país».¹⁵ Después cambiarían de opinión con respecto a los italianos (3 % de la población en 1920), pero no sobre los judíos. Debido a típicos estereotipos antisemitas, los escritos pseudocientíficos de Nicolás Palacios y otros, y la credibilidad acordada a los *Protocolos de los Mayores de Sión* (que todavía seguían siendo citados después de la Segunda Guerra Mundial), los judíos nunca fueron realmente bienvenidos como inmigrantes.¹⁶

En un esfuerzo por impulsar la inmigración, el gobierno creó en 1888 la Agencia General de Colonización. En realidad, llegaron relativamente pocos inmigrantes. Por ejemplo, entre 1889 y 1907, sólo 55.000, mientras que, en el mismo período, Argentina recibió bastante más de 2 millones. Irónicamente, aunque algunos chilenos se oponían a los proyectos de colonización porque no querían que los inmigrantes crearan enclaves étnicos, esto es precisamente lo que ocurrió algunas veces. Los esclavos del sur del Imperio austro-húngaro («yugoeslavos») se establecieron con fuerza tanto en el Extremo Sur como en el Norte Grande. En 1907, los peruanos y los bolivianos constituían el 37 % de todos los residentes en Chile nacidos en el extranjero.

La inmigración cambió sólo en forma marginal la sociedad chilena. La mayor parte de los inmigrantes terminaron como jornaleros, aunque algunos se forjaron un lugar en la clase media, que para entonces se encontraba en franco desarrollo. No es difícil dilucidar las razones del crecimiento de la «franja media» de la sociedad. Los requerimientos del comercio internacional y las finanzas creaban un sinnúmero de nuevos puestos en las oficinas; la creciente burocracia fiscal (en 1919, había 27.000 empleados públicos, nueve

¹⁵ Cámara de Diputados (sesiones ordinarias), 10 de agosto de 1905.

¹⁶ Al parecer, durante la década de 1930, el ministro de Relaciones Exteriores dio órdenes secretas a sus cónsules de que les negaran el visado a los judíos que quisieran radicarse en Chile.

veces más que en 1880) aumentaba las filas de la nueva clase social en ciernes —como lo hicieron los profesores de escuela, los periodistas y los oficiales de las fuerzas armadas—.

Es importante no poner demasiado énfasis en el auge de la clase media. Un ensayista de 1908 aún podía afirmar plausiblemente que la división social más evidente del país se daba entre la clase alta y la clase baja (las dos «separadas [...] por una gran distancia») y que «el rudimento de clase media que comienza a nacer en algunas ciudades y centros industriales» todavía no ha llegado «a formar una categoría apreciable».¹⁷ Ciertamente, las actitudes propias de la clase media tardaron en tomar forma.

La vida de la clase alta, que siempre había sido buena, se hizo mucho mejor. La «gente decente» abrazó el hedonismo con una devoción casi religiosa. Tantos se dirigían a las playas en verano, que los ferrocarriles no contaban con suficientes trenes para satisfacer la demanda. Los miembros más ricos de la clase alta se instalaban durante largos períodos en Francia, en París o en La Riviera. Se dice que, en 1891, los chilenos en París no pudieron encontrar un salón de baile lo suficientemente grande para todos ellos donde celebrar la caída de Balmaceda, pero esto es sin duda un mito; el París de esa época estaba lleno de grandes salones de baile.¹⁸ Quienes no podían viajar hacían lo que podían: copiaban las ropas, maneras y costumbres parisinas.

Los que no tenían la suficiente fortuna como para estar en los rangos más altos de la escala social eran harina de otro costal. Nuestro observador de 1908 los describe severamente:

seres incultos, que no saben leer ni escribir, y carecen por tanto de cultura intelectual, moral y artística [...], que llevan en gran parte vida nómada sin conocer las ventajas de la familia, y cuya vida material es lastimosa, pues se alimentan y se visten mal, y habitan en viviendas abominables.¹⁹

En el campo, los «seres incultos» incluían a los minifundistas y los ubicuos inquilinos, así como a los igualmente ubicuos *gañanes*. El inquilino y su familia al menos podían subsistir; no obstante, la máxima aspiración de la clase baja rural formada por los *gañanes* era sobrevivir. Sin acceso a la tierra o a un trabajo estable, hicieron lo que siempre habían hecho y se trasladaron, esta vez en enormes cantidades, a las salitreras del norte en busca de trabajo —y a las ciudades—.

¹⁷ Armando Quezada Acharán, *La cuestión social en Chile*, 1908, págs. 11-12.

¹⁸ Según Ramón Subercaseaux, la colonia chilena en París en esa época se estimaba en alrededor de 300 personas; *Memorias de ochenta años*, 2ª ed., 2 vols., vol. 1, 1936, pág. 447.

¹⁹ Quezada Acharán, *La cuestión social*, págs. 11-12.

La vida urbana: esplendores y (especialmente) miserias

En 1907, alrededor del 40% de todos los chilenos vivían en comunidades de más de 2.000 personas. La población de Santiago ese año alcanzó las 332.000 personas; la de Valparaíso, las 162.000; había más de veintidós ciudades de más de 10.000 personas (en comparación con las seis de 1865). Dado que la población urbana crecía en forma desigual, el sur y el extremo sur, y la zona minera del norte crecieron más rápido que otras áreas del país. Una vez que el auge del salitre llegó a su fin, sin embargo, la pampa del norte perdió gran parte de su población, que se dirigió al sur, especialmente a las ciudades del Valle Central.

El Santiago de la década de 1910 no era muy diferente de la ciudad de hacía cuarenta años. Aunque el cambio de siglo trajo consigo signos de desarrollo en lo que más tarde serían los barrios más acomodados del área oriental (Providencia se convirtió en una municipalidad independiente en 1897), la capital todavía no se había expandido mucho más allá de su centro histórico. Su eje principal, la arbolada Alameda, se veía flanqueada en su mayor parte por hermosos locales comerciales y mansiones. La arquitectura pública del período, tomando mucho de los estilos franceses, fue especialmente notable: las estaciones de tren Central y Mapocho (1900, 1913), la Biblioteca Nacional (terminada en 1924), el Palacio de Bellas Artes (1910), el Club de la Unión (1924). En su apariencia externa, el centro de Santiago nunca fue más agradable que a comienzos del siglo xx.

Sin embargo, la apariencia externa rara vez representa toda la historia. En este período, la vida urbana era más estimulante que la del campo, pero también era más peligrosa. Las urbes y las ciudades provinciales carecían de sistemas apropiados de agua potable y alcantarillado. La mayor parte de Santiago y Valparaíso no contarían con cañerías de agua hasta después de 1900; las otras urbes tuvieron que esperar una década más. En 1905, el informe de un periódico denunció que en La Serena, por ejemplo, «el agua que sale de la llave es ni más ni menos que barro».²⁰ La clase alta parecía casi tan descuidada con respecto a la higiene personal como los pobres. El primer baño (completo, con tina y cañerías para el agua caliente) apareció en Santiago sólo en 1900.

En algunas ciudades, los beneficios de la electricidad llegaron incluso antes que la municipalidad suministrara agua. Santiago comenzó la instalación de alumbrado eléctrico en 1886; Temuco, en 1890; y Valparaíso, una década después. Las ciudades más pequeñas, como Lota y Tocopilla, habían tenido acceso a la electricidad antes porque las compañías mineras locales las conectaban a sus generadores privados. El alumbrado a gas perduró en otras ciudades de provincias (como Copiapó) durante muchos años. Santiago electrificó su sistema de tranvías en 1900. Al cabo de tres años, la *Chilean Electric Tramway*

²⁰ *El Mercurio*, Valparaíso, 28 de marzo de 1905.

había aumentado a casi 97 kilómetros de tendido y continuó su expansión en los distritos más remotos, cubriendo la mayor parte de la ciudad alrededor de 1910.

Quiénes inmigraban a la ciudad solían lamentar el haber cambiado la escualidez bucólica del campo por los horrores de los infames conventillos, de los cuales había al menos 2.000 en el Santiago de las décadas de 1900 y 1910. En 1905, *El Mercurio* describió Valparaíso como «infecta, fétida, pestilente, con sus calles cubiertas de una espesa capa de todo que fermenta», y como «un puerto del cual todo hombre que estime en algo su vida debiera huir».²¹ Menos de cuatro años después, el mismo periódico comentó: «El idioma castellano, tan rico como es en palabras, no las tiene suficientemente propias para describir con mediana decencia semejante pocilga».²² Todavía en 1920, Santiago no contaba con un suministro de agua potable adecuado. Durante el verano, la gente literalmente no tenía nada que beber. Sólo en 1903, el gobierno comenzó a construir un sistema de alcantarillado para la capital. La basura solía tirarse simplemente a la calle. A veces era recogida y quemada, bañando a los vecinos de la localidad con el olor poco fragante de la incineración de desechos y restos animales.

Las condiciones de vida de los pobres en las ciudades eran terribles. Hacinándolos en grupos de hasta ocho personas en un solo cuarto sin ventilación (de cinco por ocho metros), los conventillos se habían convertido en fétidas incubadoras de enfermedades, sus habitantes morían de tuberculosis, enfermedades respiratorias o, en algunos casos, de simple asfixia. En 1906, el Congreso creó el Consejo de Habitaciones de Obreros para garantizar condiciones mínimas de seguridad en las viviendas existentes y, en caso de necesidad, reemplazar los espacios no seguros. Dicho consejo nunca recibió la financiación adecuada.

Las enfermedades contagiosas abundaban: la viruela, la difteria, la tos convulsiva, la meningitis y las paperas diezmaron a los habitantes de las ciudades, tal como lo había hecho el tífus. Las epidemias se habían convertido en una de las pocas fuerzas en la vida chilena que no hacían diferencias de clase. El cólera, la fiebre amarilla y la peste bubónica aniquilaron democráticamente a ricos y pobres por igual. Entre 1909 y 1914, más de 100.000 chilenos perecieron al año por enfermedad. La viruela por sí sola mató a 10.000 personas al año. Los hombres sucumbían en mayor número que las mujeres. Los niños de menos de un año constituían entre el 33% y el 40% de la tasa de mortalidad anual total, algunos por haber sido abandonados (25.000 tan sólo en Santiago entre 1870 y 1910); otros, por infanticidio. Este sombrío panorama de enfermedades y muerte finalmente obligó a los atargados gobiernos parlamentarios a que iniciaran programas de vacunación de la población.

No obstante, la enfermedad no era la única amenaza. Los crímenes aún abundaban. Los hospitales de Valparaíso admitían tantos pacientes con heridas cortantes que no podían

²¹ *El Mercurio*, 7 de julio de 1905.

²² *El Mercurio*, Valparaíso, 18 de marzo de 1909.

recibir a todos los que estaban meramente enfermos. En 1902, un periódico afirmó que Chile tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Dado que las cárceles ya no lograban controlar a los criminales (se descubrió a un prisionero que falsificaba dinero), los ciudadanos exigieron a las autoridades que revivieran la práctica de azotar a los malhechores. Los criminales parecían tan imbatibles como las enfermedades y, a menudo, hacían que los más pudientes contrataran guardaespaldas.

A pesar de sus diversas amenazas, tanto naturales como producidas por el hombre, la vida urbana aún presentaba muchos atractivos. Los ricos (y los arribistas) iban a la ópera, a veces más para ser vistos que para escuchar, y aún preferían claramente el repertorio internacional. El compositor de ópera chileno Eliodoro Ortiz de Zárate no tuvo éxito, *El Mercurio* llegó a insinuar que estaba tratando de imponer un «arte de medio pelo» entre el público aficionado a la ópera²³. Los pobres iban en tropel a las cantinas, muchas de ellas ilegales y que parecían dotadas con el don de la ubicuidad. En 1909, Valparaíso tenía aproximadamente 1.500 bares —uno por cada treintínco porteños, sin contar a las mujeres— que, según *El Mercurio*, no tomaban²⁴ —y los niños—. El alcoholismo se volvió tan pernicioso (se estima que seis de cada diez trabajadores celebraba religiosamente el «San Lunes» todas las semanas) que justo antes de 1900 se formó la Liga contra el Alcoholismo y, en 1902, el Congreso aprobó una Ley de Alcoholes, que (por primera vez) convertía la embriaguez en una ofensa delictiva. La Liga y la Ley estaban destinadas al fracaso, como todos los intentos en este sentido de la historia chilena.

El burdel, legal en tanto que tuviera una licencia, era tan ubicuo como el bar. En 1916, Santiago contaba con 543 burdeles legales y con unas 10.000 «casas de tolerancia», que funcionaban fuera de la ley. A pesar de los esfuerzos de la policía y de las autoridades médicas municipales, las enfermedades venéreas eran endémicas. En 1900, más del 21% de los niños que morían antes de los seis años eran víctimas de sífilis congénita. Al cabo de diez años, sin embargo, llegó a Chile un remedio para los adultos afectados, el examen del doctor Wasserman y la «bala mágica» del Dr. Ehrlich (Salvarsan 600).

Los niños que sobrevivían no llegaban necesariamente a tener una larga vida. Los trabajadores urbanos trabajaban muchas horas, con poca protección contra las lesiones o el desempleo. La muerte por accidentes industriales alcanzó a más de 2.400 víctimas tan sólo en 1910. Los trabajadores del ferrocarril, por ejemplo, sufrían una tasa de accidentes que era veinticinco veces mayor que la de sus colegas en la Alemania imperial. Combinada con las pobres condiciones de vida y de trabajo, la tasa de mortalidad era dos veces mayor que la de Europa occidental y, en 1920, la expectativa de vida promedio de los chilenos era de treinta años. Los esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo a través de la legislación solían generar oposición: en 1904, la propuesta de dar a los trabajadores el

²³ Mario Cárpena G., *La Ópera en Chile*, 1976, págs. 110-112, 137-144.

²⁴ *El Mercurio*, Valparaíso, 18 de diciembre de 1906; 15 de junio y 13 de julio de 1909.

domingo libre fue interpretada por el parlamentario Eduardo Suárez Mújica como un intento de coartar la libertad tanto de los trabajadores como de los empleadores²⁵.

Los chilenos no podían escapar, sin embargo, a los efectos de la tecnología moderna. Entre 1914 y 1918, el uso del teléfono aumentó en un 15%. Ciudades como Chillán y Concepción tendieron líneas telefónicas para comunicarse una con otra. Los teléfonos eran para quienes necesitaban un sistema más expedito que el servicio de correos: en los primeros años del siglo, una carta solía tardar ocho días en llegar de Santiago a Valparaíso (si es que llegaba). El correo desde la capital hasta el Norte Grande solía tomarse tres meses. Como señaló un crítico: «el servicio de correo que tenían los indios primitivos sería mil veces mejor que el actual, implantado en medio de la civilización»²⁶.

El automóvil hizo su aparición a comienzos de la década de 1900. En 1906, ya había seis en Santiago: incluso se construyó un auto localmente, el cual alcanzaba la velocidad de diez kilómetros por hora. A pesar de la relativa falta de calles pavimentadas, los autos se volvieron tan populares que en 1907 el gobierno insistió en regular el tráfico automotor, incluido el otorgamiento de permisos de conducir. Tres años después, se impuso un límite de velocidad máxima de 14 km/h. Ninguna de estas innovaciones parecía disminuir la briosidad en que los chilenos conducían sus automóviles. En 1920, se afirmó que los visitantes extranjeros tenían cruzar las calles, pues los automóviles aceleraban «como si estuvieran corriendo carreras en una pista especial»²⁷.

El aeroplano llegó en 1910. Fue una innovación que los militares adoptaron rápidamente, a veces con resultados desastrosos. Algunos de los primeros aviadores militares cayeron directamente en el olvido. Los chilenos aún se describen entre sí como «más perdido que el teniente Bello», una macabra alusión a un piloto que desapareció en las montañas en 1914. Un instructor militar británico de la época, desesperado por la tendencia de los aviadores a realizar paseos no autorizados, describía a sus estudiantes chilenos como «taxistas aéreos». Para ser justos, también hay que decir que un aviador chileno, el teniente Dagoberto Godoy, fue el primer piloto en cruzar la alta cordillera de los Andes por aire (diciembre de 1918) en un Bristol construido en Inglaterra.

El «embrujo alemán»: el Ejército y la educación

Durante el periodo parlamentario, las fuerzas armadas no lo hicieron mucho mejor que el pobre teniente Bello. Es verdad que los instructores alemanes (contratados por primera

²⁵ Cámara de Diputados (sesiones extraordinarias), 26 de noviembre de 1904.

²⁶ *El Mercurio*, Valparaíso, 18 de abril de 1908.

²⁷ *El Mercurio*, 9 de noviembre de 1920.

vez en 1885) realizaron un serio esfuerzo por modernizar el Ejército chileno. Portando armas alemanas, vistiendo uniformes de estilo alemán y marchando como alemanes, los soldados chilenos se convirtieron en una copia al carbón de sus colegas prusianos, aunque algo más morenos –según el general Emil Körner–. Körner se había convertido en jefe del Estado Mayor tras la guerra civil de 1891. Entre mediados de la década de 1890 y la Primera Guerra Mundial, unos 130 oficiales chilenos fueron adiestrados en Alemania. Varias docenas de oficiales alemanes se convirtieron en instructores en la Escuela Militar y la Academia de Guerra, donde el principal idioma extranjero que se enseñaba era precisamente el alemán. La Marina, que aún atesoraba sus tradicionales vínculos británicos, sistemáticamente se negó a enseñar alemán a sus cadetes. De cierta manera, por ende, la influencia alemana en el ejército chileno fue notoria, no sólo en el armamento y en los uniformes, sino también en la música –las espléndidas marchas de Badenweiler, Ferbelin y los Nibelungos aún se mezclan en el repertorio de las bandas militares con las canciones chilenas favoritas–.

A un nivel más profundo, sin embargo, la prusianización fue más una cuestión de estilo que de sustancia. El gobierno solía gastar más del 20% del presupuesto de la nación en los militares, pero, de hecho, las tan mencionadas reformas alemanas del Ejército no lograron echar raíces. La Ley de reclutamiento de 1900, por ejemplo, sólo echaba el lazo a los pobres o a los que no contaban con amistades. Para algunos de los reclutas, claramente, el servicio militar era una bendición: el Ejército por lo menos proporcionaba a sus conscriptos educación básica y entrenamiento militar. No obstante, dado que el gobierno no había logrado encontrar los medios para movilizar las tropas después que eran licenciadas, al Ejército le resultaba casi imposible llamar a los hombres a defender su bandera. Cuando en 1920 se movilizaron las reservas de la Primera División, sólo respondió un tercio de ella. Los cuerpos de oficiales parecían gastar gran parte de su tiempo tratando de evitar el servicio en el norte, donde la vida era mala y costosa. Servir en la milicia no era una carrera ventajosa: resultaba extremadamente difícil conseguir una promoción y los oficiales se quedaban estancados en el mismo rango y nivel de remuneraciones durante años. Los problemas personales no eran los únicos que asolaban a los militares. El Ejército tardó mucho tiempo en desarrollar sus servicios técnicos y administrativos. Estas deficiencias quedaron dolorosamente en evidencia durante la movilización de 1920, cuando los hombres llegaron sin perros, con carros sin ruedas y caballos muertos, porque muchos habían sido escaldados hasta la muerte durante el viaje.

La suerte de la educación fue significativamente mejor que la del Ejército en el mismo periodo. Aquí, también, la influencia de Alemania fue notable, no sólo como inspiración fundamental de los principales educadores de la época, sino también como fuente de profesores. Un grupo de ellos fue contratado por el nuevo Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, creado en 1888, y otros enseñaron en los liceos.

En 1918, había unos 336.000 estudiantes primarios, casi tres veces más que en 1900. En 1920, alrededor del 50% de la población estaba alfabetizada –comparada con aproximadamente un 30% en 1895–. La cantidad de niños que asistían al colegio siguió aumentando, aunque la mayoría de los inscritos no llegaba a graduarse. Los intentos por hacer que la educación fuera obligatoria fracasaron, en parte debido a que algunos legisladores (sin duda los mismos que se habían opuesto a la vacunación forzosa) consideraron la educación obligatoria como una forma de usurpar los derechos naturales de los padres por parte del Estado. La asistencia al colegio no se volvió obligatoria hasta 1920 e incluso entonces la Ley no fue puesta en vigencia con rigor. En lo que se refiere a la educación secundaria, los logros fueron algo menos impresionantes. En 1918, sólo unos 45.000 estudiantes asistían a colegios de secundaria, de los cuales más o menos el 50% eran privados.

En 1918, las inscripciones en la Universidad alcanzaban la cifra de 4.000; la mayor parte del aumento en este número se había producido en 1910. La venerable Universidad de Chile ahora tenía competencia. En 1888, la Archidiócesis de Santiago creó la nueva Universidad Católica de Chile, formada para contrapesar el creciente anticlericalismo de la época. Más al sur, la Universidad de Concepción abrió sus puertas en 1919 –un bastión del secularismo fundado por el filósofo Enrique Molina, su rector durante los treinta y siete años siguientes–.

La creciente alfabetización hizo que el periodo parlamentario fuera muy floreciente en lo relativo a la prensa: virtualmente todas las ciudades, del tamaño que fueran, publicaban al menos un periódico y, generalmente, más de uno. La mayor parte de estos periódicos provinciales reflejaban un sesgo particular ya fuera en términos religiosos o políticos. Asimismo aparecieron las revistas ilustradas: *Sucesos* en 1902, *Seleccion* en 1909, el notable *Pacifico Magazine* en 1913, y *Zig-Zag*, la revista de mayor duración de Santiago y cuyos dueños, la familia Edwards, también publicaron más de veinticinco revistas diferentes.

Una ojeada a la cultura: 1880-1920

Las últimas décadas del siglo fueron testigo del gran florecimiento de los historiadores nacidos bajo la égida del gran Andrés Bello. La *Historia general de Chile* de Diego Barros Arana fue publicada, en dieciséis gruesos volúmenes, entre 1884 y 1902. El académico chileno más sobresaliente de este periodo fue José Toribio Medina, hombre con una impresionante variedad de intereses (historia, bibliografía, geografía, numismática, biografía, historia natural) y coleccionista insaciable de libros y manuscritos –que fueron donados a la Biblioteca Nacional de Chile a su muerte, en 1930–. La tradición historiográfica del siglo xx siguió predominando en el Chile del siglo xx, lo que quizá no sea sorprendente a la luz de su fuerza. Aún en la década de 1960, un memorable académico,

Ricardo Donoso, seguía cultivando esta antigua veta con distinción; mientras Guillermo Feliú Cruz continuaba la tradición bibliográfica de Medina, con quien, de hecho, había cursado su formación académica. Las primeras sacudidas del «revisionismo» de los textos históricos no fueron perceptibles hasta finales de la década de 1920 en la obra de Alberto Edwards, admirador de Burke y de Spengler, y de importantes mandatarios chilenos del siglo XIX, como Portales y Montt. El mismo Edwards fue una de las mentes más brillantes de su época y, también, el autor de historias fantásticas y de detectives. Su agente de policía de ficción, Román Calvo, «el Sherlock Holmes chileno», es una creación memorable que merece ser reeditada. Las ideas de Edwards iban a influir en las de Francisco Antonio Encina, el controvertido historiador de mediados del siglo XX, cuyos libros se vendieron en grandes cantidades. Aquí sólo podemos esquematizar brevemente la evolución posterior de esta área del saber. La historia como disciplina se vería algo eclipsada en la década de 1950 y (especialmente) en la década de 1960 con el desarrollo en Chile de las ciencias sociales modernas (y, durante mucho tiempo, más de moda); sin embargo, resurgiría con renovado interés en forma bastante decisiva en las décadas de 1970 y 1980.

Alrededor de 1900, la mayor alfabetización, junto con la expansión de la educación y el nuevo papel predominante del periodismo como profesión, afectaron a la actividad cultural. En efecto, se ha dicho que con el cambio de siglo surgió un nuevo tipo social, el intelectual (el escritor Augusto D'Halmar ha sido considerado a veces como el prototipo de esta nueva raza). Una literatura imaginativa y construida sobre el espléndido ejemplo de Alberto Blest Gana, mostró evidentes signos de vida después de 1900, más o menos. Gran número de escritores serios hicieron suyos los temas «criollos» (rurales, regionales, a veces explícitamente sociales) como una forma de reaccionar contra los modelos europeos que habían predominado en la algo anémica literatura de los primeros tiempos. De cualquier forma, el «criollismo» quizá sea la tendencia cultural general más fácilmente identificable desde comienzos de siglo. En las décadas de 1900 y 1910, Baldomero Lillo y Mariano Latorre inventaron, por decirlo así, el cuento chileno, una forma muy cultivada desde entonces; y, en la década de 1920, un novelista realmente notable, Eduardo Barrios, dejó su huella (aunque su obra maestra, *Gran señor y rajadiblos*, se publicó en 1948). Esta novela se sitúa en la línea «criollista», aunque dicha tendencia haya desaparecido en cierta medida alrededor de la década de 1930.

La reputación de los prosistas chilenos en el mundo de habla hispana, sin embargo, ha tenido por lo general una importancia menor que la de sus compatriotas poetas, y esto sin duda es correcto para la primera mitad del siglo XX. Es difícil decir por qué la poesía formó parte tan importante del logro cultural chileno. Quizá, a este respecto, Chile sí sea la Inglaterra de Suramérica. Los ingleses suelen ser vistos como el pueblo más flemático de Europa; no obstante, su tradición de poesía lírica es con diferencia la mejor del mundo occidental. Los chilenos, por su parte, a menudo han sido calificados (correcta o inco-

rectamente) como el pueblo más flemático de América Latina. ¿Podría ser que en ambos casos la poesía sea una válvula de escape necesaria? ¿Quién sabe? Sea cual sea la razón, la historia chilena es muy clara al respecto. Debemos destacar aquí figuras cuya celebridad es genuina y justificable. Vicente Huidobro publicó sus primeros poemas en 1911, a los dieciocho años; su estética «creacionista» pronto le valdría un lugar reconocido, tanto en Europa como en la América hispana. Esos años vieron aumentar también sostenidamente la fama de la joven Lucila Godoy Alcayaga, una profesora de escuela de Vicuña, en el Valle de Elqui, cuyos versos comenzaron a causar impresión en la década de 1910. Tomando los nombres de dos de sus poetas favoritos (el italiano Gabriele d'Annunzio y el provenzal Frédéric Mistral), construyó elseudónimo con el cual sería conocida por la posteridad: Gabriela Mistral, una de las glorias de Chile, «Presidenta y bienhechora / de la lengua castellana», como otra gran figura, Violeta Parra, la describiría a su muerte en 1957. Mistral vivió gran parte de su vida en el extranjero, en el servicio consular, y en 1945 fue la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Uno de los estudiantes del Liceo de Temuco, donde ella trabajaba como directora en 1920, era el hijo de un empleado ferroviario llamado Nefalí Reyes. Ella le dio a leer a Tolstoi y Dostoievski. El muchacho, como es de conocimiento público, también adoptó luego un seudónimo, tomando el nombre de un escritor checo del cual nada sabía: Neruda.

La tendencia «criollista» también se vio bien reflejada en la pintura. Aquí, dos valiosas figuras cabalgaron sobre los años previos y posteriores a 1900: Pedro Lira, quien suele ser descrito como «el primer maestro chileno» y se ubica en la tradición académica (paisajes románticos, personajes rurales, retratos de personas de la clase alta), y el impresionista Juan Francisco González, diez años menor y un artista singularmente prolífico, quien desarrolló lo que podría llamarse una versión chilena del impresionismo. La tendencia «criollista» como tal, sin embargo, fue desarrollada de manera evidente por un grupo de pintores más jóvenes, generalmente conocidos como la «generación de 1913» (año en que se establecieron). Hay que señalar que este período también vio la primera generación de escultores chilenos de un gran y genuino talento.

Otro signo del nuevo interés en lo «criollo» y en lo local, fue el esfuerzo que se llevó a cabo en esos años por investigar la poesía folclórica y las tradiciones populares en general (Julio Vicuña Cifuentes y Ramón Laval fueron verdaderos precursores en este sentido). Esfuerzos similares con respecto a la música folclórica tuvieron directa influencia en lo que puede verse como la primera generación de compositores chilenos serios; especialmente Pedro Humberto Allende, el respetado pionero de la música moderna en el país, cuyas primeras obras aparecieron en la década de 1910. La partitura de su concierto para chelo fue aplaudida por Debussy. En la década de 1930, surgieron varias figuras importantes, entre ellas Próspero Bisquertt y Carlos Isamitt, quienes, como Allende, fueron «nacionalistas» musicales, mientras que el miembro más notable del grupo, Domingo

Santa Cruz, como su sobrenombre indica («el Hindemith chileno»), asimiló provechosamente las influencias europeas modernas.

SÍNTOMAS DE LA DECADENCIA NACIONAL

Cierta cantidad de escritores que aparecieron a comienzos del siglo xx (Baldomero Lillo, Mariano Latorre, Nicomedes Guzmán, Joaquín Edwards Bello, Fernando Santiván) llamaron la atención sobre las miserables condiciones sociales, retratando a menudo en sus escritos al «roto», al minero, al trabajador urbano. En este sentido resulta interesante que algunos intelectuales de esa época comenzaron a opinar sobre el curso reciente de la historia chilena en su totalidad. Apareció entonces lo que a veces se ha dado en llamar una «literatura de la decadencia nacional». El tono de esos escritos fue dado por un notable discurso enunciado por el político radical Enrique MacIver en una velada largamente recordada en el club del Ateneo de Santiago (1 de agosto de 1900). «Me parece que no somos felices», dijo, «se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones [...] El presente no es satisfactorio, y el porvenir aparece entre sombras». MacIver deploró lo que le parecía una decadencia del espíritu público, que contrastaba con la energía y voluntad de servicio público de los caudillos chilenos anteriores. Según él, la gran riqueza proveniente del salitre había sido «un torrente devastador que [...] arrastró con las virtudes públicas que nos engrandecieron»²⁸. MacIver no ofrecía soluciones muy concretas ante la «crisis moral» que bosquejaba con tanta elocuencia y, de hecho, la mayoría de los escritores a quienes dirigió sus palabras eran mejores en el diagnóstico de los males que en la prescripción de las curas.

Es posible asociar con esta tendencia a un buen número de escritores. Algunas de sus figuras más representativas, como Nicolás Palacios, autor de *Raza chilena* (1904), o Francisco Antonio Encina, apelaron a ideas racistas; aunque diagnosticaron hábilmente lo que antes veíamos como las flaquezas de la clase alta: su complacencia con un consumismo evidente, su claro desinterés por ocupar sus energías en el trabajo industrial o comercial, su desprestigio por las clases trabajadoras. La obra más apasionada en esta línea fue *Sinceridad. Chile íntimo en 1910*, escrita por un profesor de colegio de provincias, el «Dr. Julio Valdés Cange» (Alejandro Venegas), entonces de 39 años. Había viajado a lo largo y ancho de Chile, recopilando sus impresiones, mientras crecía su enojo ante el estado de su patria bienamada:

Tenemos ejércitos, buques y fortalezas, ciudades y puertos, teatros e hipódromos, clubes, hoteles, edificios y paseos públicos, monumentos, y [...] magnates opulentos, dueños de

²⁸ «Discurso sobre la crisis moral de la República», reimpreso en Hernán Godoy (ed.), *Estructura social de Chile*, 1971, págs. 283-291.

verdaderos dominios, que viven en palacios regios [...]; pero no a mucha distancia de los teatros, jardines y residencias señoriales, vive el pueblo, es decir las nueve décimas partes de la población de Chile, sumido en la más espantosa miseria económica, fisiológica y moral, degenerando rápidamente bajo el influjo del trabajo excesivo, la mala alimentación, la falta de hábitos de higiene, la ignorancia extrema, y los vicios más groseros»²⁹.

Muchos de los dardos lanzados por Venegas y otros escritores daban en el blanco. Hay gran cantidad de pruebas que demuestran que la clase alta chilena del período parlamentario gastaba sin mesura. Largos viajes a Europa (algunos de ellos, en 1910, aparecen con un costo de más de 20.000 libras esterlinas tan sólo en hoteles); lujosas mansiones en la ciudad y (a veces) en el campo; coches y carruajes y, después, automóviles; un consumo enorme de comida y bebida: para la clase alta, sin duda, ésta fue una especie de *Belle Époque*, descrita con mucha propiedad en la novela de Luis Orrego Luco *Casa grande* (1908). Durante la misma época, este estilo de vida no era raro en Europa y la clase alta chilena continuó viendo al Viejo Continente como el paradigma del buen gusto y la sabiduría. Hasta cierto punto, esto era inevitable, pero la preferencia por lo extranjero frente a lo local, a menudo —demasiado a menudo—, implicaba el desprecio por lo local. Una de las mayores virtudes de la literatura de la decadencia fue su fe en los méritos de lo local, en las potencialidades de los chilenos comunes.

Las acusaciones contra la clase alta fueron las acusaciones inevitables contra la República parlamentaria, última etapa del régimen genuinamente oligárquico en Chile. En este sentido, es importante recordar que los gobiernos no eran totalmente indolentes. Los treinta años posteriores a la caída de Balmaceda vieron la impresionante construcción del ferrocarril «longitudinal» (en 1913 era posible viajar de Iquique a Puerto Montt en tren). Asimismo hay que reconocer que, a pesar de algunos lapsus terribles, la República parlamentaria resguardó las libertades liberales, hasta tal punto que un historiador moderno, Julio Heise González, aún puede describirla como una «magnífica escuela de civismo para el pueblo chileno»³⁰. Mucho se puede decir sobre este asunto. Al mismo tiempo, es difícil estar en desacuerdo con el veredicto de Harold Blakemore sobre los líderes parlamentarios: «serán condenados [...] en su evidente incapacidad no tanto para reconocer una sociedad en transición, ya que la mayoría estaban conscientes de los cambios que estaban ocurriendo, sino para reformar sus instituciones respondiendo a ellos»³¹. Sin duda, un sistema político más fuerte y coherente podría haber sido capaz de legislar con mayor efectividad sobre la «cuestión social». Resulta interesante comparar esta situa-

²⁹ *Sinceridad*, 1910, pág. 250.

³⁰ *Historia de Chile. El período parlamentario, 1861-1965*, 2 vols., vol. I, 1974-1982, pág. 271.

³¹ Leslie Bethell (ed.), *Cambridge History of Latin America*, vol. V, Cambridge, 1986, pág. 553.

ción con la de Argentina. Durante el mismo periodo, los políticos estaban mucho más polarizados allí que en Chile, sin embargo, la legislación social fue más global. Como señaló Karen Remmer: «en todas las áreas más importantes, las políticas públicas argentinas mostraron mayor apoyo para los grupos menos privilegiados que las políticas chilenas».³²

Relaciones internacionales

El curso de las relaciones internacionales, también, parece confirmar la decadencia de la fortuna chilena. En octubre de 1891, un incidente a la salida del *True Blue Saloon* en Valparaíso arrojó a una airada multitud contra unos matinos norteamericanos del *USS Baltimore* que disfrutaban de un permiso. Dos murieron; otros fueron golpeados o arrestados. El gobierno norteamericano exigió una disculpa y una compensación. El presidente Benjamin Harrison, enfurecido por un insolente cable del ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Antonio Matta, emitió lo que a los chilenos les pareció un ultimátum. Durante unas pocas semanas, la perspectiva de una guerra pareció muy verosímil. No obstante, ésta rápidamente se desvaneció. Matta fue reemplazado y el gobierno ofreció sus disculpas y aceptó pagar las reparaciones correspondientes —en lo que un secretario de la legación norteamericana llamó «una carta muy humillante para este orgulloso pueblo».³³.

Con Argentina, los problemas fueron más serios. En el tratado de 1881, se había acordado que la frontera entre los dos países debía seguir la línea de las más altas cumbres andinas y la divisoria de aguas entre el Atlántico y el Pacífico. A comienzos de la década de 1890, estaba claro que las líneas de cada país no siempre coincidían. El asunto se complicó aún más con las discusiones sobre Puna de Atacama, territorio boliviano ocupado por Chile en la guerra del Pacífico y que Bolivia le había cedido unilateralmente a Argentina (diciembre de 1895). En abril de 1896, Chile aceptó la concesión sobre la base de que Argentina aceptaría la mediación británica como última palabra en el tema de la frontera. Sin embargo, no se logró avanzar en lo relativo a delinear la frontera y, a mediados de 1898, la fiebre de la guerra se estaba extendiendo tanto en Chile como en Argentina. Ambos países habían entrado abiertamente en una carrera armamentística, ordenando nuevos buques de guerra a los astilleros europeos. Los presidentes de Chile y Argentina se alzaron por encima de la bellicosidad de la opinión pública y resolvieron el asunto en poco tiempo con un encuentro de plenipotenciarios. Para reforzar simbólicamente el acuerdo, ambos zarparon hacia Punta Arenas para una reunión amistosa (febrero de 1899) —el tan celebrado *Abrazo del Estrecho*—. Esto tuvo pocas consecuencias en

³² *Party Competition in Argentina and Chile*, Lincoln, Neb., 1984, pág. 205.

³³ Joyce S. Goldberg, *The Baltimore Affair*, Lincoln, Neb., 1986, pág. 128.

los acontecimientos futuros. Los plenipotenciarios, en un encuentro dos meses después, acordaron aceptar la decisión del embajador norteamericano en Buenos Aires, William J. Buchanan, quien entregó la mayor parte de Puna de Atacama a Argentina. Para empeorar aún más las cosas, algunos incidentes menores en la frontera pronto volvieron a encender la fiebre de la guerra en Chile, que ordenó dos nuevos buques de guerra. Lo mismo hizo Argentina. Sus Marinas eran la sexta y la séptima de mayor tamaño en el mundo en esa época. Una complicada serie de iniciativas públicas y privadas lograron finalmente salvar la situación. Los «Pactos de Mayo» (firmados en Santiago el 28 de mayo de 1902) comprometían a las dos naciones a buscar arbitrio en caso de futuras disputas y a limitar el armamento naval. Después, ese mismo año, el rey Eduardo VII emitió su fallo fronterizo: 54.000 kilómetros cuadrados para Chile y 40.000 para Argentina. La crisis había sido superada.

En 1904, se erigió en los Andes una gran estatua del Cristo Redentor, como muestra de la perpetua amistad entre los pueblos chileno y argentino. Ese mismo año (el 20 de octubre de 1904), Chile finalmente firmó un tratado de paz con Bolivia. El precio que tuvo que pagar por la propiedad del antiguo litoral boliviano fue la construcción de un ferrocarril de Arica a La Paz, que entró en funcionamiento en mayo de 1913.

Ni los Pactos de Mayo ni el tratado con Bolivia significaron un triunfo diplomático para Chile. Los términos del acuerdo con Bolivia eran bastante más generosos de lo que los bolivianos habrían creído posible en tiempos de la tregua de 1884. Y la paz perpetua con Argentina quedaba garantizada a costa de limitar formalmente la esfera de influencia chilena al Pacífico.

¿Qué había salido mal? ¿Qué le había pasado a la «república modelo», al país cuyos héroes habían ganado la guerra del Pacífico? Claramente, los síntomas de la decadencia nacional que ya hemos mencionado tenían una base real. Como hemos visto, el dedo acusador apuntaba, no pocas veces, a la clase alta, a los líderes nacionales. Y ahora tenemos que volcarnos finalmente en el expediente político del periodo parlamentario.

LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN PARLAMENTARIO

El retorno al gobierno constitucional tras la guerra civil de 1891 fue rápido. Las elecciones parlamentarias se llevaron a cabo en octubre de 1891 y el almirante Jorge Montt, líder de la Junta parlamentaria de 1891, ganó la Presidencia sin oposición. No era un político. Y estaba absolutamente dispuesto a darles a los verdaderos políticos un espacio —y ellos estaban absolutamente ansiosos de aprovechar su generosa postura—. Por ende, los partidos se convirtieron en los principales árbitros sobre quién debía estar en el gabinete. El control parlamentario se vio aumentado además por una serie de pequeñas enmiendas

constitucionales (1891-1893), una de las cuales ampliaba la idea de la «incompatibilidad» en forma muy global: desde entonces, ningún funcionario público podría ocupar un puesto en el Congreso y, así, el poder ejecutivo se vio privado de un arma que le había sido muy útil. La más importante nueva ley fue la de la «comuna autónoma» (diciembre de 1891); ésta eliminaba la supervisión central de las, aproximadamente, 200 municipalidades chilenas. A las comunas también se les dio el control de las elecciones, con consecuencias que no podemos dejar de señalar brevemente.

La «sagrada unión» entre liberales y conservadores, forjada durante la guerra civil y con la cual comenzó la presidencia de Montt, pronto se acabó. En lo que respecta a los derrotados balmacedistas, su retorno a la vida política no tardó. En un comienzo, para asegurarse, su persecución por parte del nuevo gobierno fue bastante dura. Algunos fueron asesinados. Otros (incluido José Toribio Medina) se exiliaron. La administración pública fue purgada: se suele dar la cifra de 5.000 despidos, aunque parece un poco alta. Sin embargo, el rencor que había surgido inmediatamente después de la guerra civil, pronto cedió: ya en la Navidad de 1891, hubo una amnistía parcial; dos más le siguieron en 1893 y una amnistía general final se produjo en agosto de 1894. Algunos atentados claramente aficionados fueron prevenidos en sus comienzos. En Talca, mientras tanto, los balmacedistas se organizaron en noviembre de 1893 en un nuevo partido político: el Partido Liberal Democrático, que obtuvo un éxito inmediato en las elecciones parlamentarias de marzo de 1894 (cuatro senadores y veintidós diputados). Rápidamente se asentaron como reconocidos actores de la escena política. Si hay algo que se pueda decir para diferenciar en adelante al Partido Liberal Democrático de los otros partidos, fueron sus insaciables ansias de ocupar cargos en la administración pública —comprensibles dada la purga de 1891—.

A medida que el mandato del almirante Montt llegaba a su fin, la competencia entre los partidos se hizo más intensa. Los partidos Radical, Liberal Demócrata y una parte del Partido Liberal eligieron al doctrinario y anticlerical Vicente Reyes como candidato (enero de 1896). Parte del Partido Liberal, junto con algunos disidentes radicales y liberal-demócratas, acordaron (en abril de ese mismo año) apoyar a Federico Errázuriz, hijo del presidente de la década de 1870. Apodado por sus enemigos «Errázuriz el chico» (como una analogía con Napoleón y Napoleón III), no había desarrollado hasta ese momento una carrera política destacada, aunque sí contaba con la vena manipuladora de su padre y comprendía intuitivamente de qué manera estaban cambiando las reglas del juego. Para ganar necesitaba el apoyo conservador. La amenaza de retirarse realizada en una llamada telefónica a Ramón Subercaseaux, prominente conservador, logró su objetivo. Los conservadores aceptaron la «Coalición» con los liberales de Errázuriz. Desde entonces, este término se usaría para designar a las agrupaciones políticas en que estuviera involucrado el Partido Conservador. Aquéllas en que no estuviera presente serían conocidas como

«Alianza» o «Alianza Liberal». El contrapunto Alianza-Coalición se mantendría como una constante en la política parlamentaria hasta 1920.

La elección de 1896 fue una dura pugna, con asomos de violencia y soborno. La incertidumbre sobre dos votos clave en el colegio electoral dejó la decisión en manos del Congreso. Se creó un «tribunal de honor» para establecer la validez de los votos electorales: éste le dio a Errázuriz una estrecha victoria, que fue debidamente ratificada por el Congreso. Tras la votación, los parlamentarios pro-Reyes realizaron un ostentoso abandono de la sala. Con este comienzo, los augurios para la nueva Presidencia no eran buenos. De hecho, aunque Errázuriz cambió doce veces de gabinete durante su mandato, logró mantener un tono coalicionista en la mayoría de ellos.

La presidencia de Errázuriz simplemente confirmó la forma y el fondo del sistema político que se estaba desarrollando. Las dudas sobre su eficacia ya habían sido expresadas. «Duro es confesarlo», escribió Francisco Valdés Vergara en 1894, «pero los hombres que hicimos la revolución con la mejor de las intenciones, hemos causado daños mayores que los bienes prometidos»³⁴. El papel de los partidos iba a ser fundamental en el nuevo régimen parlamentario. No hubo grandes fracturas ideológicas que los dividieran, salvo una importante excepción: la constante batalla entre el clericalismo y el anticlericalismo. El gran reducto del clericalismo era el Partido Conservador; mientras que el anticlericalismo, extendido en otros partidos, era, en su forma más doctrinaria, la bandera de lucha particular de los radicales, ya que muchos de ellos estaban vinculados a la masonería y, en muchos casos, al libre pensamiento. Las actitudes anticlericales y, de hecho, antirreligiosas se fueron extendiendo cada vez más en la clase alta, especialmente entre los hombres. Las mujeres eran harina de otro costal. El hecho de que el anticlericalismo también tuviera muchos seguidores entre el pueblo se aprecia en la excitación que despertó el cura renegado Juan José Julio Elizalde —conocido como el «papa Julio»—, cuya cautivante oratoria anticlerical lo implicó en una serie de escándalos menores durante la primera parte del siglo xx.

Esta continuación (a menor escala) de la «guerra religiosa» de tiempos de Santa María significó una serie de problemas en una infinidad de temas, la mayoría más bien triviales. Los radicales siguieron presionando por la separación de la Iglesia y el Estado. La educación fue un hueso especialmente duro de roer en estas discusiones: mientras los conservadores luchaban por mantener la independencia de las escuelas católicas, los anticlericales aspiraban con igual celo a que se implantara lo que ellos llamaban el «Estado docente» (la supervisión estatal de todo el sistema educativo). En parte, a esto se debe el extraordinario predominio del Partido Radical en la profesión pedagógica durante la primera mitad del siglo xx. Por lo mismo, la desconfianza de los conservadores fue una de

³⁴ Citado en Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos xx y xxi*, 1981, pág. 30.

las razones por las cuales el Congreso demoró tanto la legislación sobre la educación primaria obligatoria.

Con el cese en la «intervención» del ejecutivo después de 1891, las elecciones consistían ahora en una lucha de mayor amplitud y ferocidad, a pesar del limitado número del electorado. Esta vez, los partidos debían manipular el proceso como mejor pudieran. Las municipalidades, que controlaban las elecciones, se convirtieron de inmediato en el blanco de los políticos: emergieron entonces redes de jefes políticos locales, expertos indispensables en arreglar los registros electorales y en producir votos, mientras que, en el campo, los terratenientes hacían pleno uso de sus inquilinos en periodo de elecciones. Aunque una parte del electorado quedaba «cautivo» a través de estos procedimientos, otra parte no lo estaba y los sobornos se volvieron mucho más comunes que en los días de la intervención gubernamental. El precio de los votos seguía el mismo ritmo que la inflación. Algunas notas redactadas por el infatigable liberal Manuel Rivas Vicuña sobre la campaña de la Alianza en 1918, nos muestran la importancia que el dinero había adquirido entonces y cómo los políticos tomaban esto como un hecho.

Nos encontramos con que el candidato radical de Arauco, asustado ante la caja que aportaba don Francisco Huneeus, conservador, pensaba retirar su candidatura. En un rápido viaje a Santiago, le arreglamos un crédito y lo pusimos nuevamente en campaña [...] Desde Aconcagua, don Luis Claro nos anunció que sin un auxilio extraordinario de fondos no podría afrontar la lucha contra el presidente del Partido Conservador, don Alberto González Errázuriz, que le disputaba la senaduría [...] [Me] sorprendió un llamado urgente de San Fernando. El señor Valderrama no podía resistir la campaña del señor Lyon en Colchagua, y pedía otra ubicación [...] Logramos que el señor Valderrama entregara medio millón de pesos a don Ernesto Barros Jarpa, suma que éste llevaría en una maleta para dar un golpe de sorpresa contra el señor Ariztía en Ilanquihue. Las dificultades aumentaban en Cautín; el candidato radical Suárez se retiraba. La situación no era buena para el señor Valderrama en Ilanquihue, y el señor Barros Jarpa volvió con la maleta a Cautín, donde se proclamó el señor Valderrama en víspera de la elección³⁵.

En la década de 1910, los políticos que incurrían en grandes gastos fueron apodados *Dreadnoughts* («acorazados de combate»), en honor a los nuevos buques de guerra que se habían encargado últimamente para la Marina. No sorprende que en 1915 algún ocurrente sugiriera que el gobierno simplemente podría establecer «una casa al por mayor» para la compra y venta de votos³⁶.

³⁵ Citado en Gonzalo Vial, *Historia de Chile*, vol. I, tomo 2, 1981, pág. 590. En esa época, 500.000 pesos equivalían más o menos a 22.500 libras esterlinas o alrededor de 100.000 dólares.

³⁶ *El Mercurio*, 28 de julio de 1915.

Si bien el soborno electoral era una constante parlamentaria, también lo era la «corrupción burocrática»: los partidos exigían su cuota de cargos en la creciente administración pública. Los radicales y los liberal-demócratas eran especialmente celosos a este respecto: el precio explícito de la presencia balmacedista en la Coalición de tiempos de Errázuriz fue el 10% de todos los cargos públicos. Resulta mucho más difícil determinar en qué medida, en las más altas esferas de la política, los parlamentarios y los ministros explotaban su posición para obtener ganancias personales o en los negocios: la creencia de que esto ocurría estaba muy extendida, pero el Congreso generalmente se negaba a investigar casos específicos.

En 1908, un académico norteamericano comparó al Chile parlamentario con la Inglaterra del siglo xviii. «Aquí también», escribió, «una aristocracia de cuna y de riqueza detenta el control indiscutible de la vida social y política»³⁷. El paralelo es apropiado y atractivo, pero políticamente induce a error. Un ministro del Interior chileno no tenía la autoridad de un primer ministro británico. La duración de los gabinetes ingleses del siglo xviii se medía en años, la de los ministerios chilenos en meses y, a veces, en semanas. Las divisiones dentro de los partidos eran endémicas; y las mayorías estables en el congreso, imposibles. Fue esto, más que cualquier otra cosa, lo que convirtió esta composición de gabinetes en un foco de interés tan obsesivo para los políticos parlamentarios. Dada su indisciplina y su tendencia al fraccionamiento³⁸, el Partido Liberal, a menudo considerado el pivote de la política chilena del periodo, era difícilmente un pivote sólido.

Federico Errázuriz murió en julio de 1901, antes de finalizar su mandato. La convención de la Alianza de 1901, que debía designar al próximo candidato, no eligió a ninguno de los principales contendientes, sino a un juez, Germán Riesco. En lo que parece haber sido una elección tranquila, éste derrotó fácilmente al candidato de la Coalición, el nacional Pedro Montt.

RIESCO, MONTT Y LA «CUESTIÓN SOCIAL»

El presidente Riesco, cuñado de Errázuriz, era un hombre de carácter recto con una fuerte inclinación por los asuntos domésticos. En cierto sentido, era el presidente parlamentario ideal: alguien que, en una frase que se le suele atribuir, no era «una amenaza para nadie»³⁹.

³⁷ Paul S. Reinsch, «Parliamentary Government in Chile», *American Political Science Review*, vol. III, 1908-1909, págs. 507-508.

³⁸ La principal división interna era entre los «moderados» y los «doctrinarios»; estos últimos eran más anti-clericales.

³⁹ Lo que realmente dijo fue que la «unificación de los partidos liberales» no era una amenaza; la memoria pública simplificó la frase.

Riesco no tenía mucho interés en influir en la composición de los gabinetes; durante sus cinco años de mandato, hubo diecisiete gabinetes y el péndulo oscilaba entre la Alianza y la Coalición. A estas alturas, comenzó a producirse cierta intranquilidad creciente entre los círculos políticos por la forma en que se estaba comportando el régimen parlamentario, intranquilidad que a menudo se reflejaba en la prensa. Como comentó cáusticamente *El Mercurio* en 1903: «no es parlamentarismo, ni es un régimen, sino la anarquía más desenfundada por la dictadura irresponsable de unos 150 congresales».⁴⁰

La idea de un «hombre fuerte», un caudillo que pudiera controlar la inestabilidad ministerial, comenzó a ejercer un atractivo indudable. El hombre obvio para ese papel era Pedro Montt, hijo del siempre recordado «hombre fuerte» de la década de 1850. En 1906, Montt se granjeó el apoyo entusiasta de su propio Partido Nacional, de la mayoría de los liberales, de los radicales e incluso de algunos disidentes conservadores. Su victoria en las elecciones fue avasalladora. Sin embargo, las semanas previas al traspaso del mando se vieron marcadas en forma indeleble por una horrenda catástrofe nacional. En la tarde del 16 de agosto de 1906, un violento terremoto sacudió toda la zona central de Chile y destruyó Valparaíso. Al menos 2.300 personas perdieron la vida. Para el nuevo gobierno, el desastre significó una carga financiera poco bienvenida. También constituyó un golpe del cual Valparaíso nunca logró recuperarse del todo. El segundo golpe, la apertura del Canal de Panamá, se produciría ocho años después.

Pedro Montt, en quien se habían puesto muchas esperanzas, fue un hombre honesto, trabajador y no demasiado ocurrente. «Más estadístico que estadista», lo calificaron en algún sitio. Su administración fue tan enérgica como lo permitieron los tiempos. Sin embargo, muy pronto él también se vio atrapado en las complejidades partidarias y ministeriales que habían acosado a sus predecesores y no encontró ninguna manera de revertir la situación. Al igual que Errázuriz, fue víctima de una salud débil. Por ende, un nuevo intento medianamente serio de la República parlamentaria por autorregenerarse quedó en nada.

La situación era bastante trágica, pues el gobierno se enfrentaba entonces a dilemas urgentes. La primera década del nuevo siglo estuvo marcada por perturbadores síntomas de intranquilidad social. Obviamente sería ingenuo decir que la «cuestión social», como siempre se la llamó, «emergió» de pronto durante esos años. La brecha entre los ricos y los pobres siempre había existido. La difícil situación de los pobres en las ciudades y en el campo por igual estaba llamando algo la atención desde, al menos, la década de 1870. Lo que agudizó la «cuestión» en la primera década del nuevo siglo fue que los mineros del salitre y los trabajadores urbanos ya no estaban dispuestos a seguir esperando más que sus superiores remediaran sus problemas. Hasta 1914, los gobiernos parlamentarios sólo habían aprobado dos leyes referentes a temas sociales: la de febrero

⁴⁰ 25 de diciembre de 1903.

de 1906, que creaba el Consejo de Habitaciones Obreras (que Alejandro Venegas denunció como una organización de papel) y una medida que establecía una semana laboral de seis días, lo cual tampoco era obligatorio para todos los trabajadores.

La nueva clase trabajadora, mientras tanto, había empezado a organizarse. En 1910 había más de 400 organizaciones mutualistas. Con el comienzo del siglo, sin embargo, comenzaron a aparecer sindicatos de trabajadores de aspecto más moderno—primero entre los trabajadores metalúrgicos, los empleados ferroviarios, los conductores de tranvías y los tipógrafos—. En diversas ciudades, comenzando por Iquique en 1900, los sindicatos y las sociedades mutualistas se unieron para formar las «mancomunales». Muchos de estos primeros sindicalistas estaban influidos por las ideas anarquistas. Los empleadores y los políticos podían hablar de «agitadores foráneos», pero el nuevo movimiento laboral surgió en gran medida en el suelo nacional. Entre 1902 y 1908, un período de fuerte crecimiento sindical, hubo alrededor de 200 huelgas, de las que casi la mitad fueron ganadas por los sindicatos involucrados⁴¹. No obstante, el desafío planteado por la huelga general de mayo-junio de 1907 en Santiago y Valparaíso fue un fracaso y el movimiento obrero decayó por un breve período.

Los gobiernos parlamentarios trataron de mantenerse al margen de estas luchas entre los trabajadores y los empleadores. Sin embargo, tendieron a considerar los movimientos a gran escala (especialmente si iban acompañados por manifestaciones masivas) como rebeliones incipientes y, a veces, reaccionaron brutalmente ante ellos. En mayo de 1903, los estibadores de la *Pacific Steam Navigation Company* y otros trabajadores portuarios, en huelga en Valparaíso, trataron de impedir que los «esquiroleros» ocuparan sus puestos. Estalló una pelea de considerables dimensiones, la cual fue reprimida por la Marina y el Ejército con la pérdida de un centenar de vidas. En octubre de 1905, le llegó el turno a Santiago. Una reunión de protesta por el elevado precio de la carne degeneró en una orgía de saqueos e incendios. Dado que el Ejército se encontraba lejos haciendo maniobras, el orden debió ser restablecido por las doce compañías de bomberos de la ciudad y unos 300 «guardias blancos» de la clase alta, armados por el gobierno con rifles. Hubo aproximadamente 200 víctimas mortales. En Antofagasta, en febrero de 1906, los marinos se cobraron otro tributo en vidas durante una huelga de los empleados ferroviarios. El episodio más terrible ocurrió en Iquique en diciembre de 1907, donde miles de trabajadores del salitre en huelga (y sus familias) convergieron en el puerto en forma sumamente ordenada y digna, buscando alivio para sus males. La ciudad se paralizó. Dos cruceros zarparon rumbo al norte y el comandante militar local, el duro general Roberto Silva Renard, ordenó el ataque (con ametralladoras) en la escuela Santa María, donde los huelguistas habían sido concentrados. La cantidad de muertos sumó varios cientos. Un comité investigador fue propuesto por el Congreso, pero nunca fue nombrado.

⁴¹ *Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927*, Madison, Wis., 1983, pág. 279.

Los trabajadores anarquistas evadían la acción política (a diferencia de los sindicatos). Por su parte, quienes compartían enfoques socialistas se mostraban más inclinados a insertarse en el sistema político. Dos ínfimos partidos socialistas aparecieron a finales de la década de 1890. El Partido Democrático (fundado en 1887) se fue ganando consistentemente el apoyo del artesanado y, por un tiempo, pareció el hogar natural para los militantes sindicalistas, quienes por unos pocos años constituyeron su ala «avanzada». Entre tales demócratas, ninguno fue más notable que Luis Emilio Recabarren, un tipógrafo nacido en Valparaíso, cuyas incansables actividades organizativas al norte y al sur de Chile (y cuyos contactos con el extranjero) le ganaron una posición única en los inicios del movimiento obrero. En 1906, fue elegido para el Congreso como diputado por Tocopilla: se negó a realizar el juramento oficial y fue excluido. Al cabo de algunos años, Recabarren llegó a creer en la necesidad de contar con un partido propio para la clase trabajadora. En junio de 1912, rompió finalmente con los demócratas y formó el nuevo Partido Obrero Socialista, cuyas «seccionales» gradualmente se fueron extendiendo a lo largo del país.

Estos fueron algunos de los portentos sociales que estaban ocurriendo cuando, en septiembre de 1910, los chilenos celebraron el centenario de su Independencia. Pedro Montt había muerto recientemente en un viaje a Europa. Para colmo de males, el vicepresidente que debía sucederlo también murió. Recayó entonces en el segundo vicepresidente, Emiliano Figueroa Larraín, presidir las fastuosas ceremonias. Fuegos artificiales, paradas, noches de gala en la ópera, carreras de caballos, el primer avión que sobrevolaba Santiago, el nuevo Palacio de Bellas Artes —las escenas del año del centenario serían recordadas por mucho tiempo—. Sin embargo, ni siquiera el centenario pudo interrumpir el curso de la política parlamentaria. En la convención de la Alianza realizada en septiembre para designar a su candidato, las esperanzas del «promotor de reyes» liberal-demócrata Juan Luis Sanfuentes fueron echadas por tierra por la candidatura rival del dinámico y joven magnate empresarial y financiero Agustín Edwards. Sanfuentes echó por tierra a su vez a Edwards. Hubo que acordar entonces una candidatura compartida y fue designado Ramón Barros Luco, de 75 años de edad. Los conservadores le enviaron inmediatamente una carta de apoyo. Por primera vez desde 1891, un presidente chileno era elegido sin oposición. La «regua de los partidos» fue muy aplaudida, pero a su modo era un símbolo patente del extraño vacío que se había producido en la política parlamentaria.

LA DECADENCIA DE LA REPÚBLICA PARLAMENTARIA

Ramón Barros Luco ocupa un lugar especial en la memoria del pueblo chileno por dos razones. Le dio su nombre a un popular sándwich, que él pidió en la Confrería Torres, un café en la Alameda (que aun existe). Y también se atribuye a Barros Luco una frase

famosa: «hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución». Barros Luco tenía un estilo sencillo y solía verse por las tardes paseando con su esposa por el Parque Cousiño. No se esperaba que este anciano patricio (el chileno de más edad en convertirse en presidente) llevara a cabo grandes iniciativas.

Los cinco años de Barros Luco no fueron tan sólo un período en el que se marcó el paso del tiempo. La indignación por la expansión de la corrupción política se hacía cada vez mayor y se movilizó oportunamente una nueva Liga de Acción Cívica, formada por miembros de diversos partidos y que presionó al Congreso para que dictara una reforma. En 1914-1915, se introdujeron cambios en la Ley electoral que impidieron el control electoral de las municipalidades: desde entonces, los registros electorales debían compilarse nuevamente cada nueve años, lo que reducía las posibilidades de que fueran falsificados.

En este punto, las disputas políticas se vieron ensombrecidas por la espantosa catástrofe de la *Gran Guerra* en Europa. Chile, donde las simpatías por los poderes aliados y los Imperios centrales mantuvieron cierto equilibrio, permaneció neutral durante toda la guerra. El país, por supuesto, se encontraba lejos de la batalla, pero en una ocasión, la lucha se acercó peligrosamente. El 1 de noviembre de 1914, a unos sesenta kilómetros mar adentro cerca de Coronel, buques de guerra británicos y alemanes pelearon su primera gran batalla naval (derrota británica que fue vengada ferozmente cinco semanas después en las islas Falkland). Tanto Gran Bretaña como la Alemania imperial violaron la soberanía territorial chilena: en un momento en que no había buques de guerra chilenos en la zona para resguardar las reglas de la neutralidad⁴², el cruceiro ligero alemán *Dresden* fue acorralado (el 14 de marzo de 1915) por los británicos en Más Afuera (archipiélago de Juan Fernández) y fue echado a pique. Los británicos se disculparon; los alemanes, no.

Los lectores de los periódicos chilenos (podemos presumir casi con certeza) encontraban el curso de la guerra mucho más fascinante que el eterno ballet de la política parlamentaria, pero el ballet siguió imperturbable. Con las elecciones presidenciales de 1915, Juan Luis Sanfuentes se presentó finalmente a la pelea como candidato de la Coalición. El «promotor de reyes» se convirtió en rey. No fue una victoria fácil: entre los electores tenía un margen de un voto a su favor respecto de su rival de la Alianza, pero el Congreso ratificó su posición por 77 votos contra 41. La Presidencia, diría después, le brindó pocos momentos de placer. La política parlamentaria estaba peor que nunca: Sanfuentes tuvo diecisiete gabinetes; su duración promedio fue de tres meses y medio. El mismo

⁴² Al *Dresden* no se le permitió permanecer más de veinticuatro horas en un puerto neutral y excedió el límite: a los británicos no se les permitió atracar. Uno de los oficiales del *Dresden* que posteriormente escapó del internamiento en Chile (en la isla Quiriquina, bahía de Talcahuano) fue el teniente Wilhelm Canaris, luego almirante y jefe de la Inteligencia alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ejecutado por conspirar contra Hitler.

favoreció los ministerios de la Coalición y, en su mayoría, los obtuvo hasta las elecciones parlamentarias de 1918, en que la Alianza hizo notables progresos—demasiados para disgusto de Sanfuentes—.

La República parlamentaria se estaba descomponiendo rápidamente. Había muchos indicios de que Chile se aproximaba a una coyuntura de cierto tipo. Algunos de éstos eran obvios, incluso para los políticos. La convención de la Alianza de 1915, por ejemplo, atrajo más representantes de los principales partidos que nunca antes. «La blusa del artesano, la corbata vistosa del asambleísta radical, el zapato tosco del agricultor, y el bastón recio del agente electoral», como señaló Rivas Vicuña⁴³, se desplegaron en su máximo esplendor. En las elecciones de 1918, tanto los radicales como el Partido Democrático respaldado por el artesano consiguieron logros impresionantes. Los radicales se convirtieron en la mayor delegación de la Cámara (con 32 diputados). Parte de su éxito se puede atribuir al hecho de que muchos radicales se veían a sí mismos cada vez más como parte de la clase media.

La clase media, no obstante, claramente heterogénea en su naturaleza, en realidad no podía ser movilizada igual que el movimiento obrero. Después de 1917, los sindicatos gozaron de un rápido crecimiento, con el correspondiente aumento en las huelgas (más de 130 entre 1917 y 1920). En 1919, se creó una división chilena de la organización sindical industrial *Industrial Workers of the World* (IWW, Trabajadores industriales del mundo), la cual cobró especial fuerza en Valparaíso. De mayor importancia a largo plazo fue la Federación de Obreros de Chile (FOCH), organización ampliamente mutualista fundada en 1909 por un abogado conservador. Las antiguas mancomunales del norte, timoneadas con mano experta por Luis Emilio Recabarren y su POS, comenzaron a asumir entonces el control de la FOCH, que en 1919 era de carácter predominantemente socialista (aunque de ninguna manera exclusivamente socialista). A estas alturas, resulta imposible pasar por alto los importantes efectos de la Revolución rusa de 1917 y el triunfo de los bolcheviques. Las repercusiones se dejaron sentir en todo el mundo: en Chile, como en muchos otros lugares, los trabajadores estaban entusiasmados y alentados por estos acontecimientos que marcaron toda una época.

Los trabajadores no estaban totalmente faltos de aliados. También los estudiantes se estaban volviendo cada vez más radicales en sus posturas externas. La FECH (Federación de Estudiantes de Chile, fundada en 1906) no tenía originalmente un tinte muy reformista, aunque se había mostrado capaz de desplegar su militancia en varias ocasiones notables. A finales de la década de 1920, sin embargo, la FECH apoyó activamente las demandas de la clase trabajadora y expresó su solidaridad con los sindicatos durante una huelga general de un día realizada en Santiago en septiembre de 1919.

⁴³ *Historia política y parlamentaria de Chile*, 3 vols., vol. I, 1964, pág. 550.

Se produjo entonces una causa para las manifestaciones de descontento social: el fin de la Primera Guerra Mundial y la aguda recesión a la que dio paso inmediatamente. Galvanizadas por la crisis, las protestas de la clase trabajadora alcanzaron nuevos hitos: con el fin de reclamar por el elevado precio de los alimentos (se dice que los porotos se habían vuelto «casi un artículo de lujo»⁴⁴), una Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, formada rápidamente para representar a la mayoría de las divisiones del trabajo organizado, realizó una enorme manifestación en Santiago en noviembre de 1918, a la cual siguieron reuniones masivas en otras ciudades. El gobierno respondió poniendo en vigencia una nueva Ley de Residencia que permitía a las autoridades deportar a los agitadores extranjeros (unos cuantos lo fueron) e imponiendo (en febrero de 1919) un estado de sitio de dos meses en Santiago y Valparaíso, el primero en veinticinco años. Sin embargo, quienes protestaban no cesaron y continuaron sosteniendo reuniones masivas. Desde ese momento, el movimiento obrero sería un actor permanente en la escena chilena.

Aun quedaba por ver si el sistema político podía adaptarse con éxito a las presiones sociales que se habían constituido tan claramente después de 1918. Los partidos Radical y Demócrata canalizaban parte del descontento, sin duda, pero todavía se necesitaba algo más. ¿Podía encontrarse un líder que encarnara al mismo tiempo las esperanzas confusas y contradictorias de la clase media y de la clase trabajadora en Chile?

Probablemente nunca (antes de marzo de 1915) se le hubiera ocurrido a Arturo Fortunato Alessandri, un fuerte pero convencional político parlamentario, elegido seis veces como diputado liberal por Curicó, que justamente él podía ser ese líder. En 1917, Alessandri (que entonces tenía 47 años) aceptó la designación como candidato para el Senado por Tarapacá. El distrito era claramente un bastión liberal-demócrata inexpugnable, administrado por un caudillo local clásico: Arturo del Río, abogado, empresario, propietario de un periódico y (desde 1909) senador. La campaña inusualmente dinámica de Alessandri estuvo marcada por la violencia (el mismo candidato llevaba una *Smith & Wesson*), pero también por un indudable brote de entusiasmo popular. Ganó con el 65% de los votos y, al regresar a Santiago, se le brindó una recepción triunfal. Desde entonces se le conocería para siempre como el «León de Tarapacá».

El éxito de Alessandri en 1915 lo había transformado en posible presidente. Ahora ya no mantenía en secreto sus anhelos y los promovió activamente durante un breve discurso como ministro del Interior tras el triunfo de la Alianza en las elecciones parlamentarias de 1918. Los liberales más tradicionales, que habían llegado a alabar el estilo apasionado de Alessandri, se retiraron de la Alianza en noviembre de 1919 para formar su propia Unión Liberal.

De esta manera, en 1920, se realizaron dos convenciones liberales para escoger can-

⁴⁴ *El Mercurio*, 15 de octubre de 1920.

El León y la mula, 1920-1938

didatos. La Unión Liberal (liberales, liberaldemócratas y nacionales) nominaron al caba-
llero Luis Barros Borgoño, sobrino del gran historiador Diego Barros Arana, en cuya
casa se había criado. Los conservadores le brindaron su apoyo y la Coalición recibió un
nuevo nombre: la Unión Nacional. La Alianza (liberales, radicales y demócratas) eligió a
Alessandri en la segunda votación. Su discurso de aceptación estaba imbuido de un vago
ardor reformista. Alessandri advirtió que (a diferencia de Riesco o Barros Luco) él sí sería
una amenaza —«para los espíritus reaccionarios, para los que resisten a toda reforma justa
y necesaria»—. Al día siguiente de su «proclama», la Unión Nacional colocó un aviso en la
prensa con el alarmante título de ANIBAL AD PUERTAS, acusando a Alessandri, en forma bastante
absurda, de «avanzadas tendencias comunistas». Los antiguos romanos no habrían dado
muestras de tal pánico. Este particular Aníbal, a diferencia del verdadero, alcanzó las
puertas y las cruzó.

Todavía soy el León [...], Ibáñez es la mula.

Arturo Alessandri, 1927

LA RESACA DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA DÉCADA DE 1920

El final de la Primera Guerra Mundial dislocó seriamente la economía chilena, poniendo a prueba un sistema político cuya eficacia era clara para muchos. Las dificultades de la posguerra dejaron al descubierto las limitaciones de la economía: sobredependencia en la producción de materias primas, políticas fiscales y monetarias inadecuadas, creciente inercia en la agricultura. Y las necesidades económicas combinadas con los trastornos políticos impulsaron finalmente tanto al Estado como a la economía por nuevos rumbos.

El efecto más terrible del armisticio fue la paralización de las salitreras. El *Nitrate of Soda Executive* de los aliados copó de pronto el mercado vendiendo sus existencias a muy bajo precio, lo que, a su vez, hizo disminuir los precios y las exportaciones. Aunque en 1920 ya habían comenzado a recuperarse, la producción y las exportaciones volvieron a caer en un 50% al año siguiente. Más de 10.000 mineros y sus familias se dirigieron a Santiago, infectando la ciudad con el virus de la desesperación —y la viruela—. El gobierno respondió como lo había hecho en el pasado, ofreciendo subsidios y comprando el excedente, mientras que las compañías creaban la Asociación de Productores de Salitre de Chile, que impuso cuotas para estabilizar los precios. Como resultado, los precios del salitre y, por ende, el empleo, aumentaron —por un tiempo—.

La producción de cobre también disminuyó en los primeros años de la posguerra, pero en este caso la tendencia principal era al alza: a finales de la década de 1920, la producción de la Gran Minería (responsable del 90% de todo el cobre producido) alcanzaba las 317.000 toneladas, aproximadamente el 16% del mercado mundial. Las minas de cobre, además, comenzaban a contribuir cada vez más a la economía chilena. En 1925, el gobierno gravó a las compañías con un impuesto del 6%. Dicho impuesto, junto con otro gravamen, aumentó la tasa tributaria para la minería del cobre al 12%. Además, las nuevas leyes de seguridad social puestas en vigencia también aumentaron las contribuciones reales que las compañías norteamericanas le hacían al gobierno central. De esta manera, quedaban en Chile más ganancias de la Gran Minería que antes.

La Primera Guerra Mundial significó un impulso que hizo prosperar incluso a los hacendados más indolentes. Tratando de llenar el vacío que las naciones europeas habían dejado al entrar en la guerra, los terratenientes se apresuraron a cultivar más tierra. El ímpetu se vio mermado en un comienzo por las dificultades que afectaban a los embarques marítimos y también por las nuevas restricciones que el gobierno había impuesto a las exportaciones con el fin de impedir la escasez a nivel nacional, prohibición que resultó nociva para el campo. El gobierno no pudo ser persuadido de rescindir la medida.

Aprovechando la inercia de la guerra, la producción agrícola aumentó entre 1920 y 1930 más que en la década anterior (la proporción de tierra cultivada subió en más de un 50%). La viticultura prosperó: la producción de vino y chicha subió a más del doble en la década de 1920 (a 327.800.000 litros). La ganadería floreció: la cantidad de ganado vacuno aumentó en un 10% y el ganado bovino, caprino y porcino tuvo un crecimiento aún mayor. Las cosechas básicas también obtuvieron buenos resultados, con significativas alzas, durante esta década, en la producción de cebada, maíz, papas y trigo, por tanto tiempo el producto principal. Las sembradoras, trilladoras, segadoras y cosechadoras empezaron a ser utilizadas cada vez más. En 1939, había más de 600 tractores en Chile.

Aun así, el dominio absoluto de los hacendados en el campo chileno parecía todavía tan fuerte que un veterano, el político Malaquías Concha, se lamentaba (en 1921): «no hay libertad posible si la tierra de todo un país pertenece a *un solo individuo o a un limitado número de personas*»¹. En el corazón del Valle Central, el 0,45% del total de las propiedades ocupaban más de la mitad de la superficie (52%). Este sistema de tenencia de la tierra tan poco equitativo parecía resistente a la modernización. La reforma agraria aún no había entrado seriamente en la agenda política. Los terratenientes no tenían por qué temer la competencia: el crecimiento de la población urbana garantizaba un mercado estable para sus productos. Bastaba con un pequeño esfuerzo e incluso pocas inversiones de capital para que las haciendas produjeran ganancias.

Habiendo prosperado y florecido durante la guerra, los industriales chilenos buscaban consolidar sus recientes logros. Presionaron a las autoridades para modernizar las carreteras, extender el sistema ferroviario y agrandar los puertos. También persuadieron al gobierno para que aumentase los impuestos a las importaciones. En 1921, el Congreso elevó los aranceles de las mercancías importadas en un 50% y gravó con impuestos especiales (a veces de hasta un 100%) ciertos artículos específicos. La industria manufacturera creció a pasos agigantados entre 1920 y 1928, con aumentos significativos en la producción de textiles, zapatos y bebidas. De hecho, a finales de la década de 1920, los fabricantes chilenos producían tanta maquinaria como bienes de consumo.

La propensión del gobierno a pedir préstamos se intensificó tras la Primera Guerra

¹ *El Mercurio*, 15 de mayo de 1921. En cursivas en el original.

Mundial. Entre 1891 y 1924, la deuda de La Moneda había aumentado en un 300%². Entre 1920 y 1922, las deudas externa e interna alcanzaban los 6 millones de libras esterlinas y los 200 millones de pesos, respectivamente. Hipotecar a las futuras generaciones de esta manera podría haber sido razonable si los gastos hubieran beneficiado de alguna forma a la nación, pero una enorme proporción del dinero prestado, a veces el 40%, servía para pagar los salarios y las pensiones de los burócratas. En 1924, el Congreso finalmente aprobó un impuesto sobre la Renta, cuyo monto variaba según la profesión o el oficio. En 1925 se aprobó otro impuesto, el Global complementario, que recargaba (en 0,05%-0,70%) los impuestos preexistentes. Al eximir a quienes ganaban menos de 10.000 pesos anuales, esta medida introdujo un vestigio de equidad en el sistema tributario.

A pesar de los logros de la agricultura y la manufactura, la economía chilena siguió estando sujeta a la explotación de sus recursos minerales. Esta peligrosa dependencia respecto de los mercados extranjeros quedó en evidencia con especial claridad debido a la aguda recesión que se produjo tras la Primera Guerra Mundial. Con el trasfondo de una intranquilidad social y un desempleo significativos, el país se enfrentó a su primera gran crisis política del siglo.

EL PRIMER PERIODO PRESIDENCIAL DE ALESSANDRI

Arturo Alessandri luchó con gran vigor en la elección presidencial de 1920. Sus dotes retóricos eran considerables. Fue, sin duda, el político chileno que ha estado más cerca de ser un «líder carismático», ya que podía manejar a una multitud como pocos lo han hecho. Uno de sus secretos era la inclusión de expresiones populares cuidadosamente colocadas en sus discursos (como cuando describió la clase alta chilena como «la canalla dorada» o a quienes lo apoyaban como su «querida chusma»). Sus discursos no se leen bien hoy día, si es que alguna vez lo hicieron. Su consigna repetida y muy poco original «el odio nada engendra, sólo el amor es fecundo» parece políticamente vacua, pero claramente emocionaba a quienes la escuchaban. Todo sucedía en el momento preciso. El hombre mismo seguía siendo polémico. Sin embargo, sea cual sea nuestro veredicto, su figura perduró más allá de su propia vida. Fue el líder electo que conservó el poder por más tiempo en la historia chilena.

Su asalto frontal a la República parlamentaria generó una excitación sin precedentes. El análisis de René Millar de la elección de 1920 muestra que, mientras las campañas parlamentarias tradicionales seguían su curso, importantes sectores de las clases media y trabajadora «se sintieron fuertemente atraídos por la personalidad de Alessandri y por la

² En el periodo 1870-1891, el aumento sólo había sido de un 60%.

orientación de su campaña, hasta el punto de identificarse con él y apoyarlo sin reservas.³ En este sentido, la «revuelta del electorado» resultó muy real en 1920. El resultado fue muy estrecho: Alessandri había ganado en el colegio electoral, pero se encontraba levemente atrás en el voto popular. Decidido a no verse despojado de su victoria, Alessandri siguió presionando a través de repetidas manifestaciones masivas, que la Unión Nacional vio como intimidatorias.

Esta extraordinaria elección aún iba a dar más sorpresas. Tres semanas después de la votación, se produjo una movilización general y se enviaron tropas al norte para enfrentarse a un inminente ataque de Bolivia —que nunca se materializó—. La opinión pública bautizó este acontecimiento como «la guerra de don Ladislao» (por el conservador Ladislao Errázuriz, entonces ministro de Guerra). ¿Se trataba de crear una distracción patriótica para la población ya excitada?⁴ Una multitud (incitada por los políticos de la Unión) asaltó la sede en Santiago de la FECH, organización inclinada a la acción pacífica. En Punta Arenas, las actitudes de los trabajadores en contra de la guerra llevaron a atacar y a quemar las sedes del sindicato, con la consiguiente pérdida de doce vidas.

Alessandri se negó a ser intimidado. Varios políticos (incluido Barros Borgoño) llamaron a mantener la calma. Se invocó el precedente de 1896 y se creó un tribunal de honor para revisar los votos electorales. A la larga, éste declaró que Alessandri tenía «mejor derecho» a ser presidente. El 23 de diciembre, ciñó la banda presidencial en medio de escenas de delirante entusiasmo público.

Sin embargo, fue un falso amanecer. Los muchos chilenos que habían puesto sus esperanzas en una legislación social y en una reforma constitucional inmediatas pronto se vieron tristemente decepcionados. Los antiguos usos eran resistentes y los hábitos parlamentarios estaban profundamente arraigados. Alessandri se veía enfrentado al obsecado obstruccionismo de los parlamentarios de la Unión Nacional, especialmente en el Senado. Por otra parte, su propia Alianza Liberal resultó menos coherente y maleable de lo que él hubiera querido. Las reglas parlamentarias no habían cambiado: el presidente tenía poco espacio para maniobrar. A pesar de sus primeros esfuerzos por mantener la continuidad ministerial, se vio obligado a reconstituir sus gabinetes casi tan a menudo como sus predecesores del período parlamentario. Las actas del Congreso no eran totalmente negativas: en 1923, se aprobó (en principio) la introducción de un impuesto sobre la Renta. Sin embargo, la legislación social no avanzó. Las leyes laborales presentadas por Alessandri en 1921 quedaron atrapadas rápidamente en los complejos procedimientos del Congreso.

³ René Millar C., *La elección presidencial de 1920*, 1981, pág. 213.

⁴ La guarnición de Santiago era en gran parte alessandrista, razón de sobra para trasladarla a otra parte; además, el coronel que sembró la alarma del irredento e imaginario ataque boliviano era también un ferviente partidario de Alessandri. Las memorias de Alessandri muestran que él mismo creyó después que la movilización había sido decretada de buena fe.

Cuando recurrió al electorado, Alessandri obtuvo pocos resultados: en las elecciones de marzo de 1921, la Alianza mejoró su posición en la Cámara de Diputados, pero no logró quebrar el fuerte predominio de la Unión en el Senado. Tres años después, el propio Alessandri rompió la tradición dirigiendo una fuerte campaña en el sur y recurriendo a ciertos usos del poder ejecutivo que recordaban los días de la «intervención». La Alianza ganó ambas cámaras. Un mapuche entró en la Cámara de Diputados por primera vez en la historia de la nación. Muchos de los nuevos parlamentarios eran de clase media, que Alessandri había promovido activamente al colocarlos en cargos gubernamentales. Esta aparente ventaja fue socavada por el estrecho margen que le daba la mayoría en el senado y, lo que es más importante, por las divisiones en el interior de la propia Alianza. Una facción del entonces poderoso Partido Radical (7 senadores y 37 diputados en 1924) se volvió contra el presidente, acusándolo de personalismo. Como en tiempos de Balmaceda, la principal lucha política parecía limitarse al enfrentamiento de un presidente con miras al futuro y un poder legislativo obstructivo. La euforia de 1920, gradualmente se transformó en desilusión y en frustración.

Aunque algunos ya se habían desilusionado mucho antes. La fuerza laboral organizada obtuvo poco de él. En un comienzo, es cierto, medió personalmente en una o dos huelgas, obteniendo acuerdos favorables para los trabajadores. Sin embargo, pronto se impacientó con sus demandas y se opuso inflexiblemente a los débiles esfuerzos que se estaban realizando para extender la sindicalización al campo. Los hacendados, por su parte, no tenían dificultades para oponerse a ello (y Alessandri les expresaría públicamente su apoyo en mayo de 1921). Para la clase trabajadora urbana, la situación empeoró después de 1920 por la seria baja que sufrió la industria del salitre. Entre diciembre de 1920 y diciembre de 1921, la producción caía mensualmente en un 60%; las exportaciones, en un 50%. En 1922, setenta oficinas habían cerrado y por lo menos 20.000 trabajadores desempleados se habían ido al sur, donde presionaban al Congreso —si patriotismo existe en el corazón de los miembros de ese alto cuerpo— para que aprobaran proyectos de obras públicas⁵. Dadas estas condiciones, fueron reclutados fácilmente por la FOCH y por los seguidores de Recabarren para participar en manifestaciones y reuniones. En la pampa salitrera propiamente dicha, un enfrentamiento entre las tropas y los huelguistas ocurrió en febrero de 1921, en la oficina San Gregorio, dejó más de cuarenta muertos, un hecho que distanció aún más a la clase trabajadora de la presidencia de Alessandri.

Recabarren había sido elegido para el Congreso en 1921 como uno de los dos diputados del POS. Para entonces, su conversión al marxismo era completa. En enero de 1922, reunido en Rancagua, el POS votó por convertirse en el Partido Comunista de Chile y por postularse como miembro del Comintern. Así, la FOCH cayó rápidamente bajo el control

⁵ *El Mercurio*, 24 de febrero de 1921.

comunista. La mayor parte de sus fuerzas se encontraban en las minas de carbón en el sur y en los puertos del salitre; y los miembros que pagaban cuotas probablemente no superarían las 20.000 personas. En términos del liderazgo de las huelgas a comienzos de la década de 1920, la FOCH era menos importante que la división chilena de la IWW, que ya se había recuperado de la represión de 1920; y menos activa, especialmente en Valparaíso. Por otra parte, un gran número de otros sindicatos seguían una línea más bien anarco-sindicalista y se negaban a adoptar el énfasis político de Recabarren. Las diferencias ideológicas, sin embargo, eran sólo uno de los factores que debilitaban la posición de los sindicatos tras el comienzo de sus actividades en 1918-1920. En el otro lado de la balanza, las asociaciones de empleadores habían crecido sostenidamente desde 1920 y se habían vuelto más agresivas, mientras que la elevada tasa de desempleo les facilitaba la contratación de «krumitros» («esquirolas»).

En la imagen que Alessandri tenía de Chile, la fuerza obrera organizada ciertamente tenía su espacio, pero él insistía en que se introdujera una legislación laboral apropiada que reemplazara la estructura del *laissez-faire* existente. A esas alturas, muchos intelectuales chilenos veían con estupor y asombro estos problemas, aguijoneados por una aguda conciencia del cambio social que se estaba produciendo en Chile y preocupados por los descalabros que había ocasionado en Europa la Primera Guerra Mundial. Así, la intervención del Estado en los asuntos laborales era vista cada vez con mayor beneplácito por la intelectualidad nacional. Mientras tanto, el Congreso seguía con el juego parlamentario como si nada hubiera ocurrido en 1920. Y había claramente un creciente movimiento en favor de algún tipo de reforma constitucional. El 1 de febrero de 1924, los partidos de la Alianza y de la Unión firmaron un acuerdo en favor de cambiar los procedimientos parlamentarios para limitar los votos de censura de la Cámara de Diputados, instituir el cierre de los debates por simple mayoría y evitar el uso de tácticas dilatorias en el caso de la legislación del presupuesto. Los dirigentes de los partidos también estuvieron de acuerdo en introducir una dieta o salario parlamentario (30.000 pesos para los senadores, 15.000 pesos para los diputados). Este programa perfectamente razonable despertó una fuerte hostilidad pública, en gran medida porque era la única Ley presentada por el acuerdo Unión-Alianza, y dejaba claramente para más adelante la legislación social propuesta por Alessandri.

A medida que el invierno de 1924 llegaba a su fin, la relación entre el presidente y el Congreso seguía en punto muerto. Aun así, esto no constituía una mera repetición de la situación de 1891. El apoyo popular de Alessandri era mucho mayor del que había tenido Balmaceda. Las nuevas fuerzas sociales necesitaban encontrar una manera de entrar en el sistema. ¿Cómo podía romperse el estancamiento? La respuesta surgió con sorprendente rapidez. El nudo gordiano fue roto de pronto por las fuerzas armadas. En diez extraordinarios días en septiembre de 1924, las fuerzas armadas hicieron, primero, que la presi-

dencia de Alessandri se tambaleara y, luego, la destruyeron, imponiendo un régimen militar en Chile. Ellos, no Alessandri, enterraron la República parlamentaria.

LA INTERVENCIÓN MILITAR Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Los oficiales del Ejército tenían clara conciencia de los defectos del gobierno parlamentario. A través de su intermitente labor de contención de los desórdenes urbanos, habían llegado a conocer muy de cerca la «cuestión social». Además, la Ley del servicio militar obligatorio de 1900 los había ido acercando cada vez más a las clases pobres, pues los conscriptos eran siempre en su mayoría trabajadores o campesinos. En 1910, la insatisfacción con la política militar de la República parlamentaria llevó a un grupo de oficiales a formar una Liga Militar secreta, que pretendía llevar a cabo un golpe de Estado para colocar en La Moneda al historiador Gonzalo Bulnes. Una conspiración más seria, motivada en parte por el temor exagerado de los militares al «bolchevismo» y a la militancia laboral, había sido detectado por el gobierno en 1919: sesenta oficiales, más o menos, fueron encontrados culpables; cerca de la mitad recibió algún tipo de castigo.

El fracaso de Alessandri para sacar adelante su programa había aumentado las filas de quienes estaban descontentos en el interior del Ejército. En su resentimiento contra el presidente, los políticos de la Unión no dudaron en buscar el apoyo de los oficiales de mayor rango. Se formó entonces otra sociedad secreta: la TEA («Tenacidad, Entusiasmo, Abnegación»), cuyo objetivo final era liberar al país de Alessandri. Los oficiales de rango intermedio e inferior, sin embargo, estaban mucho más interesados en lograr una «reorganización» nacional dirigida con firmeza, que en restaurar el poder de los conservadores. Poco después de la apertura del nuevo Congreso (junio de 1924), algunos grupos formados por estos oficiales comenzaron a reunirse en el Club Militar, furtivos por la proposición de la dieta parlamentaria. En estas reuniones, se destacaban el efusivo y emocional mayor Marmaduke Grove y el frío y taciturno mayor Carlos Ibáñez. Aún queda mucho por contar con respecto a ambos.

A primeras horas de la noche del 2 de septiembre, un grupo formado por unos cincuenta oficiales se reunió en la galería del Senado y aplaudió fuertemente a los senadores que estaban hablando contra la Ley de la dieta. Esta escena se repitió la noche siguiente. Cuando el ministro de Guerra les pidió que se retiraran, los oficiales lo hicieron, pero de manera muy desafiante y con un gran estruendo producido por el entrecuchar de sus espadas. El 4 de septiembre, el inspector general del Ejército, general Luis Altamirano, informó al gabinete de que el alto mando apoyaba a los oficiales en cuestión. Frente a este incipiente motín, Alessandri aceptó recibir a una delegación militar en el palacio al día siguiente. A sugerencia del mayor Ibáñez, los oficiales en conflicto expusieron sus demandas:

la supresión de la dieta, un impuesto sobre la Renta inmediato, promulgación del Código laboral de Alessandri, mejoras para los militares y la renuncia de tres ministros del gabinete. También habían formado una Junta Militar y Naval, para velar por los acontecimientos y, el 5 de septiembre, la Junta visitó al Presidente.

Alessandri se negó a despedir a los tres ministros. El gabinete renunció inmediatamente. Alessandri nombró al general Altamirano como cabeza de un nuevo ministerio. El 8 de septiembre, Altamirano apareció en el Congreso y exigió la aprobación de ocho leyes, incluido el Código laboral de Alessandri. Prácticamente sin siquiera una palabra de protesta, las leyes fueron aprobadas, firmadas y promulgadas, todo en pocas horas. Los acontecimientos rápidamente tomaron un cariz más serio. Para Alessandri, que se sentía cautivo de los militares, la posición era intolerable. Renunció a la Presidencia y, al día siguiente, emprendió un viaje al exilio. El 11 de septiembre, una Junta de gobierno formada por el general Altamirano, el almirante Francisco Nef y el general Juan Bennett tomó el mando de la nación.

Con la creación de la Junta, las iniciativas pasaron una vez más a manos de los oficiales de alto rango, que mantenían una estrecha relación con la Unión Nacional. Los futuros reformadores militares sospecharon que se estaba preparando el terreno para una restauración conservadora, que estaría encarnada en la candidatura presidencial del archiconservador Ladislao Errázuriz. Ibáñez, Grove y otros se decidieron entonces por la conspiración. Esta decisión se vio fortalecida por el anuncio formal de la candidatura de Errázuriz (8 de enero), que venía acompañada por la demanda de los partidos Radical y Demócrata de que Alessandri volviera. El 23 de enero de 1925, los conspiradores dieron el golpe: las tropas rodearon La Moneda; Altamirano y Nef (Bennett estaba fuera de la ciudad) fueron arrestados y se instaló una nueva Junta, bajo el mando del general Pedro Pablo Dartnell. A instancias de la Marina y tras unos tensos días, un almirante (Carlos Ward) y un civil (Emilio Bello Codesido) fueron incluidos en la Junta. El cargo clave de ministro de Guerra fue ocupado por Ibáñez, que entonces era coronel. Se le enviaron telegramas a Alessandri, entonces en Italia, invitándolo a volver y asumir de nuevo la Presidencia.

La segunda Junta, a pesar de haberse comprometido a restaurar la «revolución» traicionada por los oficiales de más alto rango en septiembre de 1924, sabía que su base de poder era especialmente frágil. La Junta superó con éxito la rebelión del Regimiento de infantería de Valdivia (27 de febrero), tras lo cual Ladislao Errázuriz y alrededor de una docena de políticos de la Unión (claramente implicados) fueron enviados al exilio. Enfrentada a estos enemigos, la Junta buscó aliados en otros sectores de la sociedad. Su actitud hacia el mundo laboral, por ejemplo, parecía favorable. Había respondido dándole su apoyo a la masiva huelga de los arrendatarios de los conventillos, que comenzó pocos días después del golpe de Estado del 23 de enero. Una nueva Ley de arrendamiento (13 de febrero de 1925) creó los Tribunales de Vivienda, habilitados para bajar el precio

de los arriendos. Los propietarios, sin embargo, lograron modificar la composición de estos tribunales de manera más favorable para ellos. Los reformadores militares sólo podrían actuar dentro de ciertos límites.

Alessandri volvió a Santiago el 20 de marzo, aclamado por multitudes jubilosas hasta el delirio que lo escoltaron de la Estación Central a La Moneda, desde cuyo balcón los instruyó una vez más sobre la diferencia entre el amor y el odio. Al darse cuenta de que estaba de vuelta en el poder gracias a la tolerancia militar, prudentemente mantuvo al coronel Ibáñez como ministro de Guerra. Se negó a todas las sugerencias de que el Congreso (disuelto en septiembre de 1924) fuera citado nuevamente, prefiriendo gobernar por decreto y usando esta oportunidad para poner en vigor su largamente anhelado programa para la creación de un Banco Central (25 de agosto de 1925). Aunque deseaba hacer gestos simbólicos que mejoraran sus relaciones con la fuerza laboral organizada (el Primero de mayo pasó a ser un día festivo legal), siguió recurriendo a los antiguos métodos para contener la creciente intranquilidad. En mayo, cuando estallaron algunas huelgas en Tarapacá, la Marina desembarcó sus tropas y masacró salvajemente a los trabajadores del salitre (3 de junio) en la oficina La Coruña. Las víctimas se contaban por cientos.

La prioridad inevitable de Alessandri era la reforma constitucional, tarea que le encomendó (el 7 de abril) a una Gran Comisión Consultiva, que representaba a todos los partidos políticos⁶. Un subcomité más pequeño trabajó en el borrador, que fue presentado ante toda la Comisión el 23 de julio. Los miembros radicales, conservadores y comunistas se opusieron al borrador. El día fue salvado por la directa intervención del general Mariano Navarrete, el delegado militar, quien expresó cortésmente la opinión del Ejército de que el texto debía ser aprobado. Lo fue. El 3 de agosto se realizó un plebiscito: la participación fue baja (45%), pero el 93% de quienes se tomaron la molestia de ir a las urnas depositó la papeleta de voto roja, que significaba la aceptación de la nueva Constitución.

La Constitución de 1925 no significó una vuelta total al presidencialismo. Sin embargo, sí inclinó la balanza en favor del poder ejecutivo. Ahora el presidente sería elegido cada seis años (por votación popular directa); el Congreso, cada cuatro (con un sistema de representación proporcional). Se eliminaron las leyes «periódicas»: desde entonces, sólo el presupuesto de la nación debía ser aprobado anualmente y, en caso de demora, el presidente tenía el derecho de hacer lo que Balmaceda había hecho el 4 de enero de 1891. La legislación declarada «urgente» por el presidente debía ser despachada en forma expedita. El procedimiento para realizar enmiendas constitucionales (tan laborioso en el documento de 1833) fue simplificado sustancialmente.

⁶ La Comisión (con agregados) incluyó 26 radicales, 16 liberales, 14 conservadores, 14 demócratas, 10 liberal demócratas, 6 comunistas y 2 nacionales. Los treinta miembros restantes, más o menos, eran independientes de diversas líneas.

Los primeros «decretos transitorios» de la Constitución —entre muchos otros por venir— separaban la Iglesia del Estado. El gobierno aceptaba pagar a la Iglesia un subsidio de 2,5 millones de pesos durante cinco años. Decidido a solucionar definitivamente este antiguo debate, Alessandri había aprovechado su estancia en Roma: logró un acuerdo directamente con el papa Pío XI y los funcionarios del Vaticano. Dicho acuerdo fue aceptado de mala gana por la jerarquía y el clero chilenos. Es difícil pensar que esto haya alterado la posición de la Iglesia en la vida chilena.

La nueva Constitución aumentaba el poder presidencial, pero no afectó ni disminuyó de manera alguna el papel de los partidos políticos. Aquí, el legado de los años parlamentarios era profundo. La competencia entre los partidos se había vuelto algo inseparable del estilo de vida de los chilenos. Los partidos, de hecho, se estaban convirtiendo en «los pilares» fundamentales de la sociedad: sus redes unían Santiago con las provincias, su influencia a menudo se extendía a otras esferas más allá de la política.

El mandato de Alessandri terminaba en diciembre de 1925 y había que elegir un nuevo presidente. El mismo Alessandri se mostraba a favor de que hubiera un solo candidato, posiblemente su amigo liberal Armando Jaramillo. Sin embargo, se produjo una imprevista oleada de apoyo al ministro de Guerra, el coronel Ibáñez, cuyas relaciones con Alessandri se habían vuelto muy tensas. A finales de septiembre, Ibáñez recibió una petición firmada por miembros de la mayoría de los partidos, en la que se le instaba a presentarse como candidato a la presidencia. Aceptó la invitación. Dado que esto parecía una candidatura oficial, el gabinete renunció (todos sus miembros excepto Ibáñez). El coronel publicó una carta abierta a Alessandri, negándose de plano a renunciar e insistiendo en que los decretos presidenciales debían llevar en adelante tanto su firma como la del presidente —exigencia que, si bien era técnicamente legal, sólo podía verse como una provocación deliberada—. La respuesta de Alessandri fue inmediata: nombró a su antiguo rival de 1920, Luis Barros Borgoño, como ministro del Interior y vicepresidente, y luego, el 2 de octubre de 1925, renunció a la Presidencia por segunda vez.

EL RÉGIMEN DE IBÁÑEZ, 1927-1931

Si Carlos Ibáñez es hasta el día de hoy una figura histórica algo enigmática, la principal razón se debe a que era un hombre de pocas palabras. «Siempre he creído», dijo una vez, «que uno debe hablar solamente cuando tiene algo que decir»⁷ —filosofía que nunca ganaría mucho apoyo entre los políticos—. La carrera de Ibáñez en el Ejército había sido exitosa y convencional; en la Escuela Militar, se le conocía como «Boras». A diferencia de sus con-

⁷ Luis Correa Prieto, *El presidente Ibáñez*, 1962, pág. 105.

temporáneos, tenía experiencia en combate: en 1906, participó en prestación de servicios temporal a El Salvador como instructor militar, tomó parte en una breve batalla entre ese país y Guatemala, y fue condecorado por los salvadoreños. En su biografía no había muchos indicios de que probablemente se convertiría en un dirigente nacional. El mismo diría en repetidas ocasiones que su papel le había sido impuesto por «las circunstancias y mis enemigos». Su conducta después de septiembre de 1924 muestra, sin embargo, que esto probablemente no era toda la verdad.

Tras la segunda renuncia de Alessandri, varios oficiales de alto rango trataron de que Ibáñez desistiera de su candidatura presidencial. No obstante, él insistió en que los partidos debían encontrar un candidato común. La elección recayó en el liberal-demócrata Emiliano Figueroa Larraín (vicepresidente de 1910), que fue elegido (octubre de 1925) con el 72% de los votos. Su inesperado contendiente, el Dr. José Santos Salas, un popular ministro de Bienestar Social bajo la segunda Junta, obtuvo un resultado sorprendentemente bueno, respaldado (entre otros) por los comunistas (que contaban con cinco diputados y un senador en el Congreso recién elegido).

Aunque de ninguna manera tenía la personalidad tan insulsa que muchas veces se le quiere achacar, Figueroa Larraín estaba lejos de ser el tradicional presidente de éxito. Las luchas internas en el Congreso y los ataques al gobierno una vez más se convirtieron en la orden del día. En estas circunstancias, resultaba inevitable que Ibáñez realizara otras maniobras. En febrero de 1927, se las arregló para ser nombrado ministro del Interior y, poco después, sus esfuerzos por purgar el poder judicial obligaron a Figueroa Larraín a hacerse a un lado (nombrando a Ibáñez vicepresidente) y luego a renunciar. Ibáñez contaba ahora con el apoyo político de casi todos los sectores y, el 23 de mayo de 1927, fue elegido presidente con el 98% de los votos (con una participación en las urnas del 83%).

Al parecer, Ibáñez siempre contó con un gran apoyo público, al menos mientras las condiciones económicas le favorecieron, como ocurrió hasta 1930. Después de los disturbios de 1924-1925 y del claro relajamiento de los lazos disciplinarios en la sociedad chilena, el atractivo de un «hombre fuerte» era innegable: se hacían paralelos con O'Higgins, Portales y Manuel Montt. El historiador Alberto Edwards, cuyo clásico ensayo *La fronda aristocrática* apareció en 1928, afirmó que el «gran servicio» que Ibáñez le había rendido a Chile descansaba en su «reconstrucción radical del hecho de la autoridad»⁸. El régimen que Ibáñez comenzó a construir en febrero de 1927 era de un autoritarismo incuestionable. El propio Ibáñez no mostraba ningún descontento cuando era descrito como «el Mussolini chileno». Se establecieron restricciones a la prensa. Proliferaron los informantes. Unos 200 políticos (desde conservadores hasta comunistas) fueron «relegados» o expulsados —Alessandri entre ellos—. Deseoso de extirpar el «comunismo y el anarquismo»,

⁸ *La fronda aristocrática*, 7ª ed., 1972, pág. 266.

Ibáñez ordenó la represión del Partido Comunista (declarado fuera de la Ley en marzo de 1927; muchos de sus dirigentes fueron enviados a Más Afuera); y un violento asalto (incluidos asesinatos) al movimiento obrero.

A estas alturas, los políticos se encontraban completamente disciplinados. El Congreso, en un espíritu inusualmente sumiso, delegó muchas de sus prerrogativas en el gabinete, en el que Ibáñez había encontrado un poderoso colaborador: Pablo Ramírez, su tenaz ministro de Hacienda. A él se le concedieron poderes por decreto en agosto de 1927. A finales de 1929, Ibáñez insistió en que dirigentes de los partidos entregaran una sola lista de candidatos para el Congreso de 1930-1934, haciendo innecesaria de esta manera la elección. Ibáñez aprobó la lista en un centro de baños termalea cerca de Chillán, de allí el sobrenombre del nuevo poder legislativo: «el Congreso termale». Sus propios esfuerzos por crear un partido político (el CRAC: Confederación Republicana para la Acción Cívica) no fueron demasiado serios.

Ibáñez dejó una huella permanente en Chile. Había puesto en marcha un programa de obras públicas a gran escala. Entre 1928 y 1931, La Moneda invirtió casi 760 millones de pesos en diversos proyectos: desagües, caminos, puentes, barracas, prisiones, pistas de aterrizaje, instalaciones portuarias, 500 kilómetros de ramales para ferrocarriles, la nueva fachada sur de La Moneda, la residencia de verano del presidente en Viña del Mar (Cerro Castillo). La administración pública (que se había expandido mucho a mediados de la década de 1920) fue racionalizada y revisada: se creó una nueva Contraloría General (1927) para supervisar la burocracia y la constitucionalidad de las medidas fiscales. Ibáñez también logró poner cierto orden en la enojosa cuestión de los derechos de propiedad en las provincias entre el río Biobío y Puerto Montt, donde las demandas en conflicto entre el Estado, los terratenientes privados y los mapuches llevaban atascadas varias décadas sin esperanzas de solución. Los mapuches eran los afectados: un tercio de las tierras que se les habían asignado habían sido usurpadas. Más al sur, se comenzó con la colonización del desierto territorio de Aysén.

En la esfera diplomática, Ibáñez fue capaz de resolver la antigua disputa por Tacna-Arica, que penaba sobre las relaciones con Perú desde la guerra del Pacífico. Ibáñez restableció las relaciones diplomáticas con el Perú y, en parte, gracias a los buenos oficios de los Estados Unidos, finalmente logró un acuerdo directo (junio de 1929). Tacna volvía a manos peruanas, Arica permanecía en Chile, que pagaba al Perú 6 millones de dólares. La nueva frontera se trazó satisfactoriamente en 1932.

Ibáñez no descuidó su fuente de poder más evidente. En 1927 emprendió una gran reforma de la policía, uniendo todas las fuerzas locales con el Regimiento de Carabineros (fundado en 1906). Carabineros de Chile, la nueva policía nacional, contaba con 19 000 hombres y altas normas de inteligencia y disciplina; y, con el tiempo, sus miembros llegaron a ser considerados los mejores policías de América Latina. A corto plazo, natural-

mente, éste era un bastión del régimen de Ibáñez. Sin embargo, es justo señalar también que, durante toda su historia posterior, Carabineros ha mostrado⁹ una particular veneración por su fundador. Mientras tanto, el Ejército (27 000 hombres en 1928) fue mantenido bajo estricto control por un leal ministro de Guerra, el general Bartolomé Blanche. Ibáñez mismo no recibió el grado de general hasta 1930. El resentimiento de la Marina, cuyo alto mando fue purgado discretamente, fue suavizado por los seis modernos destructores construidos en Inglaterra que llegaron en 1929. La innovación decisiva de esos años, no obstante, fue la creación de la FACH, la Fuerza Aérea Chilena (marzo de 1930), con aeroplanos y oficiales transferidos de las ya existentes ramas de la aviación militar y naval. Entre las primeras responsabilidades de la FACH cabe señalar la operación de la primera aerolínea del país, la Línea Aeropostal Santiago-Arica (marzo de 1929), conocida desde 1932 como LAN (Línea Aérea Nacional) o LAN-Chile.

El telón de fondo de gran parte del régimen de Ibáñez fue la prosperidad. Las condiciones económicas habían mejorado tanto a mediados de la década de 1920 que más de cuarenta oficinas salitreras entraron nuevamente en funcionamiento y el empleo en la pampa alcanzó su máximo esplendor (60 000 trabajadores). Esta prosperidad resultó efímera. Los competidores extranjeros, especialmente Alemania, comenzaron a usar el proceso Haber-Bosch para producir amonios sintéticos. Este sustituto del salitre pronto copó el mercado. Por un momento pareció que la industria salitrera chilena simplemente podía desaparecer. No obstante, los Guggenheim tenían intereses comprometidos e introdujeron una nueva técnica de refrigerado que aceleraba la extracción del salitre. Puesto que la nueva técnica aumentaba en diez veces la productividad del mineral barato y de baja ley, los Guggenheim confiaban en que así podrían competir con los productos sintéticos. Sin embargo, a pesar de sus innovaciones (que incluían la extracción de yodo y sulfato de sodio) y a sus inversiones por más de 130 millones de dólares, los Guggenheim no lograron revivir las salitreras por mucho tiempo. Debido a los impuestos sobre las exportaciones, los salitres chilenos todavía eran más caros que los sintéticos. A finales de la década de 1920, la participación de Chile en el mercado mundial cayó a menos de una cuarta parte.

Los Guggenheim (comprensiblemente) presionaron al gobierno para que suprimiera el impuesto a las Exportaciones. Ibáñez, sin embargo, veía la industria como una fuente de ingresos y, al mismo tiempo, de empleo. Más que contrincantes, él y los Guggenheim se volvieron socios. En 1931, formaron la Compañía de Salitre de Chile (COSACH). La nueva corporación, propiedad del gobierno en un 50%, debía emitir bonos para adquirir todas las salitreras restantes, contra lo cual se le garantizaba el monopolio. A cambio de eliminar el impuesto a las Exportaciones, el gobierno recibiría 80 millones de dólares

⁹ Como los lectores de las crónicas de sucesos publicadas en los periódicos chilenos sabrán, *Carabineros* siempre se usa como un sustantivo singular.

en un periodo de cuatro años; tras lo cual compartiría las ganancias o las pérdidas de la COSACH. Además, al menos el 80% de la fuerza de trabajo de la COSACH debía estar constituida por chilenos. Este matrimonio del nacionalismo económico de Ibáñez con el interés de producir ganancias por parte de los Guggenheim fue un fracaso. La producción *per cápita* subió sustancialmente durante un tiempo, pero la nueva tecnología que abaratara los costes pronto redujo la fuerza de trabajo que Ibáñez quería proteger.

A mediados de la década de 1920, el gobierno había recogido el consejo de Edwin Kemmerer, profesor de economía en Princeton, de revisar los sistemas fiscales y tributarios del país. Kemmerer restauró el patrón oro, ayudó a crear el Banco Central y reformó el ineficiente sistema ferroviario. También hizo que el sistema tributario fuera más eficiente y algo más justo, aboliendo numerosas exenciones tributarias y compensando este acto audaz con un nuevo impuesto del 6% sobre, prácticamente, todos los tipos de actividades económicas y, en especial, con un gravamen del 6% a las compañías del cobre. La combinación de medidas tónicas de Kemmerer con el retorno a la estabilidad política incentivaron la inversión extranjera. La industria manufacturera siguió creciendo. El salitre parecía sustentar a los suyos; y el cobre, como un signo astrológico, estaba en ascenso (al igual que los ingresos provenientes de los impuestos nacionales).

A pesar de estas mejoras, la aduana seguía siendo el eje del sistema tributario, y ni los aranceles aduaneros ni los nuevos impuestos directos proporcionaron los ingresos necesarios. Al igual que Alessandri y Figueroa Larraín (ambos habían aumentando la deuda del país a 2 millones de libras esterlinas y aproximadamente 70 millones de dólares), Ibáñez solicitó enormes préstamos. Para ser justos hay que decir que no todos los préstamos contraídos fueron utilizados para parchear los agujeros en la trama fiscal. Más que sus predecesores, Ibáñez era un nacionalista económico que creía en que el gobierno «resuelva y ejecute, que no postergue la solución de los problemas nacionales».¹⁰ De ahí los programas de obras públicas y los gastos en infraestructura que ya hemos señalado.

En 1927-1928, Ibáñez fundó dos útiles bancos del desarrollo: la Caja de Crédito Agrario y la Caja de Crédito Minero, concebidos para beneficiar a los pequeños agricultores y las operaciones mineras a pequeña escala. El Instituto de Crédito Industrial (1928) usaba los fondos de pensiones así como dinero del gobierno para estimular la industria manufacturera. Al igual que los bancos agrario y minero, el Instituto obtuvo excelentes resultados, canalizando créditos para el sector metalúrgico así como para las fábricas de muebles, textiles, alimentos y bebidas. En 1928, el Congreso «autorizó» a Ibáñez para aumentar (entre un 35% y un 50%) los derechos sobre las importaciones que competían con la producción local. Se le dio poder para reducir los gravámenes sobre las importaciones esenciales, como los medicamentos (hasta un 25%), y sobre los materiales que

¹⁰ Patricio Bermedo, «Prosperidad económica bajo Carlos Ibáñez», *Historia*, 24, 1989, pág. 62.

beneficiaban las industrias metalúrgica, minera o salitrera (hasta un 50%). La Moneda también le permitió otorgar a discreción exenciones tributarias específicas en materias primas o maquinaria extranjera necesarias para la industria nacional.

Los aspectos negativos de la gestión económica de Ibáñez fueron que hipotecó el futuro del país. En 1930, Chile le debía a los bancos norteamericanos, ingleses y suizos un total de 62 millones de libras esterlinas (más del doble de la deuda externa de 1920). En el momento en que se solicitaron estos préstamos, sin embargo, la economía parecía abundantemente capaz de soportar la creciente deuda. En 1928-1929, el salitre producía grandes ganancias. Los impuestos internos aportaban alrededor del 30% de los ingresos del Estado, casi tanto como la aduana. Las políticas fiscales del gobierno, por ende, parecían lógicas: había un presupuesto equilibrado y un excedente comercial; el peso chileno se había estabilizado, al igual que el circulante; las reservas bancarias seguían estando por encima de los niveles mínimos necesarios; y las reservas de oro parecían perfectamente adecuadas.

Ningún gobernante autoritario, sin importar lo exitoso que fuera en producir prosperidad, puede pretender ser inmune a los intentos de derrocarlo. Alessandri estaba tras la mayoría de las conspiraciones contra Ibáñez. La primera de ellas fue incubada en un hotel en Calais (enero de 1928), por Alessandri, el coronel Marmaduke Grove y otros dos oficiales. El «Pacto de Dover», como se lo conoció (debido a que Alessandri, acompañado de otras personas fue visto por un agente chileno en ese puerto inglés pocos días después), provocó la «relegación» a la isla de Pascua de una serie de alessandristas. En septiembre de 1930, el coronel Grove, el general Enrique Bravo y otros, volaron en un Fokker trimotor rojo desde San Rafael (Argentina) a Concepción, creyendo que la guarnición se alzaría contra Ibáñez. Ésta no lo hizo, y Grove y Bravo pronto se encontraron también en isla de Pascua.

Al final, el general Ibáñez fue derrotado no por los desalmados complots de Alessandri, sino por el colapso de Wall Street y el comienzo de la Depresión. Sus efectos se dejarían sentir en Chile en la segunda mitad de 1930.

LA CAÍDA DE IBÁÑEZ Y LOS MESES DE TURBULENCIA

Al igual que una enfermedad degenerativa, el colapso de la bolsa norteamericana erosionó progresivamente la prosperidad de Chile. A medida que la economía internacional se hundía, lo mismo ocurría con el precio del cobre: de 17,47 centavos la libra en 1929 pasó a 5,06 centavos en 1932. Además, en 1932, los Estados Unidos impusieron un derecho de importación de 4 centavos por libra: entre 1931 y 1933, las exportaciones de cobre a los Estados Unidos bajaron de 87.000 a 5.000 libras. En forma bastante predecible, las tasas de empleo siguieron las mismas impresionantes espirales descendentes.

La Depresión dio el golpe de gracia a las ya debilitadas salitreras. En 1930-1931, la producción de salitre había llegado prácticamente a la mitad. Desde finales de 1930, alrededor de 29.000 personas dejaron el norte. En 1932, la producción de las once salitreras restantes (que ahora no empleaban a más de 8.000 trabajadores, donde sólo tres años antes había habido casi 60.000) se redujo a un 20% del volumen que había alcanzado en 1929. En el mismo periodo, las ventas al extranjero bajaron en más del 90%. En 1932-1933, de hecho, no sólo el volumen total de todas las exportaciones chilenas había caído en un 64% con respecto a los volúmenes de 1928-1929, sino que su poder adquisitivo había bajado en un impresionante 84%.

Ibáñez no tuvo que hacerle frente a esta crisis de forma inmediata. El dinero de los préstamos externos todavía estaba llegando. Durante algunos meses, los negocios se mantuvieron como siempre. En 1930, de hecho, las importaciones aumentaron. A comienzos de 1931, con sus principales exportaciones postradas y sin los banqueros de Wall Street para que lo socorrieran, el hombre de La Moneda finalmente tuvo que enfrentarse a la realidad. Ibáñez y sus consejeros probaron primero con las tradicionales panceas: reducción de los gastos junto con un aumento de los impuestos a las exportaciones (aproximadamente del 71%). No obstante, sin importar cuán rápida y drásticamente recortara los gastos, Ibáñez no podía cubrir el déficit. Los pagos de la deuda externa y la compra de productos importados esenciales pronto se tragaron las reservas de oro. El gobierno abandonó el patrón oro y dejó de pagar a sus acreedores extranjeros.

La situación económica empeoró en una semana. Desesperado, Ibáñez nombró (el 13 de julio de 1931) un «gabinete de salvación nacional» con Pedro Blanquiere como ministro de Hacienda y un radical, Juan Esteban Montero, en la cartera de Interior. Montero retiró rápidamente las restricciones a la prensa, con los resultados predecibles. El anuncio de Blanquiere del colosal déficit presupuestario causó amplia consternación. Habiendo llegado a la conclusión de que no podían trabajar con Ibáñez, Montero y Blanquiere renunciaron. De pronto, la multitud se lanzó a las calles. Los estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica comenzaron una huelga. Las asociaciones profesionales, partiendo desde los médicos y los abogados, les declararon su solidaridad. Los inevitables desórdenes callejeros fueron controlados duramente por la policía: cerca de una docena de personas fueron asesinadas. El movimiento se volvió incontrolable y el régimen se vio obligado a rendirse ante las protestas civiles.

Alberto Edwards nos ha dejado una impactante descripción de la última reunión de Ibáñez con sus ministros: «Sí, estoy resuelto, dijo el señor Ibáñez, esto no puede continuar [...] ¿Qué habrá hecho para merecer tanto odio? Y sus ojos [...] se humedecieron»¹¹. El gabinete renunció. Ibáñez nombró al presidente del Senado como vicepresidente. A la

mañana siguiente (27 de julio de 1931), tomó el tren transandino rumbo al exilio en Argentina. Un día después, el Congreso declaró vacante la Presidencia y nombró vicepresidente a Juan Esteban Montero, a quien se le había encargado apresuradamente la cartera de Interior.

Agradable y honesto, Montero encarnó de alguna manera las esperanzas de muchos de los que querían volver a un verdadero régimen constitucional. Los grupos profesionales que tanto habían ayudado a la caída de Ibáñez lo arrastraron rápidamente a la candidatura presidencial. Alessandri, que ahora había vuelto con otros exiliados en medio de grandes ovaciones, no se mostró demasiado interesado en un principio, pero pronto aceptó presentar también su candidatura. Con el fin de realizar su campaña, Montero delegó temporalmente la vicepresidencia en su ministro del Interior, Manuel Trucco (20 de agosto de 1931).

Prácticamente de inmediato, Trucco tuvo que enfrentarse a un motín naval¹². Como una reacción contra las reducciones salariales que se habían anunciado, los marinos de los buques de guerra estacionados en Coquimbo apresaron a sus oficiales e hicieron una serie de demandas; algunas profesionales, otras semirrevolucionarias. Otros motines se le sumaron: en la base naval de Talcahuano, la escuela de comunicaciones de la Marina en Las Salinas y la base aérea de Quinteros. Todos fueron prontamente reprimidos. La escuadra rebelde permaneció en la bahía de Coquimbo: el 6 de septiembre, un ataque aéreo muy poco efectivo (uno de los aviones atacantes fue derribado) intimidó a los amotinados, que zarparon en sus barcos hacia Valparaíso y se rindieron.

Aunque Montero ganó las elecciones con el 64% de los votos (4 de octubre de 1931), había muy poco que pudiera hacer para aplacar los turbulentos ánimos del momento. Poco después de tomar el mando en diciembre, algunos comunistas trataron de tomar los cuarteles de La Esmeralda en Copiapó. Cuando las noticias llegaron a Valparaíso, los carabineros dinamitaron la sede comunista local y sacaron a varios conocidos comunistas de sus casas, matando a más de veinte.

Montero se hizo cargo de un país que después sería descrito por la Liga de las Naciones como la nación más devastada por la Depresión (*World Economic Survey* 1923-1933). Un nuevo asedio a los bancos había agotado de tal manera el circulante (en agosto de 1931 se había contraído en un 40%) que, por primera vez en décadas, los precios para el consumidor bajaron. Sin embargo, esta bajada de los precios no fue sino una broma cruel para los hombres sin trabajo. El gobierno trató de paliar los efectos del enorme desempleo creando un Comité de Ayuda a los Cesantes, que entregaba alojamiento y comida. También redujo los arriendos y las contribuciones en un 20% y un 80%, respectivamente. No obstante, el gobierno estaba tan necesitado de ayuda como los ciudadanos.

¹¹ Citado en Arturo Alessandri, *Recuerdos de Gobierno*, 3 vols., vol. II, 1967, pág. 444.

¹² Se dio la coincidencia de que el motín naval británico de Invergordon estalló un par de semanas después.

Aunque Chile logró terminar 1931 con un saldo positivo en la balanza comercial, el país seguía sin percibir ingresos, lo que obligó a Montero a pedir prestado al Banco Central.

A pesar de todas las buenas intenciones con que había comenzado, el gobierno de Montero rápidamente pasó por muchos tropiezos, atrapado en la telaraña de las rivalidades subterráneas entre los alessandristas y los ibañistas. Al menos tres complotos pro-Ibáñez fueron descubiertos en los primeros meses de 1932; uno de ellos concebido por el ambicioso periodista y antiguo diplomático Carlos Dávila. A comienzos de junio de 1932, Dávila y algunos oficiales ibañistas se aliaron con el indómito comodoro del aire Grove (a quien Montero había puesto contra su voluntad al mando de la FACH) y con el abogado socialista Eugenio Matte, cabecilla de otra conspiración. Su objetivo era derrocar al gobierno. Esta extraña banda de rebeldes entró en acción el sábado 4 de junio. Aviones de la base de El Bosque, reducto de Grove, sobrevolaron La Moneda atemorizando a los transeúntes y arrojando panfletos sobre la ciudad. Enfrentado a un inminente golpe de estado, Montero se dirigió a Arturo Alessandri para pedirle consejo. Entonces Alessandri fue a El Bosque y dialogó con Grove. Luego se dijo (Grove) que Alessandri había impulsado la rebelión con las palabras «No alojamiento, coronel», afirmación que a su vez Alessandri negó. De vuelta en La Moneda, Alessandri le dijo a Montero que no había cómo resistir el golpe. Al caer la noche, un batallón de soldados tomó el palacio de gobierno.

Los victoriosos revolucionarios proclamaron entonces la «República Socialista de Chile» y crearon una Junta formada por el general Arturo Puga, Dávila y Matte. Grove asumió el cargo de ministro de Defensa. En su primera declaración pública, la Junta señaló que «la economía liberal» había fracasado; en adelante, el Estado debería asumir un fuerte papel directivo. En los próximos días, la actividad del nuevo régimen fue frenética: disolvió el Congreso y, entre otras medidas, declaró un cierre bancario de tres días (seguido de estrictos controles en la retirada de dinero), suspendió los desalojos de las propiedades de baja rentabilidad y ordenó que la Caja de Crédito Popular (banco de ahorro y préstamo para las personas de escasos recursos fundado en 1920) devolviera las ropas y herramientas de quienes las hubieran empeñado allí.

En su composición inicial, la Junta duró menos de dos semanas. Grove no tenía tiempo para Dávila, Dávila no lo tenía para Grove. Dávila estaba detrás de un juego más complejo: el 16 de junio, con el respaldo del Ejército, tomó La Moneda y destruyó a Grove y a Matte a la isla de Pascua. Al cabo de unos días, se declaró el estado de sitio en todo el país. Se introdujo una estricta censura a la prensa, mientras las estaciones de radio sólo podían transmitir bandos oficiales.

Para entonces, habían cundido los rumores de que se estaba preparando el camino para que el general Ibáñez reasumiera el mando. Sin embargo, todavía faltaba un extraño giro en los acontecimientos. El 6 de julio, el mismo Ibáñez llegó a Santiago para parlamentar con Dávila y varios jefes militares. El Ejército, como un todo, sin embargo, no estaba

preparado para apoyarlo. El 8 de julio, por tanto, Dávila se autodesignó presidente provisional de la República Socialista. Ibáñez volvió a Buenos Aires.

Dávila siguió adelante en sus planes de reorganizar la economía chilena estableciendo líneas fuertemente estatistas: la imagen que él tenía del país comprendía una serie de grandes corporaciones públicas a cargo de la agricultura, la minería, la industria, el transporte y el comercio exterior, coordinadas por un consejo económico nacional. Todo esto era una quimera. Dávila no contaba con ningún apoyo real fuera del Ejército, convertido ahora en el verdadero árbitro de los acontecimientos y que, por lo demás, tampoco lo respaldaba en su totalidad. El 13 de septiembre, en medio del ya habitual panorama de los aviones que sobrevolaban La Moneda, los «Cien días» de Dávila (y de la República Socialista) llegaron a un abrupto fin: Dávila transfirió la presidencia provisional a su ministro de Interior, el general Bartolomé Blanche, ibañista. Inmediatamente, Blanche llamó a elecciones presidenciales y parlamentarias, programándolas para el 30 de octubre.

A esas alturas, cada vez más personas anhelaban un gobierno civil. Un siniestro grupo paramilitar, las «milicias republicanas», se habían organizado en Santiago y en otras partes. Los militares se habían vuelto muy impopulares y lo sabían. A fines de septiembre, un grupo de líderes civiles de Antofagasta convenció al comandante militar local de que se pronunciara en favor del gobierno civil. Blanche mandó a un destructor a bloquear el puerto de Antofagasta, pero el movimiento prendió en otras provincias, especialmente en Concepción, y la presión fue suficiente para obligar a Blanche a entregar el poder al presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel (2 de octubre).

El breve mandato de Blanche dio tiempo para que se organizaran las candidaturas presidenciales. Los radicales, los demócratas y los liberales habían reconstituido una Alianza Liberal y designaron candidato a Arturo Alessandri. Los conservadores, los liberales demócratas y los comunistas también presentaron candidatos. Marmaduke Grove, quien todavía languidecía en isla de Pascua, fue seleccionado por varios grupos socialistas. Cuando llegó el día de la elección (30 de octubre), los votantes chilenos prefirieron al único candidato cuyo nombre ofrecía una perspectiva de futura estabilidad y de retorno a la normalidad: Arturo Alessandri obtuvo el 54% de los votos populares. A pesar de haber vuelto de isla de Pascua el mismo día de las elecciones, el efusivo «don Marmaduke», el «socialista» Grove obtuvo un sorprendente segundo lugar (18%). La República Socialista había fracasado, pero el socialismo, de una u otra forma, se encontraba ya firmemente asentado en la política chilena. Desde entonces, nunca ha dejado de estarlo.

El Congreso recién elegido comenzó sus sesiones el 19 de diciembre de 1932. La víspera de Navidad, tomó el mando Arturo Alessandri, el primer presidente en más de sesenta años que comenzaba un segundo mandato.

EL SEGUNDO PERIODO PRESIDENCIAL DE ALESSANDRI, 1932-1938

El mayor logro de Alessandri en la década de 1930 fue restaurar la estabilidad, asentando las bases para cuatro décadas de creciente democracia. Sus métodos (que incluyeron el uso ocasional de los poderes excepcionales) fueron duros, pero efectivos. Un leal ministro de Defensa, Emilio Bello Codesido, y un comandante en jefe completamente profesional, el general Óscar Novoa, se preocuparon de que el Ejército no se involucrara más en política. Como una precaución contra tal intromisión, el propio Alessandri incentivó las llamadas milicias republicanas (unidades paramilitares organizadas secretamente ante la alarma de 1932 y reclutadas entre las clases alta y media). Ya a mediados de 1936, fueron desmovilizadas y sus armas pasaron al Ejército, de donde muchas de ellas habían provenido originalmente.

Con el retorno a la normalidad, se hizo evidente que los trastornos de 1924-1932 habían cambiado el espectro político. Algunos políticos de clase media (y, cada vez más, de la clase trabajadora) tenían ahora un papel mucho más importante que en el periodo parlamentario. Los conservadores y los liberales, todavía muy fuertes, constituían la derecha del nuevo espectro¹³; mientras los radicales representaban un clásico partido de centro que podía inclinarse ya hacia la derecha, ya hacia la izquierda. Porque entonces sí existía ya en Chile una verdadera izquierda, pequeña pero en aumento. En abril de 1933, varios minúsculos grupos de izquierda se unieron para formar el nuevo Partido Socialista de Chile. Sus principales fundadores eran veteranos de la «República Socialista» como Marmaduke Grove y Eugenio Matte. Proclamando los principios revolucionarios marxistas (aunque el pintoresco e indómito Grove a menudo se jactaba de no haber leído nunca a Marx), los socialistas se mostraron muy deseosos de entrar en el juego político. Inmediatamente se convirtieron en los rivales del Partido Comunista, que pasaba entonces por un mal momento: lo había debilitado una defección trotskista (la Izquierda Comunista) y también la política de ese momento del Comintern, exclusivista e intransigente.

Entre los otros grupos que surgieron en la década de 1930, dos merecen ser destacados: el Movimiento Nacional Socialista (fundado en abril de 1932) y la Falange Nacional (partido independiente desde 1938). Esta última fue formada por un grupo de jóvenes conservadores disidentes inspirados en las encíclicas «sociales» del papado y en el pensamiento del filósofo católico francés Jacques Maritain (seguido con admiración por el joven Eduardo Frei en París en 1934). Los falangistas crecieron después hasta convertirse en el partido más popular de la segunda mitad del siglo xx.

¹³ Los términos «derecha» e «izquierda» han sido usados aquí (algo artificialmente) durante la República parlamentaria. No obstante, para esta época ya estaban totalmente integrados en el discurso político chileno —a menudo (desde la década de 1930 a la de 1950) en plural—, es decir, «las derechas, las izquierdas».

Los *nacistas* no compartieron ese destino. Los nacional-socialistas y su «*Führer* criollo» de impresionante elocuencia, Jorge González von Marées, eran un reflejo local del fascismo que ascendía espectacularmente en Europa. Sus camisas pardas, su estilo paramilitar y sus ansias por verse envueltos en refriegas a veces sangrientas con sus oponentes (generalmente socialistas), les dieron gran notoriedad en el agitado mundo político de la década de 1930. Las peleas callejeras entre los *nacistas* y los jóvenes socialistas (que también tenían sus «milicias») llevaron a Alessandri a la larga (febrero de 1937) a introducir la Ley de seguridad interior del Estado, singularmente dura y que armaba al gobierno con una amplia batería de nuevos poderes para controlar las reuniones y las publicaciones. Dentro y fuera del Congreso, la Ley encontró una amarga resistencia por parte de los socialistas, los comunistas, los demócratas, muchos radicales y (por supuesto) los *nacistas*. Aún así, nunca fue revocada; era demasiado útil. El mismo Alessandri no se encontraba al margen de usar la nueva Ley para resolver sus propias rencillas personales. Un hecho notable se produjo en enero de 1938, cuando la policía se incautó de todas las copias del número 285 de la admirable revista satírica *Topaze*. Las garras del León podían ser muy agudas a veces.

Alessandri comenzó su segundo periodo presidencial con un gabinete que incluía a liberales, conservadores, radicales y demócratas. Los liberales y los conservadores, de hecho, fueron el elemento más fundamental en su administración. Sin embargo, los radicales se fueron interesando cada vez más en una alianza con la izquierda y, en abril de 1934, dejaron el gobierno, para volver a él (brevemente) en septiembre de 1936. La retirada radical no complicó a Alessandri en términos electorales, pero sin duda ayudó a acentuar la línea divisoria entre la derecha y la izquierda, cuyas batallas ideológicas, disputadas en la prensa, en las calles y sobre el suelo del Congreso, eran mucho más serias que las de los píos y los impíos del periodo parlamentario. Hubo varios episodios que hicieron más profunda esta división entre la izquierda y la derecha. Entre junio y julio de 1934, un violento movimiento de protesta protagonizado por unos campesinos que ocupaban ilegalmente algunas viviendas en la provincia de Cautín, y que habían sido desalojados (la «rebelión Ranquil») fue reprimido por Carabineros, que masacraron por lo menos a cien campesinos. Pocas semanas después, el periódico socialista *La Opinión* fue asaltado. En febrero de 1936, cuando los empleados de ferrocarriles iniciaron una huelga, Alessandri envió al Ejército, cerró el Congreso (que entonces estaba en sesión extraordinaria) y decretó tres meses de estado de sitio.

Estos acontecimientos, que produjeron furor en la opinión pública, encubrían el hecho de que el movimiento obrero no tenía ninguna dificultad para operar dentro del esquema de la legislación promulgada en —y después de— 1924 (eficazmente codificada por Ibáñez en 1931). La cantidad de sindicatos legales aumentó rápidamente: en 1938, sus miembros superaban las 100.000 personas. Su confederación (1934) pronto se alió con lo poco que quedaba de la FOCH, antiguamente controlada por los comunistas, y juntas for-

maron una nueva Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH). La mayoría de los delegados a su convención de apertura (diciembre de 1936) eran socialistas o comunistas, que competían por el control del movimiento obrero. Mientras el sindicalismo del comercio avanzaba en las ciudades, los hacendados impidieron sin mucho esfuerzo que se extendiera en el campo.

Por otra parte, la política económica de Alessandri, lentamente modelada por su acerbo pero brillante ministro de Hacienda, Gustavo Ross, estaba sacando a Chile de la depresión. Sin embargo, no hay que atribuirle todo el crédito a Alessandri y a Ross. Los precios mundiales de las materias primas aumentaron a mediados de la década de 1930, revitalizando la industria del cobre, cuya producción aumentó de 103.000 toneladas métricas en 1932 a 413.283 en 1937. Incluso se produjo un momentáneo renacimiento en las pocas salitreras que aún quedaban. En 1933, Alessandri abolió la COSACH, reemplazándola al año siguiente por una nueva Corporación de Ventas de Salitre y Yodo (COVENSA), lo que traspasó al Estado el control efectivo sobre lo que quedaba de la industria, y el 25% de todos los ingresos.

Alessandri aumentó los impuestos a la industria del cobre de un 12% a un 18% y la sometió a un sistema de tasas cambiarias diferenciales. Desde entonces, las compañías estaban obligadas a venderle sus dólares al gobierno a una tasa de cambio oficial artificialmente alta. El gobierno revendió los dólares luego en el mercado libre. En la medida en que la diferencia entre el mercado oficial y el mercado libre se hacía mayor, el mecanismo actuaba como un impuesto oculto. La combinación de mayores impuestos y diferenciales cambiarios aumentó aproximadamente cinco veces los ingresos del gobierno provenientes de las minas de cobre.

Aunque las circunstancias eran diferentes, Alessandri parecía tan partidario del nacionalismo económico como su archirival Ibáñez. Aumentó los aranceles aduaneros en un 50% y luego los duplicó. También impuso una sobretasa en los derechos a las importaciones, efectiva si no se las pagaba en oro; a la larga el arancel llegó a equivaler al 300%. Toda una serie de nuevas estrategias (múltiples controles cambiarios, cuotas, permisos de importación, el racionamiento de las divisas) ayudaron a impulsar y proteger la industria nacional. Los industriales se portaron a la altura de las circunstancias. La cantidad de fábricas aumentó a más del doble; la fuerza de trabajo industrial casi se duplicó. Bien protegidas por altas barreras tributarias, las fábricas chilenas pudieron satisfacer el 97% de las necesidades de consumo del país, reduciendo así las importaciones. Al igual que antes, los productores de bienes durables e intermedios crecieron más rápidamente, aumentando casi en un 50%; mientras que la producción de las industrias que sólo fabricaban bienes de consumo, en realidad, declinó levemente.

Un mecanismo particularmente eficaz para estimular la economía fue una Ley de 1933 que suspendía temporalmente los impuestos sobre todos los proyectos de cons-

trucción, siempre y cuando estuvieran terminados a fines de 1935. Con esta medida, el negocio de la construcción se convirtió en uno de los más prósperos de la década de 1930 y, como siempre, el auge de la construcción benefició a todos los negocios relacionados con ella. Para impulsar aún más la actividad en este sector, el gobierno incentivó a los fondos de pensión para que invirtieran en vivienda y, de manera más directa todavía, promovió las obras públicas. La construcción del Barrio Cívico —esas poco inspiradas planchas grises en torno a La Moneda— remodeló el corazón de Santiago. Con diferencia, el más popular de estos esfuerzos, sin embargo, fue la construcción de un Estadio nacional de fútbol, terminado en 1938.

La agricultura fue el sector más sobresaliente durante los años de la Depresión. Entre 1929 y 1938, la cantidad de tierra cultivada aumentó aproximadamente en un 20%; el valor total de los productos agrícolas, casi en un 10%. La producción de cereales mejoró discretamente, al igual que la producción de cebada, porotos y papas. Las cosechas de maíz decayeron, pero los chilenos se estaban dedicando cada vez más al cultivo del arroz. Entre 1930 y 1936, la cantidad de tractores aumentó a más del doble. En lo que se refiere a las exportaciones agrícolas, sin embargo, las cifras siguieron siendo pobres: los hacendados no tenían posibilidades reales de competir con los agricultores de Canadá, Estados Unidos o Australia. Como había solido ser durante décadas, los únicos mercados importantes para los frutos del campo eran las ciudades del mismo Chile, que cada vez eran más grandes. El gobierno, no obstante, no descuidó el sector agrícola. Una nueva Junta de Exportación Agrícola comenzó a operar en 1932 con dos objetivos fundamentales: ayudar a las haciendas y granjas manteniendo niveles de precio mínimos y subsidiar las exportaciones. Alessandri le dio a la Junta poderes para controlar el cultivo, la venta, la importación y la exportación de trigo.

El gobierno también extendió su mano protectora (pero provisional) hasta el consumidor. La breve República Socialista había creado un Comisariado general de Subsistencia y Precios con autoridad para fijar el precio de los alimentos de primera necesidad. Al mismo tiempo, el gobierno asumió poderes (incluido el derecho de *expropiación*) extensivos virtualmente a cualquier empresa involucrada en la producción, el transporte o la venta de alimentos esenciales, así como a cualquier terreno que estuviera siendo cultivado de manera ineficiente o hubiera sido dejado en barbecho. Podría haberse esperado que Alessandri desmantelara el Comisariado; sin embargo, con un informe de la Liga de las Naciones que indicaba que más del 75% de todos los chilenos se estaban alimentando de modo deficiente o estaban seriamente desnutridos, La Moneda claramente tenía que tratar de equilibrar las iniquidades, aunque sólo fuera para protegerse políticamente. Por tanto, la administración de Alessandri mantuvo el control de los precios, limitando los ingresos gracias a los alimentos básicos entre un 15% y un 35%. Puede decirse que, de esta manera, se sacrificaba al campo en pro del trabajador urbano. Sin embargo, Alessandri sentía

también un profundo respeto por la elite terrateniente (de la cual, por lo demás, dependía políticamente), que le impedía considerar seriamente una reforma de las haciendas.

Parte de la recuperación de mediados de la década de 1930 puede atribuírsele a la capacidad de Chile para manejar las demandas de sus acreedores internacionales. El gobierno obstinadamente se negó a pagar los intereses que se habían acumulado desde 1931 (cuando, como ya se vio, comenzó la moratoria) hasta 1935. Ross llegó todavía más lejos, comprando los depreciados bonos de Chile a un precio muy bajo. Se gastaron unos 15 millones de pesos para retirar más de 139 millones en bonos, reduciendo así la deuda externa del gobierno en un 31%. Esta táctica no sólo redujo los pagos por conceptos de intereses de Chile, sino que también le ahorró millones al Estado —lo que, evidentemente, impulsó la recuperación—.

La forma en que Alessandri manejó la deuda interna fue mucho más torpe. Durante la República Socialista, los préstamos del Banco Central habían aumentado en más del 400%. Alessandri parecía casi igualmente generoso: entre 1932 y 1937, los préstamos del Banco Central aumentaron en un 50% y los medios de pago totales se duplicaron. Sólo era cuestión de tiempo antes de que la inflación volviera a aparecer. Para cuando Alessandri dejó el cargo, todos los precios habían subido en un 30%.

Sin embargo, los logros de Alessandri y Ross son innegables: en 1937, la producción agrícola y manufacturera había superado los volúmenes de 1929. Además, habían equilibrado el presupuesto reduciendo los gastos y aumentando los impuestos, especialmente los aranceles aduaneros, e imponiendo un nuevo impuesto a la venta del 5%. El desempleo disminuyó sostenidamente. Durante el segundo mandato de Alessandri, en efecto, se llevaron a cabo importantes cambios estructurales. El sector industrial de la nación había crecido y también se había diversificado. Las fábricas no sólo producían más bienes de consumo, sino que también empezaban a fabricar productos durables e intermedios (productos textiles, papeleros, químicos, metálicos y no metálicos). En 1938, las fábricas locales podían satisfacer el 70% de la demanda de ese tipo de artículos del país.

A pesar de todo lo anterior, la política, al igual que la competencia entre los partidos, era, más que nunca, parte esencial de la vida chilena. A mediados de la década de 1930, la izquierda, que comenzaba ya a jugar un papel importante y aún peleaba por los votos, dio un paso decisivo. Los comunistas ya habían abandonado su postura intransigente y estaban promoviendo (según la nueva política del Comintern, concebida para combatir el auge del nazismo de Europa) la formación de un «Frente Popular», que reuniera a todos los partidos de izquierda y a los «burgueses progresistas». Los radicales consideraron que ésta era la mejor forma de conseguir su anhelada coalición —dominada obviamente por ellos mismos—. Los dirigentes del Partido aceptaron unirse al Frente en junio de 1936, aunque la decisión sólo fue ratificada en la convención nacional del Partido Radical (en una votación cuyo resultado fue 316/138) en mayo de 1937. Los socialistas, por su parte,

tuvieron que superar sus pocas simpatías por los radicales y los comunistas, ya que Alessandri les gustaba aún menos. La nueva CTCH también fue incorporada, en gran medida, para reforzar la fuerza electoral del Frente. A pesar de su opaco desempeño en las elecciones parlamentarias de 1937, la nueva alianza se mantuvo unida, los comunistas y los socialistas dejaron su retórica revolucionaria (así como sus programas) en pro de los intereses de una causa mayor. Toda la atención estaba centrada ahora en la elección presidencial de 1938.

Las convenciones para las designaciones de los candidatos del Frente Popular y de la derecha se realizaron en abril de 1938. En la primera de ellas, se necesitaron diez votaciones antes de que el siempre popular Marmaduke Grove (cuyos defensores cantaban «¿Quién manda el buque? ¡Marmaduke!») se retirara ostentosamente en favor del radical inevitable, Pedro Aguirre Cerda, un afable y recatado abogado, dueño de viñas (de allí su apodo: «Don Tinto»). La convención liberal-conservadora, con igual inevitabilidad, eligió a Gustavo Ross. La conducta personal de Ross no le ganó muchos amigos. Alessandri realmente no lo quería como sucesor. La oposición detestaba al «ministro del hambre», como lo habían bautizado. Su desprecio por los chilenos de a pie era bien conocido: en junio de 1935, dijo que había que gastar unos pocos millones de pesos para incentivar la «inmigración blanca». La derecha lo vio como a un posible «hombre fuerte». El pudiente Ross estaba preparado para gastar una fortuna para alcanzar la Presidencia. Su campaña fue conducida con el espíritu de un hombre que afirmaba que «el empobrecimiento de los de arriba no enriquece a los de abajo»¹⁴.

Lo más desconcertante fue la aparición de un tercer contendiente: nada menos que el general Ibáñez, quien había vuelto a Chile en 1937 para gran disgusto de Alessandri. Sus seguidores, organizados en junio de 1938 como la Alianza Popular Libertadora, atrajeron a una buena cantidad de disidentes socialistas y recibieron el apoyo entusiasta de los nacistas de González von Marées, que, de hecho, fue quien le dio más ímpetu a su campaña. Ibáñez era una apuesta incierta, pero su reaparición sirvió para aumentar la tensión a medida que se acercaba el momento de las elecciones.

Las elecciones mismas estuvieron marcadas por un acontecimiento terrible. El lunes 5 de septiembre, hacia el mediodía, unos grupos de nacistas tomaron la Universidad de Chile y la Caja del Seguro Obligatorio, un alto edificio de oficinas justo frente a La Moneda (alto para las normas de Santiago). Allí, los rebeldes mataron a un carabinero y se atrincheraron en el séptimo piso. En la Universidad, una pieza de artillería hizo estallar las puertas principales y los nacistas (que ya contaban seis muertos) se rindieron. Los veinticinco sobrevivientes fueron conducidos al edificio de oficinas, donde el grupo del séptimo piso también se rindió pronto. Ambos grupos —sesenta y un jóvenes en total— fueron

¹⁴ Edecio Torreblanca, *Ante la próxima elección presidencial*, 1938, pág. 42.

fusilados entonces por carabineros. Muchas personas pensaron que el propio Alessandri había dado la orden para la masacre. No estamos seguros. Es probable que, en el fragor del momento, él dijera algo que fue interpretado de esa manera.

La impactante masacre de los nacistas dio un vuelco final a la campaña electoral, en que la copiosa riqueza de Ross parecía estar ganando terreno respecto del entusiasmo por el Frente Popular. El general Ibáñez, que no había formado parte del intento de golpe de estado, retiró su candidatura presidencial y aconsejó a quienes lo apoyaban que votaran por el Frente Popular —un duro golpe para el odiado rival de Ibáñez, Alessandri—. Eso fue suficiente para inclinar la balanza en favor de Aguirre Cerda. La elección (el 25 de octubre de 1938) resultó una competencia muy reñida que sólo se resolvió al final: de un total del 89% de los votantes, Aguirre Cerda ganó 222.720 votos (50,2%); Ross, 218.609 (49,3%). Gracias al general Ibáñez y los nacistas, Chile había elegido el único gobierno del Frente Popular fuera de Europa.

Como veremos, la carrera política de Ibáñez aún no había terminado. En lo que respecta a Alessandri, partió nuevamente de viaje a Italia, donde le dijo al ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini, el conde Ciano, que probablemente «bastante pronto» volvería al poder. Nunca lo hizo. Pero no porque dejara de intentarlo. Nunca se dio por vencido. En el momento de su muerte¹⁵, a la edad de 81 años (24 de agosto de 1950), estaba nuevamente en el Senado y, de más está decirlo, era su presidente. A fin de cuentas, fue un hombre extraordinario.

¹⁵ En circunstancias similares, según algunos, a las del presidente Félix Faure de Francia en 1899.

Cuarta parte

El desarrollo industrial y el nacimiento de la política de masas

En las décadas entre 1932 y 1964, Chile amplió su tradición democrática, acompañada por la expansión de este derecho político y por la vigorosa competencia de los partidos, con la izquierda marxista ya como un actor establecido. Tras catorce años de predominio del Partido Radical (1938-1952), se produjo la elección del antiguo dictador Ibáñez y, en 1958, la llegada de un gobierno de derechas encabezado por Jorge Alessandri. Desde la década de 1930, el Estado fue tomando cada vez con más vigor las riendas de la economía, en la medida en que el crecimiento basado en las exportaciones era reemplazado por un desarrollo «dirigido hacia el interior»; aunque la exportación de cobre siguió siendo un factor vital para la economía. El impulso de la industrialización arrojó algunos resultados impresionantes en sus comienzos. La innovadora entidad estatal de desarrollo, la CORFO, espoleó dicho avance industrial. El progreso urbano, sin embargo, no iba acompañado del progreso en el campo, dominado por las haciendas. En la década de 1950, el crecimiento económico había disminuido y aumentaba la presión por una reforma «estructural». Quedaba abierto el camino para los partidos con fuertes programas reformadores.

GOBIERNOS

1938-1941:	Pedro Aguirre Cerda
1942-1946:	Juan Antonio Ríos
1946-1952:	Gabriel González Videla
1952-1958:	General Carlos Ibáñez
1958-1964:	Jorge Alessandri*

* hijo del presidente de 1920-1925 y 1932-1938.

Los radicales, el general de la esperanza y el hijo del León, 1938-1964

La crisis política había alcanzado un punto insostenible. La bancarrota económica y moral, el resultado de un largo periodo de actividad política al servicio de los privilegios y la codicia de un círculo partidario, había acelerado en gran medida el proceso de descomposición.

Presidente Carlos Ibáñez, 1953

La exitosa restauración de las instituciones llevada a cabo por Arturo Alessandri constituyó el primer paso hacia la ampliación de la tradición democrática chilena. Sin embargo, aunque la política misma ya no era propiedad exclusiva de la clase alta tradicional, a la democracia todavía le quedaba mucho camino por recorrer durante la década de 1930 y de 1940. Dado que las mujeres aún no tenían derecho al voto para las elecciones nacionales (lo obtuvieron en 1949), el electorado no creció significativamente hasta la década de 1960. Además, la Constitución de 1925 había establecido una representación proporcional y este complejo sistema (creación del belga Víctor D'Hondt) incentivaba la fragmentación partidaria al tiempo que limitaba las posibilidades de los partidos insurgentes (especialmente los de izquierda) para desafiar el orden existente. Además, el gobierno se negó por mucho tiempo a redistribuir los distritos electorales según los cambios que había experimentado la población. Esto benefició al campo, controlado por la derecha, a expensas de las ciudades, bastiones de la izquierda. La venerable tradición de la compra de votos, también persistió hasta bien entrada la década de 1950.

Los partidos conservaban muchos de los rasgos del carácter que habían tenido en el periodo parlamentario, llegando al Congreso (como pensaban algunos) «no por el merecimiento indiscutible de sus hombres, sino exclusivamente por los recursos de que dispone»¹. Puede que esto no haya garantizado el *statu quo*, pero sí implicaba que los cambios se podían producir con mucha lentitud. Hasta que se pusieron en práctica las

¹ Carlos Sáez Morales, *Y así vamos...*, 1938, pág. 79.

importantes reformas electorales de 1958 y 1962, los políticos conservadores y liberales controlaron siempre entre el 30% y el 40% del voto popular —fundamentalmente gracias a los votos de los inquilinos, que aún podían manipular—. La izquierda, expropiada por el sistema de D'Hondt de la cantidad de asientos que realmente le correspondía, conseguía entre el 15% y el 28%.

Los radicales ocuparon finalmente, en las elecciones de 1938, el lugar que les correspondía. Entre la década de 1930 y comienzos de la década de 1960, el partido unitariamente más importante (y, en el verdadero sentido, el más popular) fue el Partido Radical, que combinaba en un delicado equilibrio intereses a menudo en conflicto. No es sorprendente que los propios radicales resultaran verdaderos maestros en el clásico juego chileno de formar coaliciones. Sin embargo, esta habilidad para maniobrar tenía un alto coste; a la larga, significó el descrédito para el Partido a los ojos de los votantes, que llegaron a considerar los cambios de los radicales como simples esfuerzos para perpetuarse en el mando. A su debido tiempo, esto produjo una «revuelta del electorado» comparable a la de 1920. En 1952, los votantes se volvieron hacia el antiguo dictador, Carlos Ibáñez, y en 1958 hacia el «independiente» Jorge Alessandri, el «hijo del León» —hombres que públicamente se declaraban «por encima» de la política—.

PEDRO AGUIRRE CERDA, 1938-1941

De alguna manera, la victoria del Frente Popular había sido accidental: si los nacistas no se hubieran rebelado, puede que Ross se hubiera abierto camino hasta La Moneda. El Frente era una confederación de elementos a menudo mutuamente excluyentes, unificados más por su odio a la derecha que por algún verdadero objetivo común. Una vez que los defectos inherentes de la alianza quedaron expuestos, ésta se desintegró. Sin duda, *don Tinto* debería haberse dado cuenta de que su estrecha victoria electoral difícilmente constituía una base sólida para un gobierno que debía enfrentarse a ciertos cambios. Su programa requería que el Estado estimulara la economía, mejorara la suerte de los trabajadores urbanos y rurales y (al menos en forma implícita) empleara a la creciente clase media en la burocracia. De hecho, la cantidad de miembros de los sindicatos seguía creciendo (como lo hizo la cifra de huelgas y su duración), mientras el número de empleados públicos aumentó casi en un sexto entre 1937 y 1941. Ahora bien, aunque Aguirre Cerda había prometido redistribuir la tierra y crear sindicatos obreros, no se atrevió a mantener su palabra. Un ataque serio a las haciendas bien podía elevar el precio de los alimentos de primera necesidad y, con ello, echar por la borda su estrategia económica. El presidente olvidó las promesas que había hecho durante su campaña de llevar la justicia al campo, a cambio de la tolerancia latifundista con respecto a sus programas urbanos y de la industrialización.

De hecho, nada de lo que pudiera hacer aumentaba sus probabilidades de congraciarse con la derecha. Él no pertenecía a la clase alta y (quizá porque era mestizo y físicamente poco atractivo) los chilenos más acudados lo despreciaban, aunque en realidad resultara más educado que la mayoría de ellos. Los deseos sociales por sí solos no lograban mucho y los conservadores más obsecados no estaban por encima de la posibilidad de conspirar con los ibañistas y con los oficiales del Ejército contrarios al gobierno para derrocarlo por la fuerza. En agosto de 1939, el general Ariosto Herrera (con el apoyo de Ibáñez) intentó un abortado golpe de estado. La derecha, no obstante, prefería recurrir más bien a su mayoría en el Congreso para impedir el programa legislativo de Aguirre Cerda a través de una serie de tácticas obstructivas².

Sin embargo, Aguirre Cerda gozó de una buena suerte un poco perversa. En condiciones normales, su intención de que el Estado se involucrara más directamente en la economía habría encontrado una resistencia legislativa insuperable. No obstante, en enero de 1939, un terremoto devastó Chillán y gran parte de la zona entre los ríos Maule y Biobío. Por lo menos 5.600 personas murieron y 70.000 quedaron sin hogar. La necesidad de reconstruir un sur devastado hizo que Aguirre Cerda creara un nuevo organismo fiscal de desarrollo: la CORFO (Corporación de Fomento), cuyo fin era supervisar el programa de reconstrucción. Desde un comienzo, la CORFO tuvo a su cargo además un papel a largo plazo: impulsar las fuentes de energía chilenas y promover la industrialización. El Congreso aprobó el nuevo organismo con el más estrecho de los márgenes.

En muchos sentidos, Aguirre Cerda tuvo casi tantos problemas con sus aliados putativos como con sus adversarios. Los socialistas, que encontraban sus reformas demasiado suaves, se disputaban con los comunistas el control del movimiento sindical y el liderazgo de la izquierda. Tenemos que señalar aquí que la Segunda Guerra Mundial, para entonces en pleno desarrollo, afectó a la política chilena más que la guerra de 1914-1918. El pacto de no agresión de Stalin con Hitler (agosto de 1939) exacerbó la hostilidad entre socialistas y comunistas. Los comunistas siguieron escrupulosamente las directivas de Moscú, denunciando al Frente Popular, incentivando las huelgas y casi revirtiendo su política anterior de la «intransigencia». Mientras tanto, los socialistas (no por primera vez) sufrieron un cisma interno, que redujo su votación en bloque en el Congreso en un tercio. También los radicales sufrieron divisiones internas: el ala izquierda del partido se opuso al giro de Aguirre Cerda hacia la derecha; el ala más conservadora, sin consultar al presidente, trató de entablar una alianza con los conservadores y los liberales.

Por último, el Frente Popular se desintegró a comienzos de 1941, cuando los socialistas y el movimiento obrero se retiraron formalmente. Sin embargo, aunque el Frente no sobrevivió, la nueva estructura de las alianzas políticas sí lo hizo: la izquierda y el cen-

² El Centro (agraristas, nacistas, Falange y demócratas) obtuvo quince diputados y cuatro senadores.

tro cooperaron en la campaña de las elecciones parlamentarias de 1941; los radicales, los comunistas y otros grupos más pequeños formaron un bloque de votantes; los liberales y los conservadores se aliaron en otro. Los socialistas fueron solos. La alianza radical-comunista fue provechosa: los radicales obtuvieron seis asientos en el Senado y cuarenta y dos en la Cámara de Diputados; los comunistas aumentaron su representación de un senador a cuatro y de seis diputados a dieciséis. Los socialistas perdieron dos asientos: resulta tentador echarle la culpa al interior del partido, pero el culpable más probable quizá sea el sistema de D'Hondt.

La coalición radical-izquierda, si bien había ganado el 50% de los votos, se encontraba en una situación precaria. Las actividades del ministro del Interior, Arturo Olavarría Bravo, que sin inmutarse extorsionó a la comunidad judía de Santiago y que también sin inmutarse persiguió a la prensa opositora, se enfrentó de tal manera con el ala izquierda del Partido Socialista que se retiró del gobierno. Otra distracción más fue la continua y amarga rivalidad entre los comunistas y los socialistas. No obstante, cuando, en junio de 1941, Hitler invadió la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, hasta entonces condenada como una lucha imperialista, se convirtió de pronto en una gran cruzada antifascista donde incluso los socialistas y los radicales encontraban un lugar. De esta manera, los socialistas podían volver a forjar su alianza con los comunistas y los radicales en una continuidad *de facto* del Frente Popular. Esta nueva solidaridad llegó demasiado tarde para Aguirre Cerda, ya gravemente enfermo de tuberculosis. A mediados de noviembre de 1941, dimitió. Falleció al cabo de quince días.

Retrospectivamente, se aprecia que el gobierno de Aguirre Cerda contribuyó de manera esencial al destino de Chile: integró los partidos marxistas en el sistema político; construyó escuelas y viviendas de bajo coste; incentivó la formación de asentamientos agrícolas e incluso redistribuyó algunas tierras; y, en especial, creó la CORFO. Aún así, el propio Aguirre Cerda parecía menos que satisfecho con su desempeño:

Le prometimos al pueblo sacarlo de la miseria, levantarle su nivel social, económico y moral. Aparte de la acción inteligente y constructiva de unos cuantos de mis ministros, hemos perdido aquí el tiempo con largos debates y discusiones, sin llegar nunca a las soluciones prácticas y efectivas de los grandes problemas. Me embarga el alma una profunda pena, porque me imagino que el pueblo, al que tanto amo, pudiera pensar que lo he engañado?

Aguirre Cerda tenía buenas razones para sentir esta desesperanza. Con el fin de lograr *algunos* cambios, tuvo que ceder ante el poder tradicional y aplacó a los hacendados

³ Arturo Olavarría Bravo, *Chile entre dos Alessandris*, 4 vols., vol. I, 1962-1965, pág. 555.

abandonando su reforma agraria; se congració con los industriales otorgándoles el monopolio de la base industrial del país; recompensó a la clase media urbana dándole trabajo en la floreciente burocracia. En resumen, todos excepto los más necesitados compartieron la bonanza. Estas concesiones sirvieron para perpetuar (y en algunos casos agravar) los males estructurales de la sociedad chilena. No obstante, ¿podría Aguirre Cerda haber hecho mucho más?

JUAN ANTONIO RÍOS, 1942-1946

La carrera por el poder que se produjo tras la muerte de Aguirre Cerda reveló la fragilidad de la memoria política chilena. A pesar de su primera dictadura y de su propensión a la conspiración, Carlos Ibáñez emergió como uno de los principales contendientes por la presidencia vacante. Su oponente más poderoso era Juan Antonio Ríos, terrateniente del ala conservadora de los radicales (y antiguo colaborador de Ibáñez), que logró derrotar a un adversario más liberal y ganó la designación por su partido.

Gracias a la sensación de que votar por Ibáñez era votar por el fascismo y al anhelo público de crear la propaganda en que Ríos se autoproclamaba el «soldado de la libertad»⁴, éste triunfó con el 55,7% de los votos (febrero de 1942). Su coalición, la Alianza Democrática, al igual que la de Aguirre Cerda, estaba formada por componentes sumamente inestables: radicales, comunistas, socialistas, liberales alessandristas. Y también, al igual que la de Aguirre Cerda, una vez que hubo desaparecido su objetivo común (en este caso, el odio por Ibáñez), la débil alianza se desintegró.

El primer gabinete del presidente Ríos (de «Unidad Nacional») estaba formado por cinco radicales, tres socialistas, dos liberales y dos demócratas. Al cabo de seis meses de gobierno, se disolvió. A continuación (octubre de 1942), Ríos recurrió a un gabinete de la «Alianza Democrática» (radicales, socialistas, demócratas e independientes), pero éste también entró en crisis cuando el presidente se negó a romper las relaciones diplomáticas con el Eje. Los radicales, divididos por sus propias luchas intestinas, se mostraron poco cooperadores. Por desgracia, Ríos no pudo compensar las defecciones de la derecha con el apoyo político de la izquierda: los socialistas lo atacaron por ser demasiado conservador y se retiraron del gobierno a comienzos de 1943.

La situación política se tornó desagradablemente parecida a la del régimen parlamentario. En junio de 1943, Ríos nombró a un gabinete «administrativo» no partidista, sustituyéndolo tres meses después por una fórmula radical-liberal-independiente. En ese momento, se encontraba cada vez más presionado por el Ejército (al borde de la rebelión,

⁴ Citado en Luis Palma Zúñiga, *Historia del Partido Radical*, 1967, pág. 226.

según un informe diplomático) y por sus colegas políticos. En 1944, el Partido Radical exigió que cortara relaciones con la España franquista, reconociera a la Unión Soviética, expulsara a los liberales del gobierno y formara un gabinete que fuera exclusivamente radical o que reflejara la composición de la Alianza Democrática. Cuando Ríos se negó, el Partido Radical expulsó a todos los miembros que sirvieran en su gobierno. Ríos se había así convertido, por el momento, en un presidente sin partido. En noviembre de 1944, nombró un segundo gabinete «administrativo».

Dado el nivel de lucha política interna, no sorprende que la oposición haya obtenido buenos resultados en las elecciones parlamentarias de 1945. Los partidos Liberal y Conservador, que acusaban a Ríos de corrupción y de ser demasiado tolerante con el comunismo, ganaron el 41% de los votos, lo cual se tradujo en veinte asientos en el Senado y sesenta y nueve en la Cámara de Diputados. Los radicales sufrieron un moderado revés, mientras los comunistas y (especialmente) los socialistas salieron mucho peor. La debacle electoral de la izquierda complicó aún más la situación política de Ríos. Tras dos intentos abortados, logró formar (mayo de 1945) un gabinete que reunía a radicales, demócratas, la Falange y Socialistas Auténticos (seguidores de Marmaduke Grove). Esta mezcla incompatible aún no le daba la mayoría en la Cámara Baja. Para colmo de males, se le sumaron otros problemas rápidamente. El fin de la Segunda Guerra Mundial significó el retorno de los comunistas al campo antigubernamental, una posición que parecía agradarles.

Un cáncer terminal obligó a Ríos a renunciar a la Presidencia en enero de 1946. Durante lo que quedaba del año, Alfredo Duhalde, radical derechista, ofició como vicepresidente. Su mandato no fue de ninguna manera tranquilo debido a la ola de huelgas dirigidas por los comunistas. Una demostración en la Plaza Bulnes de Santiago (enero de 1946) se tornó violenta, dejando muchos heridos y algunos muertos. En protesta contra la brutalidad de la policía, varios ministros del gabinete renunciaron, debilitando el gobierno provisional. La muerte de Juan Antonio Ríos (junio de 1946) obligó al país a realzar su segunda elección presidencial en cinco años.

La lucha interna de los partidos durante el gobierno de Ríos produjo más de un comentario crítico. Como señaló un escritor: «La situación resultante tenía que ser una situación de hermafroditismo político, en la cual faltaba el sexo de una ideología central definida».⁵ Sin embargo, también es posible una visión más generosa. Ríos puso en marcha planes para construir la primera fábrica de acero del país, organizó la industria del petróleo y creó el monopolio eléctrico. Y, poniendo a Chile en el campo aliado (en enero de 1943 se produjo la ruptura de relaciones con el Eje), le garantizó a su país un lugar en

⁵ Óscar Bermúdez, *El drama político de Chile*, 1947, págs. 143-144.

las Naciones Unidas.⁶ Su objetivo, afirmó una vez, era «un gobierno de izquierda, pero de una izquierda de orden, de tranquilidad y respeto para todos los derechos ciudadanos legítimos».⁷ Esta valiosa meta estaba muy por encima de su alcance, incluso aunque hubiera logrado crear una base política estable, lo cual jamás fue ni siquiera remotamente probable.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, 1946-1952

Cuatro hombres se ofrecieron para reemplazar al desafortunado Ríos: Gabriel González Videla, candidato de los radicales y los comunistas; el Dr. Eduardo Cruz Coke, por el Partido Conservador y la Falange; Bernardo Ibáñez (sin relación con el general), designado por los socialistas; y Fernando Alessandri, hijo de don Arturo, respaldado por el Partido Liberal junto con algunos grupos escindidos de los partidos más importantes, así como pequeños partidos, como el Partido Fuerza Laboral Agraria, recién formado y que pronto se independizaría, aunque brevemente.

González Videla (de 47 años en la fecha), hombre del ala izquierda del Partido Radical, había sido embajador de Aguirre Cerda en Francia. Su clara posición izquierdista era tan contraria para muchos de sus compañeros radicales que se abstuvieron de votar en la convención para la designación y se retiraron cuando ganó González Videla, formando el Partido Radical Democrático (dirigido por Arturo Olavarría Bravo). Su defección no perjudicó realmente a González Videla, cuya estrategia electoral era reclutar el apoyo siempre útil de los comunistas.

Los comunistas, por su parte, se esforzaron mucho en la campaña. En la «proclamación» de González Videla como candidato, el poeta Pablo Neruda (senador comunista) contribuyó con una emotiva balada:

En el norte el obrero del cobre,
en el sur el obrero del riel,
de uno a otro confín de la patria,
el pueblo lo llama Gabriel.

Por su parte, Eduardo Cruz Coke, un médico influido por el socialismo cristiano, abogaba por un mejor servicio médico para los pobres y el término de la inflación; aun-

⁶ Chile anunció un estado de guerra con Japón en febrero de 1945 e, inmediatamente después, firmó la Declaración de los Estados Unidos; sin embargo, nunca le declaró la guerra realmente a Alemania. Argentina (al menos cinco semanas antes del suicidio de Hitler) les declaró la guerra a Japón y a Alemania «como el aliado de Japón».

⁷ Citado en Palma Zúñiga, *Historia*, pág. 228.

que, a diferencia de González Videla, no presentó un programa económico elaborado. Tampoco lo hizo Fernando Alessandri. Bernardo Ibáñez, el socialista, participó en la competencia más para estar presente que porque tuviera alguna expectativa real de ganar. En la elección de septiembre de 1946, González Videla ganó el 40,1% de los votos contra un 29,7% de Cruz Coke y un 27,4% de Alessandri. Dado que no había obtenido la mayoría absoluta, el Congreso debía ratificar la elección. Con el fin de obtener el respaldo del Congreso, González Videla prometió todo tipo de cosas a todo tipo de hombres: a los liberales les ofreció puestos en el gabinete; y a la oposición, la sindicalización del campo. Cimentó su alianza con los comunistas, los defensores más estridentes de la reforma agraria, con similares promesas de cargos ministeriales. «Yo les aseguro a ustedes», dijo, «que no habrá poder humano ni divino capaz de romper los lazos que me unen al Partido Comunista y al pueblo».⁸ Esta estrategia múltiple funcionó: el Congreso lo eligió presidente por 136 votos contra 46. Al parecer, a González Videla nunca se le pasó por la cabeza que un gabinete compuesto por radicales, liberales y comunistas, todos ellos enfrentados entre sí, constituiría con dificultad una garantía de tranquilidad futura.

A finales de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la guerra fría, la situación era indudablemente complicada. El Partido Comunista retomó sin más la lucha de clases. Ahora sus miembros ocupaban puestos clave en el gobierno, gracias a lo cual consigieron aumentos salariales para sus sindicatos mientras impedían que otros sindicatos votaran la huelga. Las elecciones municipales de 1947 revelaron la astucia de esas tácticas: los comunistas ganaron el 16,5% de los votos, convirtiéndose así en el tercer partido más popular del país (después de los radicales y los conservadores).

Las consecuencias políticas del avance comunista fueron inmediatas. Los liberales y los radicales, al ver que los comunistas estaban obteniendo los mayores beneficios de la coalición de González Videla, se retiraron del gobierno. Privado del apoyo parlamentario y temeroso también de que los comunistas se hubieran vuelto demasiado poderosos, el presidente pidió la renuncia de los tres ministros comunistas (abril de 1947). Los comunistas aceptaron, con la absoluta esperanza de que serían nombrados para un nuevo gabinete. No lo fueron. Entonces recurrieron a métodos «extraparlamentarios» para dejar claro su punto de vista. Utilizando sus sindicatos como tropas de choque, llevaron la disputa a las calles y desafiaron abiertamente al gobierno. En junio de 1947, una huelga de los conductores de autobuses de Santiago degeneró en violencia: cuatro hombres murieron y veinte resultaron heridos. González Videla declaró Santiago zona de emergencia, lo que produjo predecibles diatribas en la prensa comunista.

El más violento de estos enfrentamientos ocurrió en los campamentos mineros del sur, que quedaron paralizados por las huelgas en dos ocasiones (en agosto y octubre

⁸ Florencio Durán Bernal, *El partido radical*, 1958, pág. 426.

de 1947): invierno y casi primavera, las mejores épocas para ejercer presión en un país donde el carbón era el principal combustible. En ambas ocasiones, el gobierno recurrió a los poderes de emergencia, enviando tropas incluso para restablecer el orden. El propio González Videla viajó a los yacimientos carboníferos (noviembre de 1947), donde, con ayuda socialista y sus propias expresiones de simpatía por los huelguistas, logró que retornaran al trabajo. No obstante, apenas se hubo restablecido la paz en el sur, estalló una huelga en la mina de cobre de Chuquibambilla. Los dirigentes de los trabajadores pidieron que González Videla fuera el árbitro en los puntos principales. La Compañía aceptó a regañadientes su autoridad con el fin de solucionar la disputa. Sin embargo, los comunistas tomaron el control en una desordenada reunión del sindicato y consiguieron que se repudiara el trato del arbitrio. Un González Videla furioso declaró el estado de sitio y encarceló al organizador local de la fuerza laboral comunista. Tras la restauración del orden, los mineros volvieron a aceptar el arbitrio.

Culpando a los comunistas de fomentar la intranquilidad laboral y temiendo que el Partido, con el apoyo masivo de las embajadas soviéticas en Santiago, pudiera generar más desórdenes internos, González Videla rompió relaciones diplomáticas con los países comunistas. Y resolvió crear un gobierno fuertemente anticomunista. Esta decisión puede considerarse fundamentalmente como un medio de escape para una situación política intolerable (producida en gran medida por el propio González Videla) y también como una forma de aplacar a los Estados Unidos. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Spruille Braden, ya antes se había opuesto a otorgarle créditos a Chile alegando los vínculos de González Videla con los comunistas, y el presidente estaba ansioso por recuperar el generoso apoyo norteamericano.

De esta manera, la suerte estaba echada. En julio de 1948, entró en funcionamiento un «Gabinete de Concentración Nacional», formado por radicales, liberales, socialistas, conservadores y demócratas. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue introducir una legislación que declaraba al Partido Comunista fuera de la ley. La Ley por la defensa permanente de la democracia (conocida por muchos como la «Ley Maldita») prohibió el Partido Comunista, eliminó a más de 20.000 comunistas de los registros electorales y excluyó a muchos otros de participar en el movimiento sindical. González Videla, por lo menos, no repitió las tácticas del régimen de Ibáñez: el gobierno sí «relegó» a cientos de comunistas al antiguo puerto salitrero de Pisagua, pero no ordenó que fusilaran a ninguno de ellos. Muchos, sin embargo, se vieron obligados a esconderse, incluido Pablo Neruda, que fue expulsado del Senado. González Videla afirma haber dado orden a la policía de: «Buscarlo y no encontrarlo». Sea esto cierto o no (probablemente lo sea), Neruda pronto logró cruzar las montañas del sur rumbo al exilio, lo cual aumentó su ya creciente fama.

El estar fuera de la ley no hizo desaparecer a los comunistas, ni tampoco concluyó su lucha. En junio de 1949, una reunión de una «organización de fachada» comunista en

el Teatro Caupolicán de Santiago terminó en un intercambio de balazos que dejó a cuatro policías y veinte civiles heridos. Un episodio aún más grave ocurrió dos meses después. Algunos estudiantes de Santiago organizaron una protesta por el alza que el gobierno había impuesto en las tarifas de los autobuses. Había quienes creían que los comunistas tenían la esperanza de convertir esta manifestación en una rebelión urbana similar al Bogotazo de Colombia (abril de 1948). Temiendo que se repitiesen las sangrientas luchas callejeras de Santiago de 1905, La Moneda puso en alerta algunas unidades armadas y otros refuerzos en la capital. Ante este avasallador despliegue de fuerzas, los enfrentamientos cesaron.

La represión de los comunistas no significó la calma política. Perturbadores signos de insatisfacción comenzaron a evidenciarse en el Ejército. En 1948, en lo que llegó a ser conocido irónicamente como el «complot de las patitas de chanchos», un general retirado, Ramón Vergara Montero, secundado por algunos civiles y ciertos oficiales en el servicio activo, intentó persuadir a González Videla de que asumiera poderes dictatoriales y aplastara el «marxismo». Si González Videla se negaba, los supuestos rebeldes planeaban poner a Carlos Ibáñez en la Presidencia. Aunque posteriormente desmintió estar involucrado, Ibáñez no era en modo alguno inocente: sin duda su nombre era usado por los conspiradores con la esperanza de ganar adeptos en el interior de las fuerzas armadas. La conspiración falló: una de las esposas de los supuestos rebeldes, al parecer locamente enamorada de don Gabriel, se convirtió en informante (octubre de 1948) y el complot fue desmantelado.

El triunfo de González Videla sobre los conspiradores militares no terminó con sus dolores de cabeza políticos. Enfrentado con una creciente inflación, su ministro de Hacienda, Jorge Alessandri, puso en marcha un programa de austeridad. A comienzos de 1950, cuando quedó en evidencia que el apretarse el cinturón no estaba funcionando, el gobierno congeló los salarios y los precios, jugada que enfureció a los sindicalistas del comercio. Las inevitables manifestaciones, que comenzaron con los oficinistas, se propagaron rápidamente al sector de los transportes. Incluso los empleados de los bancos, tradicionalmente elitistas, se sumaron a ellas. A medida que la presión sobre González Videla aumentaba, el apoyo de su gabinete se debilitaba y finalmente se evaporó. En febrero de 1950, el presidente pidió la renuncia de sus ministros, reemplazándolos por un «Gabinete de la Sensibilidad Social» (radicales, demócratas, cristianos sociales y la Falange), que duró hasta después de las elecciones presidenciales de 1952.

No hay que dejar, en todo caso, que los traumas políticos de González Videla opaquen sus logros: su gobierno supervisó la construcción de una fábrica de acero y de una fundición; remodeló la ciudad de La Serena con un encantador estilo pseudocolonial; amplió la cobertura de la Seguridad Social; en 1949, las mujeres finalmente obtuvieron el derecho al voto. Lamentablemente, hay un lado más sombrío, no sólo con respecto a la

gestión de González Videla, sino de las tres presidencias radicales. La votación fraudulenta no había sido eliminada; La Moneda todavía daba trabajo para saldar las deudas y ganar nuevos favores. Y lo que es más nefasto, el sistema de los partidos comenzaba a desintegrarse. Dieciocho partidos, muchos de ellos facciones de organizaciones antes monolíticas, estaban multiplicando hasta el infinito los candidatos para las elecciones parlamentarias de 1949. Catorce partidos obtuvieron asientos: los liberales y los conservadores acumularon casi el 40% de los votos; los radicales, aproximadamente el 22%. La izquierda, formada por tres partidos socialistas fraccionarios (con los comunistas fuera de combate) consiguieron un mero 9%. Los asientos restantes, casi un tercio, quedaron en manos de partidos nuevos o de grupos escindidos de los partidos tradicionales.

El nuevo Congreso de 1949 no sólo era fragmentario. Su composición tampoco reflejaba con precisión la realidad política. Desde la década de 1920, no se realizaba una redistribución de los distritos electorales. El sistema de D'Hondt siguió negándoles a los votantes una elección justa de diputados y senadores. El soborno electoral todavía era común: según las palabras de Eduardo Cruz Coke en 1952, «el mayor vicio de nuestro régimen electoral»⁹. Dado que los parlamentarios ganaban sus puestos mediante el fraude, no tenían mayor necesidad de ajustar sus ideologías (asumiendo que tuvieran alguna) para satisfacer las necesidades de sus electores.

En 1952, Chile parecía estar sufriendo una crisis de fe política. La derecha, sin un liderazgo intelectual fresco y obsesionada con la amenaza del «marxismo», continuaba ensalzando las virtudes de la tierra y de los campesinos, a quienes se les seguía negando el derecho al voto. En la izquierda, los comunistas eran por el momento unos parias, mientras los socialistas desperdiciaban sus energías en disputas. Los radicales se habían ido obsesionando con conservar su poder más que con usarlo. Tras catorce años, el electorado chileno estaba harto de mala administración, corrupción y falsas promesas. Los votantes estaban listos para alguien «por encima» de la política, un padre sabio, un hombre a caballo. Ese hombre era Carlos Ibáñez.

EL GENERAL DE LA ESPERANZA, 1952-1958

Ibáñez nunca había dejado de soñar con volver a La Moneda. En 1952 logró su ambición. Su retorno político comenzó en 1949 cuando fue elegido senador por el recién creado Partido Agrario Laborista (PAL). Nuevo y por tanto inmaculado, el PAL apelaba a todos los que estaban desencantados con los partidos tradicionales. Libre de las trabas de una rígida ideología (su conferencia de 1947 apuntaba a una «democracia funcional de tipo

⁹ Eduardo Cruz Coke, *Geografía electoral de Chile*, 1952, pág. 55.

económico»¹⁰, el PAL parecía de pronto la ola del futuro. Sus candidatos consiguieron catorce diputados y tres senadores en las elecciones parlamentarias de 1949. El PAL le dio a Ibáñez la llave de La Moneda, y con Ibáñez al mando, el PAL podía transformarse en una fuerza real dentro de la política nacional. El Partido se alió con los inevitables grupos escindidos de los antiguos partidos en una nueva coalición, la Alianza Nacional del Pueblo (ANAP) y nominó al antiguo dictador como su candidato presidencial.

En 1952, la contienda estaba asegurada. Los radicales eligieron a Pedro Enrique Alfonso, que prometía fomentar la agricultura y la industria, y terminar con la inflación reduciendo los gastos, fortaleciendo el poder del Banco Central e imponiendo controles de salarios y precios. Los partidos Liberal y Conservador designaron a Arturo Matte, yerno de Arturo Alessandri, quien afirmaba que pondría la economía en manos de tecnócratas y no de políticos. La izquierda, mientras tanto, postuló a Salvador Allende, la estrella ascendente del Partido Socialista, que articulaba la plataforma más radical: control estatal de las minas de cobre y de las industrias más importantes, reforma agraria, programas de obras públicas y la instauración de un sistema de impuestos progresivo.

Frente a todo esto, la ideología de Ibáñez no estaba bien definida, por no decir que era oscura. Y él convirtió lo anterior deliberadamente en una virtud, describiendo el ibañismo como una fuerza «orgánica»¹¹. Los chilenos, a su modo de ver, no necesitaban partidos, sino sólo «un sentimiento profundo, noble y desinteresado sobre el patriotismo y la justicia social»¹². Esta frase era obviamente atractiva en 1952. Como señaló la revista *Topaze*, quienes apoyaban al general vieron en él una especie de guardián¹³. Muchos políticos también lo vieron como un salvador, alguien que representaba «el comienzo de un nuevo régimen para Chile, en el que imperarían el puritanismo político, la decencia administrativa y la justicia social. Un régimen tan trascendente no podía durar el corto plazo de un periodo presidencial»¹⁴.

Ibáñez no hizo nada para acabar con estas ilusiones y a menudo se refugió en las sombras de una vaga generalización. No leyó su programa político hasta después de que fue publicado. Prometió la tierra, planificación económica, centralización de la banca, reforma agraria y tributaria, control de las compañías del cobre, y el fin de la inflación. Todo lo que se necesitaba para cumplir estas promesas, decía implícitamente, era fuerza de voluntad: «Como no acostumbro a prometer lo que no puedo cumplir», afirmó, «les

¹⁰ Cristián Garay, *El partido agrario laborista 1945-1958*, 1990, págs. 44, 53, 69.

¹¹ Citado en Donald Bray, «Peronism in Chile», *Hispanic American Historical Review*, 47, 1, 1967, pág. 67.

¹² René Montero Moreno, *La verdad sobre Ibáñez*, 1952, pág. 201.

¹³ *Topaze*, 12 de septiembre de 1952, citado en Jean Grugel, «Populism and the Political System in Chile: Ibañismo (1952-1958)», *Bulletin of Latin American Research*, 11, 2, 1992, pág. 176.

¹⁴ Olavarría Bravo, *Chile entre dos Alessandri*, vol. II, pág. 63.

declaro solemnemente que [...] detendré el encarecimiento de los medios de vida [...], porque esa es mi voluntad»¹⁵.

Ibáñez gozó de ciertas ventajas respecto de sus adversarios. Se mostraba austero y la opinión pública creía sus discursos sobre la virtud. Si sus oponentes cuestionaban sus antecedentes democráticos, quienes lo apoyaban tenían una respuesta inmediata: Ibáñez sólo había asumido los poderes dictatoriales porque no había tenido alternativa. Y en 1952 había muchas personas que parecían dispuestas a perder la protección constitucional a cambio de un gobierno honesto y de espíritu reformista. Como observó el jefe de la campaña de Ibáñez (el «generalísimo»), como decían los chilenos), había quienes sinceramente creían que «sólo una dictadura sería capaz de satisfacerlos, arrollando todos los obstáculos [...]»¹⁶. Un periódico pro-Ibáñez afirmó abiertamente que los chilenos *querían* una dictadura, para purificar al país y sacarlo de su postración económica¹⁷.

En las elecciones de septiembre de 1952, Ibáñez aniquiló a sus opositores, obteniendo el 46,8% de los votos, contra el 27,8% de Matte, el 19,9% de Alfonso y el 5,5% de Allende. La dimensión de su victoria sorprendió incluso a Ibáñez. Entre otras cosas, había destrozado el control que los terratenientes ejercían en las provincias del sur. Por primera vez en la historia chilena, los arrendatarios se habían negado a votar como lo exigían sus patrones. La ratificación del triunfo en el Congreso era una mera formalidad.

El general de la esperanza podía haberse ganado los corazones y los espíritus del pueblo, pero el Congreso era otra cosa. Para reforzar su posición legislativa, Ibáñez tenía que arrasar en las elecciones parlamentarias de 1953. Aunque los seguidores del general ganaron cincuenta y tres asientos en la Cámara Baja y trece en el Senado, esto no era suficiente: la oposición seguía controlando el Congreso. En su primera prueba, Ibáñez había fracasado en términos de transformar el esquema político.

El primer gabinete de Ibáñez reflejaba la naturaleza ecléctica de quienes lo apoyaban: una combinación de cuasimarxistas, agrarios y devotos de Ibáñez con poco en común. Dado que el mismo Ibáñez no sabía claramente cómo lograría sus objetivos, sin duda tenían que surgir problemas. Inmediatamente estalló un conflicto entre Juan Rossetti, el ministro de Economía, que defendía una política de austeridad, y Guillermo del Pedregal, el ministro del Interior, que estaba a favor de un ambicioso programa de construcción. Esta disputa interna fue de gran provecho para la oposición (la derecha, la Falange y los radicales), que, en diversos grados, odiaba al presidente. Ibáñez, por su parte, odiaba a los políticos, a quienes consideraba flojos y codiciosos. Dada su antipatía

¹⁵ *Ibid.*, vol. I, pág. 390.

¹⁶ *Ibid.*, vol. II, pág. 120.

¹⁷ *El Estanquero*, 19 de enero de 1952, citado en John L. Pisciotta, «Development Policy, Inflation and Politics in Chile: an Essay in Political Economy», Universidad de Texas, Tesis doctoral, 1971, pág. 171.

mutua, sólo era cuestión de tiempo antes de que Ibáñez y los políticos llegaran a las manos —aunque sólo en términos figurados—.

En 1954, una huelga en las minas de cobre se extendió a otras áreas de la economía, obligando a Ibáñez a declarar el estado de sitio, primero en el norte y luego en Santiago y Valparaíso. Poco a poco, los acontecimientos comenzaban a parecerse a los que habían llevado al derrocamiento de Ibáñez en 1931. El general reaccionó como lo había hecho en sus mejores tiempos: impuso la censura a la prensa y ordenó el arresto de sus oponentes políticos. También pidió la autorización del Congreso para suspender varias garantías constitucionales. Sin embargo, los tiempos habían cambiado: el Congreso no sólo se negó a satisfacer la petición de Ibáñez, sino que dio por terminado el estado de sitio.

El frustrado Ibáñez volvió su mirada hacia los militares, quizá con la aspiración secreta de emular a su colega argentino famoso en el mundo entero, Juan Domingo Perón¹⁸. El cuerpo de oficiales (o parte de él) se mostró receptivo. Incluso antes de que asumiera el cargo, algunos oficiales del Ejército insatisfechos habían formado una logia secreta, PUMA (Por Un Mañana Auspicioso), cuyo fin era asegurarse de que los políticos no le quitaran la presidencia a Ibáñez. Los inquietos oficiales del Ejército y la fuerza aérea formaron luego otra logia militar, la Línea Recta. En febrero de 1955, Ibáñez invitó a algunos miembros de la Línea Recta a tomar el té. Entre las tazas de té, el grupo explicó sus objetivos: el retiro obligado de algunos oficiales de alto rango y poderes dictatoriales para el presidente, de manera que éste pudiera restaurar el orden económico y salvar a Chile del «comunismo internacional». Como ya era típico, Ibáñez no se comprometió con el movimiento, ni tampoco lo repudió. Cuando el alto mando se enteró del té, se puso furioso. Dos generales renunciaron y otros exigieron que los miembros de la Línea Recta fueran castigados por insubordinación, una petición que Ibáñez se negó a cumplir. Todo esto llegó rápidamente a oídos de la opinión pública y el asunto pronto se convirtió en un escándalo nacional. El incidente parecía confirmar la creciente opinión de que, aunque «la mona se vista de seda, mona se queda»; o bien, «una vez conspirador, conspirador por siempre».

Tratar con el Ejército resultó mucho más fácil que derrotar la inflación: el principal enemigo de Chile, según Ibáñez. Quizá tal como le correspondía a un general, trató de terminar con la crisis económica ordenando el control de los salarios y los precios. Una vez más, los trabajadores tuvieron que cargar con el peso de tales medidas y pronto se produjo una ola de huelgas. Ibáñez impuso el estado de sitio, arrestó a los dirigentes

¹⁸ Perón estuvo en Chile en febrero de 1953, donde recibió el aplauso público y una respuesta más silenciosa por parte de los políticos. Argentina ha influido en el Chile del siglo xx tanto en los modismos como, sin duda, en la música popular (tanto el tango como el «neo-fóldore» fueron extremadamente populares en el país), pero *nunca* en política.

sindicales y los «relegó» a un campamento en el desierto del norte. Encarcelar a la gente tampoco terminó con la inflación; meramente volvió al país contra Ibáñez. Cuando el partido Agrario Laboral perdió las elecciones complementarias de 1955, se retiró del gobierno. Por una parte, quienes apoyaban a Ibáñez caían en el caos y, por otra, sus enemigos permanecían inmutables. Los radicales se opusieron a la política de partidos del programa legislativo de Ibáñez. Mientras tanto, en marzo de 1956, los partidos Socialista, Demócrata y Comunista crearon el nuevo Frente de Acción Popular (FRAP), que atrajo a su órbita a los izquierdistas que habían apoyado a Ibáñez. Los radicales, el FRAP y los conservadores arrasaron en las elecciones municipales de 1956, mientras el Partido Laboral Agrario sufrió enormes pérdidas. Y, lo más importante de todo, la competencia parlamentaria de 1957 confirmó el aumento de la tendencia anti-Ibáñez. Los radicales casi duplicaron su representación parlamentaria. También la Falange y los conservadores obtuvieron una buena votación. El PAL perdió la mitad de sus asientos y nunca se recuperó. Obviamente, el general de la esperanza ya no valía mucho a los ojos de los votantes.

Los últimos meses del gobierno de Ibáñez fueron turbulentos. La Federación de Estudiantes, FECH, organizó una campaña de protesta contra el aumento de las tarifas de los autobuses y el alto coste de la vida. Las manifestaciones y el contundente uso que el gobierno estaba haciendo de la policía y el Ejército, junto con los arrestos masivos, produjeron muchos desórdenes callejeros y saqueos (abril de 1957). Cuando la lucha cedió, dejaba tras de sí más de veinte muertos y sectores del centro de Santiago en escombros.

Todos los ojos se volvieron entonces hacia la próxima elección presidencial. Los partidos de centro, los radicales y los demócrata-cristianos (como se llamaba ahora la Falange) habían aumentado su popularidad, pero de todas maneras temían que la derecha pudiera ganar la Moneda. Por tanto, se aliaron con la izquierda para crear una alianza temporal en el Congreso con el fin de frustrar las expectativas conservadoras. La alianza introdujo una legislación para revocar la Ley Maldita y volver a legalizar así el Partido Comunista. También amplió el derecho político al voto, al tiempo que erradicaba las posibilidades de cometer fraudes en las votaciones. Esta reforma particular no sólo mejoró las oportunidades políticas de la izquierda, sino que también le dio un golpe más o menos definitivo al tradicional control de la derecha del voto de los arrendatarios. La cantidad de votantes aumentó en un 30% en las elecciones presidenciales de 1958. Muchos de los nuevos inscritos votaron a la izquierda.

Salvador Allende, el candidato del FRAP, iba por segunda vez en busca de la presidencia. Su programa incluía la nacionalización de las minas de cobre, la reforma agraria y fiscal, el fin de la inflación, el estímulo de la industrialización y una mejora global en la calidad de vida de los pobres. El recién fundado Partido Demócrata-Cristiano designó como candidato al senador Eduardo Frei, quien reforzó su compromiso con la reforma agraria mientras enfatizaba la legalidad y la democracia. Los radicales, por su parte, trataron de formar una

coalición con la izquierda estaba cansada de la vacía retórica del Partido Radical. Como un anatema para la derecha, los radicales se vieron obligados a presentarse solos, eligiendo a Luis Bossay como su portaestandarte.

Los partidos Liberal y Conservador, sagazmente, eligieron a Jorge Alessandri. El hijo de don Arturo había alcanzado cierta fama a escala nacional gracias a las medidas anti-inflacionarias que había tomado como ministro de Hacienda en 1947-1950. Al igual que Ibáñez, Alessandri tenía también una buena reputación: rectitud personal, fortalecida por sus costumbres simples y su eterna soltería. Como Ibáñez, tampoco estaba afiliado oficialmente a ningún partido político. Ingeniero y empresario, parecía el candidato ideal, un «mecánico» que podía arreglar la economía e impulsar el desarrollo.

Sin embargo, Alessandri ganó a duras penas la elección de 1958 con un mero 31,6% contra el 28,9% de Allende, un margen de alrededor de 33.000 votos. Su victoria podía deberse a un accidente. Un sacerdote expulsado, Antonio Zamorano, el «cura de Catapilco», que había entrado en la carrera presidencial con un programa vagamente radical, sacó algunos votos (41.000) que podrían haber ido a parar a Allende. Bossay, el radical, obtuvo el 15,6%, menos que Frei (20,7%).

Ibáñez no sobrevivió mucho tiempo tras su segunda presidencia. Murió en abril de 1960. El símbolo de su campaña en 1952 había sido una escoba: había prometido barrer la nación hasta dejarla limpia, expurgar la burocracia y terminar con la inflación, la especulación y la corrupción. La escoba nunca fue más que una fantasía. La década de 1950 no era la de 1920. Incluso quienes votaron por él en 1952 habían terminado desilusionados con el general de la esperanza. No obstante, la elección de Alessandri mostró que a los votantes todavía les gustaban los hombres que supuestamente se encontraban «por encima» de la política.

EL SEGUNDO ALESSANDRI, 1958-1964

¡Ha ganado la elección el hijo del León!

Así decía un grito popular de la época¹⁹. La elección del segundo Alessandri quizá representaba la última oportunidad que el *statu quo* tenía para reformarse. El primer gabinete («independiente») de Alessandri incluía algunos tecnócratas «políticos» que prometieron poner su experiencia profesional al servicio del gobierno. Las elecciones municipales

¹⁹ Se cree que algunos votantes, especialmente en el campo, pensaron que el propio don Arturo se estaba presentando como candidato.

de 1960 parecieron aprobar públicamente el enfoque de Alessandri. Aunque los radicales obtuvieron los mejores resultados como partido, los liberales y los conservadores ganaron casi el 30% de los votos. El FRAP, que había estado tan cerca del triunfo dos años antes, sufrió pérdidas sustanciales. El Partido Demócrata-Cristiano, por su parte, aumentó su participación en los votos, llegando casi al 14%. Poco después de las elecciones, sin embargo, el gobierno se vio enfrentado a una clásica catástrofe chilena: un gran terremoto (mayo de 1960) que devastó toda el área entre Concepción y Chiloé. Los maremotos asolaron la costa y al menos cinco volcanes entraron en erupción (entre ellos el volcán Osorno). En términos de coste en vidas (al menos varios cientos) y de daños, el desastre era comparable sin duda al de Chillán en 1939 y al de Valparaíso en 1906.

En 1961, la posición política de Alessandri había empeorado, en parte por el desorden económico (al cual había contribuido el terremoto) y por el recrudecimiento de la inflación. El menor apoyo al presidente quedó en evidencia en las elecciones parlamentarias de ese año. Aunque la derecha y los radicales lograron ganar más de la mitad de todos los diputados, la izquierda aumentó su participación en el voto popular al 22% y la Democracia Cristiana siguió ganando terreno. Afortunadamente para Alessandri, la Cámara de Diputados (en parte gracias al sistema de D'Hondt) no reflejaba cabalmente la fuerza de la oposición. Al invitar a los radicales a formar parte de su gobierno (agosto de 1961) y abandonar así su postura previamente «independiente», el presidente logró mantener un holgado control de ambas cámaras. La coalición radicales-liberales-conservadores fue formalizada después (octubre de 1961) como el Frente Democrático.

El cambio político, no obstante, *estaba* en el aire. En 1962, el Congreso aprobó otra reforma electoral, aún más importante que la de 1958. Ésta dejaba fuera de la ley los «pactos electorales» para las elecciones de senadores y simplificaba tanto el registro de los votantes como las papeletas que se usaban en las votaciones. Gracias a las reformas de 1958 y 1962, el electorado aumentó de 1.156.576 en 1958 a 2.915.114 en 1964. Muchos, si no la mayoría de los nuevos votantes, eran pobres. Su énfasis en el mejoramiento de las condiciones de vida imponía nuevas exigencias al sistema político. Dichas exigencias eran difíciles de satisfacer. El resurgimiento de la inflación en 1961 enfureció a los trabajadores, que se declararon en huelga para conseguir una mejor paga en las minas de cobre del norte, en las acerías de Huachipato, en los puertos, en los bancos y en los ferrocarriles. Luego, en 1961, los profesores de colegio también entraron en huelga. A comienzos de 1962, el gobierno tuvo que enfrentarse a los médicos. No todas las manifestaciones de la época terminaban pacíficamente. En noviembre de 1962, los esfuerzos de la policía por restablecer la calma en la población José María Caro terminaron en violencia. Cuando se dispuso el gas lacrimógeno, cinco personas yacían muertas y muchas otras estaban heridas.

Las elecciones municipales de 1963 revelaron la magnitud del descontento con el gobierno de Alessandri²⁰. La alta tasa de abstención (casi un 25%) bien podía indicar el disgusto frente a los partidos políticos tradicionales y a su actitud de hacer «las cosas como siempre». Quienes concurrieron a las urnas, por otra parte, votaron contra la coalición de Alessandri. La derecha (liberales y conservadores) ganó sólo el 23,6% de los votos, una bajada sustancial con respecto a lo obtenido hacía dos años. Los radicales fueron superados ahora (sólo) por los demócrata-cristianos (22%) como el partido con la mayor votación. Los comunistas y los socialistas obtuvieron el 23,5% entre ambos. Claramente se estaba produciendo un cambio profundo. Las reformas electorales de 1958 y 1962 habían dado sus frutos: los demócrata-cristianos y el FRAP controlaban ahora una fracción *mayor* del electorado que los partidos del Frente Democrático.

La filosofía básicamente conservadora de Alessandri no le permitía hacer concesiones políticas importantes a la oposición. Y lo más grave era que, a medida que se reducía su plataforma presidencial, la oposición se volvía cada vez más abierta en sus denuncias del gobierno. Estimulados por su reciente éxito en las urnas, los demócrata-cristianos claramente querían instalarse como el principal partido de oposición, avance que no era visto con entusiasmo por la izquierda.

Y una vez más llegó el momento de las elecciones presidenciales. El Frente Democrático seleccionó (en junio de 1963) a un candidato radical, el potente orador Julio Durán²¹, no sin el recelo de los liberales y de los conservadores. Los demócrata-cristianos (también en junio) eligieron al senador Eduardo Frei, entonces de 52 años, para que los dirigiera en la batalla. El FRAP le dio a Salvador Allende su tercera oportunidad para la presidencia. Esta competencia sería todavía más formidable que la de 1958. Con el respaldo de los comunistas, el FRAP defendía un cambio radical: la nacionalización de las mayores corporaciones monopolizadoras y de los bancos; la reforma agraria; una seguridad social masiva; la concesión de derechos políticos y de sufragio a los analfabetos; el derecho al voto a los dieciocho años.

Si se analizaban los esquemas de votación de las últimas elecciones, Durán y el Frente Democrático parecían los probables ganadores, con Allende y Frei seguramente en el segundo y tercer lugar respectivamente. El destino decidió otra cosa. En marzo de 1964, la diputación de Curicó quedó vacante tras la muerte de su representante, Óscar Naranjo. Como candidato para la elección complementaria, el Frente Democrático tomó

²⁰ Alessandri siguió siendo *personalmente* popular hasta el final. A menudo se le veía caminando (sin guardias) entre el palacio de la Moneda y su apartamento en la plaza de Armas, por lo general con la famosa bufanda que lo distinguía.

²¹ Durán, al igual que Richard Nixon, era dado a abrir sus brazos cuando hacía un discurso. Un irreverente sobrenombre que le habían dado era «Dolipen», desodorante muy conocido en la época.

una decisión poco afortunada: Rodolfo Ramírez, hombre asociado con las élites locales y aliado de los terratenientes. El FRAP, con mucha astucia, designó como candidato al hijo, del mismo nombre, del fallecido diputado, un joven médico conocido por sus obras de caridad. Los demócrata-cristianos, vacilantes al comienzo, finalmente se les unieron.

Dado que Curicó era un distrito rural tradicional, muchos lo consideraban un distrito ganado para los conservadores. Los radicales estaban tan seguros del triunfo que anunciaron que la elección complementaria debería ser considerada un «plebiscito nacional» sobre la política de Alessandri. Esta táctica se volvió ferozmente contra ellos. Una fuerte campaña le dio al FRAP el 39,2% de los votos contra el 32,5% de la derecha. Los demócrata-cristianos obtuvieron el 27,7%, una mejora considerable con respecto a sus resultados anteriores en el distrito.

La elección complementaria de Curicó hizo que se realinearan de inmediato las fuerzas políticas. El Frente Democrático se desintegró rápidamente. Los liberales y los conservadores temían que la candidatura de Durán no fuera lo suficientemente fuerte como para evitar la victoria presidencial de Allende. Los radicales decidieron mantener a Durán como candidato, quizá con la esperanza de que podrían obtener concesiones de Frei o bien de Allende si la elección llegaba a ser decidida en el Congreso. Para los liberales y los conservadores, el problema era elegir el mal menor: sentían poca simpatía por los ambiciosos programas reformistas propiciados por los demócrata-cristianos, pero ninguna por la visión socialista de Allende. Frei era «el mal menor». Se aconsejó a los votantes liberales y conservadores que lo apoyaran; Frei, a cambio, se negó a hacerle concesiones a la derecha.

La elección presidencial de 1964 fue una de las más reñidas de los últimos tiempos. Generó gran entusiasmo y no poco rencor. La campaña de la Democracia Cristiana intentaba reafirmar a la derecha resaltando las fuertes tendencias democráticas del propio Frei, mientras predicaba que, de ser elegido, Allende les permitiría a los ateos comunistas robar o asesinar niños. Para tratar de neutralizar esa propaganda de muy mal gusto, quienes apoyaban a Allende se acercaron a los radicales, ofreciéndoles incluso cargos ministeriales a cambio de su apoyo. Apparently, Durán aceptó la oferta, pero, en el último momento, se arrepintió. Hay quienes creen que Frei (y los Estados Unidos) le ofrecieron al político radical un trato mejor²².

En la elección de septiembre de 1964, Frei ganó con el 56,1% de los votos contra el 38,9% de Allende y un mero 5% de Durán. Frei salió vencedor en Santiago y Valparaíso,

²² Federico Gil y Charles J. Parrish, *The Chilean Presidential Election of September 4, 1964*, parte 1, Washington D. C., 1965, págs. 36-39. A través de la CIA, los Estados Unidos aportaron 2,6 millones de dólares para la campaña de Frei, aparentemente sin que él lo supiera. Frei también recibió ayuda del CDU de Alemania Occidental.

e incluso en bastiones de la izquierda como los distritos mineros. Fue un triunfo singular. Los chilenos discutirían durante años sobre la verdadera naturaleza de la enorme votación en favor de Frei: los demócrata-cristianos, naturalmente, se la atribuyeron a los atractivos de su filosofía; otros sospechaban que había tenido más que ver con el miedo a Allende. No obstante, una cosa era muy clara: por primera vez en la historia de Chile, un partido nuevo y serio, con unos planteamientos también nuevos y serios, había surgido en menos de una década para romper el molde de la política tradicional.

El impulso industrial, 1930-1964

[...] un país del Nuevo mundo con la organización social de la vieja España, gente del siglo xx conservando aún una sociedad feudal; una república basada en la igualdad del hombre y, aún así, con una aristocracia de sangre azul y una clase servil tan claramente separadas como en cualquiera de las monarquías del Viejo Mundo. A través de toda la historia de Chile, se ha dado esta situación. Es la herencia social que constituye el trasfondo de los problemas actuales de la gente de Chile.

George McBride, 1936

En la base de la competencia entre los partidos, que estuvo siempre presente durante las presidencias radicales, de Ibáñez y la segunda de Alessandri, se encontraba el tema del *desarrollo económico*. Los chilenos ya no estaban dispuestos a aceptar los limitados horizontes de sus padres y de sus abuelos. La «revolución de expectativas crecientes» del siglo xx había llegado hasta ellos y esperaban compartir los estilos de vida que otros ya gozaban.

Los radicales querían modernizar la economía y elevar el nivel de vida. Las opciones para Aguirre Cerda y sus sucesores eran, sin embargo, limitadas. La Gran Minería sólo podía lograr una cosa: las minas podían generar ingresos, pero no podían absorber el creciente número de desempleados y de subempleados. Tampoco, mientras se mantuviera el sistema de las haciendas, habría forma alguna de aumentar el empleo en el campo. La industrialización, no obstante, prometía constituirse en una importante fuente de trabajo y, además, modernizaría la economía.

Lograr un mayor desarrollo, como veremos, resultó extremadamente difícil. No había un Portales moderno que impulsara reformas y, de haberlo habido, el sistema político había cambiado de manera tan radical que tampoco se habría acomodado a Portales. El gobierno tuvo que encontrar un equilibrio: establecer y satisfacer las necesidades de los intereses urbanos e industriales sin ofender a las élites tradicionales de la tierra, cuyo dominio político del campo aún les daba el poder necesario para vetar las reformas más importantes con las que no estuvieran de acuerdo. En este sentido, la solución de los problemas de la agricultura era crucial. Por ahí debemos comenzar entonces nuestro análisis de la economía y de las aventuras sociales desde la década de 1930 hasta la de 1960.

LA ECONOMÍA DURANTE EL DOMINIO RADICAL

La agricultura de mediados de siglo

En la década de 1930, sólo el 25% de los predios agrícolas eran productivos; el resto proveía forraje para el ganado o estaba en barbecho. Durante esa misma década, el estado de la agricultura chilena hizo que un visitante norteamericano lamentara que las grandes propiedades «se trabajan ahora tanto como en el periodo colonial»¹. Sin mejoras especiales, la producción agrícola aumentaba tan sólo un 2,4% al año, más lentamente que el crecimiento de la población de un 3% anual. En cifras *per cápita*, la producción agrícola en realidad disminuyó levemente entre 1935 y 1945, mientras el déficit comercial agrícola de Chile crecía casi seis veces entre 1940 y 1954.

Aunque había varias razones evidentes para esta baja (la política de precios del gobierno, la inflación y una infraestructura insuficiente), los economistas tendían a culpar al tradicional sistema de tenencia de la tierra del estancamiento agrícola. Un estudio de 1939 reveló que menos del 1% de todas las propiedades agrícolas abarcaban aproximadamente el 68% de la tierra. En el otro extremo del espectro, el 47% de los terrenos consistía en parcelas de menos de cinco hectáreas, unidades demasiado pequeñas para ser económicamente viables. Además, el estancamiento agrícola había empeorado las condiciones de vida en el campo. Salvo contadas excepciones, señalaba un informe, «estas dos clases de trabajadores (inquilinos y *afuerinos*) no alcanzaban con el producto de sus salarios y regalías, a subvenir ni siquiera [...] la alimentación». En algunos sectores, sólo un campesino de cada seis comía regularmente carne, leche y vegetales frescos. Un estudio del gobierno de 1945 señaló que aquello «que representa nuestro campesinado, alrededor de un millón y medio de personas, no está en condiciones de tener una participación significativa en el proceso de consumo de productos de nuestras fábricas»².

En 1939, Marmaduke Grove, el líder socialista, estimó que unos 340.000 trabajadores del campo chilenos apenas recibían suficiente comida para subsistir y vivían en «tan- chos que no parecen haber sido contruidos para seres humanos»³. La solución de Grove para el problema era simple: «La tierra chilena [...] debe ser [...] el derecho natural para todos los chilenos que quieran trabajarla y que tengan capacidad para hacerlo»⁴. Exigía que los individuos *trabajaran* sus propiedades: el gobierno debía expropiar todos los

¹ George McBride, *Chile, Land and Society*, 2ª ed., Port Washington, N.Y., 1971, pág. 178.

² Ricardo Marín M., *Condiciones económico-sociales del campesino chileno*, 1947, págs. 41, 128, *Plan Agrario*, 1945, págs. 21-22.

³ Marmaduke Grove, *Reforma agraria*, 1939, pág. 58.

⁴ *Ibid.*, pág. 6.

campos que estuvieran en barbecho y el Estado debía dividir las haciendas y redistribuir la tierra. Dicha política, argumentaba «don Marmá» incentivaría una mayor producción, bajaría el precio de los alimentos, impulsaría las exportaciones agrícolas y reduciría la disparidad entre «los que tienen todo» y «los que no tienen nada»⁵. La reforma del sistema de tenencia de la tierra, en resumen, transformaría a Chile:

Ni hombre sin tierra, ni tierra sin hombres,
es el grito del Partido Socialista.
¡La tierra para el que la trabaja!
¡Guerra al latifundio, al ausentismo, y a la explotación del campesinado!»⁶.

La realidad política del periodo no permitió que el Frente Popular siguiera las sugerencias de Grove. Aguirre Cerda se dio cuenta de que una reforma agraria le costaría el apoyo del ala derecha del Partido Radical, cuando además necesitaba el beneplácito de los conservadores y de los liberales para sacar adelante sus programas urbanos e industriales. Retrospectivamente, esta negociación puede parecer algo diabólica. La penetración de la sindicalización rural durante los años del Frente Popular fue neutralizada efectivamente por el SNA, que presionó a Aguirre Cerda para que suspendiera los sindicatos agrícolas. De manera similar, las acciones parlamentarias de 1944 en favor de la sindicalización fueron obstaculizadas por el presidente Ríos.

Fiel a su forma, González Videla adoptó una doble política a este respecto: impulsó a la derecha para que emitiera una Ley sindical rural restrictiva y eliminó la prohibición de Aguirre Cerda. En pocos meses se crearon más de 400 sindicatos, los cuales exigieron de inmediato cambios en sus contratos de trabajo. Una vez más, sin embargo, la realidad política se interpuso. La ruptura de González Videla con los comunistas despejó el camino para la nueva Ley de trabajo agrícola propuesta por la derecha (1947), que prohibía las huelgas agrícolas y limitaba seriamente el espectro de la sindicalización en el campo.

Sin la protección de los sindicatos, las perspectivas para los trabajadores rurales parecían pésimas. Los terratenientes continuaron burlando el Código Laboral de 1931, utilizando una amplia variedad de subterfugios: dejándose estar, buscando exenciones, a veces sobornando a los inspectores del gobierno. Aprovechando su posición en el Congreso, los terratenientes también impidieron que los organismos gubernamentales hicieran valer la ley recortando su financiación. Los arrendatarios, a menudo analfabetos, tenían pocos medios para conseguir reparaciones por parte de la burocracia. Incluso después de que se hubieron difundido los contratos escritos en las zonas rurales, la situación

⁵ *Ibid.*, págs. 16, 24.

⁶ *Acción*, Copiapó, abril de 1942.

no cambió fundamentalmente. No obstante, el gobierno no descuidó el campo por completo. El Estado ordenó que los inquilinos recibieran asignaciones familiares y la protección de una Ley de salario mínimo; y se encargó a los inspectores fiscales que se aseguraran de que las condiciones de vivienda eran adecuadas. Los propietarios de las haciendas, sin embargo, se las arreglaban a veces para subvertir las intenciones de la ley reemplazando a los arrendatarios por aparceros, que no estaban sujetos a la seguridad social ni recibían beneficios familiares.

En términos retrospectivos, la incapacidad de los radicales para actuar parece haberse debido a una falta de altura de miras, aunque pueda parecer comprensible: un ataque a los predios habría disminuido el poder económico de los hacendados y puesto en peligro su control del voto de los arrendatarios. Una vez que las reformas electorales de las décadas de 1950 y 1960 enrolaron a los trabajadores rurales, era sólo cuestión de tiempo antes de que los partidos políticos reformistas se hicieran cargo de su causa. De esta manera, la reforma agraria se convirtió en una de las cuestiones más importantes de la década de 1960 —al igual que la propiedad extranjera de las minas de cobre—.

La minería

Los presidentes radicales descubrieron muy pronto las virtudes económicas del metal rojo. En 1939, los impuestos que se cobraban a las compañías de cobre de propiedad norteamericana alcanzaban el 33%. Los ingresos del gobierno por concepto de estos gravámenes (y del diferencial al cambio del dólar) pasó de 5,3 millones de pesos en 1938 a 25 millones de pesos en 1942. No es de extrañar que las compañías cupríferas se convirtieran en las favoritas del recaudador de impuestos. Siempre había quienes abogaban por ir más allá del simple cobro de impuestos. Ya en 1940, Jorge González von Marées sugirió que el Estado nacionalizara las minas con el fin de «libertarnos del tutelaje yanqui que hoy estamos obligados a soportar, y de adoptar actitudes decididamente nacionalistas en materia económica».⁷ Tales demandas en pro de la nacionalización revelaban cierta hostilidad frente al control norteamericano de la industria minera, que se iría exacerbando con los años.

Cuando el estallido de la Segunda Guerra Mundial disminuyó la venta de cobre a Europa, Aguirre Cerda —a pesar de que el Frente Popular criticaba la «explotación de *Wall Street*»— insistió en que Estados Unidos aumentara la compra de cobre y salitre chilenos. La resistencia inicial de los norteamericanos pronto fue dispersada por Pearl Harbor. Se llegó a un nuevo acuerdo con Estados Unidos, en el que esta nación aceptaba comprar

⁷ Jorge González von Marées, *El mal de Chile*, 1940, pág. 171.

cobre chileno a un precio fijo de 12 centavos la libra y revocar el derecho de importación de 1932; Chile conservaría el 65% de las ganancias. Por otra parte, La Moneda seguía exigiendo que las compañías cupríferas compraran sus dólares a una tasa artificialmente alta, con lo cual los ingresos del fisco aumentaban significativamente.

Aunque la producción decayó después de 1945, la guerra de Corea marcó el fin de la depresión de la posguerra. En junio de 1950, Washington y las compañías cupríferas fijaron el precio del cobre en 24,5 centavos la libra. El gobierno, furioso porque no había sido consultado, exigió un nuevo contrato. El tratado de Washington de 1951 elevó el precio del cobre a 27,5 centavos la libra. El gobierno chileno obtuvo además el derecho de poner en el mercado el 20% de todo el cobre extraído en Chile al precio del mercado mundial (por entonces, de unos 54,5 centavos). Al año siguiente, el gobierno decidió unilateralmente comprar toda la producción de las minas de cobre al precio fijado por el mercado de Nueva York (entonces bastante bajo) y luego vender el metal rojo directamente a los compradores. Así, Chile cosecharía todas las ganancias generadas por la guerra.

Durante las décadas de 1940 y 1950, el cobre había reemplazado por completo al salitre como la principal fuente de ingresos para Chile. Una vez más, la prosperidad del país se equilibraba precariamente sobre la exportación de una materia prima. Como en el caso del salitre, se puede cuestionar la forma en que el gobierno invirtió las ganancias provenientes del cobre. En vez de diversificar la economía o de expandir la infraestructura del país, La Moneda utilizó más del 60% de los impuestos en financiar gastos generales o subsidiar las importaciones. A diferencia de las oficinas salitreras, las minas de cobre no ofrecían la nueva gran fuente de trabajo que una población en crecimiento necesitaba. La tecnología moderna sin duda aumentaba la producción, pero al precio de reducir la fuerza de trabajo en la Gran Minería (la cual cayó de 18.390 trabajadores en 1940 a 12.548 en 1960). Realmente no sorprende el hecho de que los gobiernos radicales tuvieran pocas tantas esperanzas en la industrialización.

La industrialización

La base manufacturera de Chile no sólo sobrevivió a la Depresión, sino que también floreció gracias a ella. Los controles cambiarios, los elevados aranceles proteccionistas y la Segunda Guerra Mundial agotaron el flujo de importaciones y enfrentaron a los chilenos con la disyuntiva de sustituirlas por productos manufacturados a nivel nacional o bien de arreglárselas sin ellas. Claramente, la creación de la CORFO en 1939 resultó crucial en este proceso de «industrialización para sustituir las importaciones» (ISI). La CORFO se planteó tres objetivos primordiales: aumentar el suministro de energía del país para hacer funcionar las nuevas industrias y mejorar las condiciones de vida; poner en funcionamiento

algunas acerías, vitales para cualquier tipo de desarrollo industrial futuro; y crear nuevas industrias.

Garantizar un amplio suministro de energía era esencial para la modernización: en la década de 1930, muchos chilenos todavía dependían de la madera como combustible y fuente de calefacción. En 1944, con el fin de producir energía a un bajo coste, la CORFO creó la ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad), que comenzó a construir plantas hidroeléctricas (Pillmaiquén, Abanico y Sauzal, 1946-1998) y creó las bases para una red eléctrica nacional. En 1965, la energía eléctrica satisfacía el 27,3% de la necesidad global de energía del país (desde el 11,6% en 1940); en esa época, la ENDESA suministraba energía a través de todo el territorio nacional. El Estado también incentivó la expansión de la industria del carbón, estableciendo dos nuevas compañías y distribuyendo fondos para modernizar las minas existentes.

Quizá el cambio más significativo producido en estos términos ocurrió en la producción de petróleo. La Segunda Guerra Mundial dejó en evidencia el peligro, así como el coste, de depender del petróleo importado. En diciembre de 1945, la CORFO descubrió grandes yacimientos petrolíferos en Magallanes. Desde 1950, la ENAP (Empresa Nacional de Petróleo), propiedad del gobierno, coordinó el desarrollo de la industria petrolífera nacional y construyó una refinería en Con. Con. Gracias a la CORFO, los yacimientos petrolíferos satisfacían el 75% de las necesidades de petróleo en la década de 1960.

Además de lograr que el país prácticamente se autoabasteciera de energía, la CORFO construyó el complejo industrial más ambicioso jamás concebido en Chile: la acería de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), en Huachipato, que comenzó a producir en 1950. Ubicada en la bahía de San Vicente, cerca de Concepción, tenía fácil acceso al mar (por donde llegaba el mineral de hierro del Norte Chico), y a carbón local y energía hidroeléctrica barata. Obviamente, la planta tuvo un efecto tónico en la economía de la zona y, a lo largo de los años, el área de Concepción-Talcahuano se convirtió en uno de los mayores centros industriales del país.

Con respecto a la industria manufacturera en general, el estímulo de la CORFO en términos de «sustituir las importaciones» fue considerable. En 1940, por ejemplo, otorgó un préstamo a MADEMSA (Manufacturas de Metales), que fabricaba artefactos domésticos y muchos otros productos usando metales locales. MADECO (Manufacturas de Cobre), también con ayuda de la CORFO, comenzó a producir tubos de cobre, aleaciones y artículos de bronce. Los préstamos otorgados a otras compañías permitieron crear plantas productoras de alambre, artículos eléctricos, motores, radios y neumáticos, así como un par de fábricas de cemento. La CORFO también incentivó a las compañías químicas y farmacéuticas para que utilizaran productos químicos derivados de la refinería del petróleo y de la producción de acero. A una escala más modesta, creó una planta procesadora de azúcar de remolacha y amplió la industria de la carne y de las conservas de pescado, esti-

mulando asimismo la fabricación de ropa y calzado. Aunque la prioridad de la CORFO era el desarrollo industrial, no dejó totalmente de lado el campo; entre otras cosas, creó un servicio de alquiler de tractores (SEAM).

En sus primeras etapas, la industrialización parecía exitosa. Entre 1940 y 1952, la cantidad de chilenos empleados en la industria se disparó casi en un 18%. La producción de las industrias nacionales también aumentó. Por otra parte, las nuevas fábricas dependían cada vez más de las materias primas locales; en 1957, obtenían el 74,4% de sus materias primas de fuentes nacionales (de un 65% en 1940).

Por tanto, la sustitución de las importaciones parecía ir por buen camino. Sin embargo, más o menos a comienzos de la década de 1950, algunas carencias quedaron en evidencia. La base industrial estaba demasiado concentrada en los muebles, la alimentación, las ropas, los textiles y el calzado. Y tampoco todas las nuevas industrias eran necesariamente eficientes. Aún durante este periodo de máxima expansión (1940-1952), el aumento anual de la producción en el sector manufacturero no igualó al de la agricultura. Protegidos por los aranceles aduaneros y las altas tasas cambiarias, los industriales no tenían por qué temer la competencia extranjera. Por tanto, los bienes de consumo producidos en el país muchas veces resultaban más caros que los producidos en Estados Unidos o (lo que es más pertinente) en otros países latinoamericanos.

La industrialización tampoco trajo consigo el esperado aumento global en el nivel de vida. Mientras los industriales cosechaban ganancias sustanciales, la mayoría de sus trabajadores no lo hacía. Los trabajadores mejor pagados eran los empleados de las industrias petroleras y de metales básicos (un mero 5% de la fuerza laboral industrial). La mayoría de los trabajadores fabriles a comienzos de la década de 1950 ganaban alrededor de tres veces lo que los trabajadores rurales. Los ingresos de la clase trabajadora urbana aumentaron mucho más lentamente durante ese periodo que los de los funcionarios públicos o los profesionales.

De hecho, la creación de industrias orientadas al consumo no significó un estímulo a largo plazo para la economía chilena, ni tampoco creó la anhelada fuente de empleo alternativa. El gobierno reaccionó como lo había hecho durante la República parlamentaria: amplió la administración pública. Si queremos ser justos, hay que reconocer que los radicales no fueron los primeros en la tradición de aumentar la burocracia: en el Congreso de 1926, por ejemplo, un diputado se quejó de que «nuestra juventud se educa para ser empleados públicos»⁸. No se puede negar que, a mediados del siglo xx, el Estado desempeñaba una función de mayores dimensiones e importancia, que requería por su parte una burocracia más numerosa, ni tampoco que los funcionarios de la CORFO, por

⁸ Citado en Germán Urzúa Valenzuela y Anamaría García Barzelay, *Diagnóstico de la burocracia chilena 1818-1969*, 1971, pág. 60n.

ejemplo, sirvieran bien a su país. Aún así persiste la sospecha de que la expansión de la administración pública era (parafraseando la famosa frase alusiva al Imperio británico) en parte una válvula de escape para la clase media chilena.

La política fiscal y la inflación

Los gobiernos radicales descubrieron rápidamente que la solicitud de préstamos al extranjero y los ingresos provenientes de los impuestos al cobre no eran suficientes para costear la industrialización y las crecientes operaciones del Estado. En teoría, sin duda, se podría haber gravado a los ricos con el fin de financiar las actividades fiscales, dejando los ingresos del cobre para desarrollar la economía. Esto era considerado peligroso en términos políticos. Más que aumentar los impuestos o imponer programas de austeridad, los radicales, como sus predecesores, encontraron una salida más fácil: la inflación.

La inflación se convirtió en un hábito profundamente arraigado. Entre 1939 y 1942, el volumen de circulante casi se duplicó y el coste de la vida aumentó en un 83%. Estas alzas se originaban directamente en la solicitud de nuevos préstamos que el gobierno hacía al Banco Central. El 80% de los fondos se utilizó para cubrir los déficit fiscales; el resto fue empleado por entidades como la CORFO. Dado el coste de la vida en ascenso, los partidos de izquierda y de centro apoyaron una legislación que elevaba los salarios en un 20%, como un medio para defenderse de la inflación y estimular el consumo y, por ende, la industrialización. Desafortunadamente, las alzas salariales en sí mismas (30% en 1941, 36% en 1942) excedieron el aumento efectivo del coste de la vida y, por ello, aceleraron la espiral inflacionaria. El gobierno virtualmente institucionalizó la inflación cuando, en 1941, creó «comisiones de salario mixto» autónomas, que aumentaban automáticamente los salarios para estar a la par con el alza del coste de la vida. El gobierno también habilitó a algunas corporaciones de desarrollo (especialmente la CORFO) para que emitieran pagarés, que los banqueros podían usar como garantía con el fin de generar más préstamos. Entre 1939 y 1941, por ejemplo, los préstamos al público en general aumentaron en un 15% anual.

El gobierno se negó a detener la inflación, temiendo que tal política pudiera limitar el crecimiento económico. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, mucho más que las brujerías económicas de Ríos, trajo la renovada prosperidad de esos años. La producción minera, estimulada por la demanda norteamericana de cobre, aumentó aproximadamente en un 10%; la producción del sector manufacturero, que funcionaba por primera vez sin competencia extranjera, creció prácticamente en un 50%. En 1943, el PNB aumentó en un 10,4% y se mantuvo en un promedio de más del 8% durante 1944 y 1945.

González Videla corrió peor suerte que su predecesor por causa de la decreciente demanda internacional de cobre. El PNB cayó en un 14% en 1947, pero aun así, el país

logró retomar el camino del crecimiento económico. En 1951, el PNB había experimentado un alza de más de 150 millones de pesos. Lo que sí hay que reconocerle a González Videla es que fue el primer presidente chileno que trató de enfrentarse a la inflación cara a cara. Su ministro de Hacienda (1947-1950), Jorge Alessandri, concibió un plan para reducir los gastos mientras aumentaba los impuestos. Su política produjo los primeros excedentes sucesivos en el presupuesto desde mediados de la década de 1930 y redujo la inflación casi a la mitad. La subsiguiente congelación de los salarios y los precios determinado por Alessandri, sin embargo, produjo una airada reacción pública y su propia renuncia.

El sucesor de Alessandri, Carlos Vial, recurrió a muchas de las mismas panaceas: las restricciones en el volumen de circulante y en los gastos del gobierno, junto con la congelación de precios y salarios. La fuerza laboral quería salarios más altos. Las empresas no querían impuestos más altos. Ambos tenían poderosos aliados políticos. El Congreso capituló cobardemente ante la presión pública y autorizó que los funcionarios públicos recibieran aumentos salariales muy por encima de la tasa de inflación. Esta medida, que aumentó los salarios entre un 20% y un 90%, absorbió el 25% del presupuesto nacional de 1952. Claramente cierta psicología inflacionaria estaba predominando: los chilenos habían comenzado a esperar *reajustes* más y más elevados a intervalos regulares. Y el gobierno de González Videla no tuvo problemas, por cierto, para imprimir papel moneda. Debido a esta generosidad, La Moneda registró en 1950 y 1951 uno de los déficit más altos de su historia. Para ese entonces, ya muchos tenían claro que los partidos políticos no contaban con la capacidad ni con la voluntad de detener la inflación. Esta sensación fue un factor que contribuyó en la elección de Ibáñez en 1952; la idea de que sólo un «hombre fuerte» podría restablecer el orden económico se había extendido por toda la sociedad.

LA ECONOMÍA BAJO EL GOBIERNO DE IBÁÑEZ

El general de la esperanza corrió peor suerte que sus predecesores. Para ser justos, hay que reconocer que las circunstancias difícilmente lo favorecieron. El fin de la guerra de Corea en 1953 trajo consigo una abrupta caída en los precios del cobre. La producción agrícola *per cápita* continuó disminuyendo (a un promedio anual del 0,5% entre 1945 y 1954). Además, las industrias del país no lograron satisfacer la demanda de bienes de consumo: en 1957 (exceptuando el tabaco, los textiles, los minerales no metálicos y los productos papeleros) se importaron más artículos fabricados en el extranjero que en el período 1945 y 1946. Entre 1953 y 1956, el crecimiento industrial anual disminuyó en un 60% si se lo compara con el período de tres años previo y, si bien aumentó nuevamente después de 1960, siguió por debajo del nivel de 1953.

Dado que la industria manufacturera se había estancado, la fuerza laboral industrial se redujo en alrededor de un 5%. Si tomamos la década de 1950 en su totalidad, incluso la agricultura absorbió una proporción más alta de nueva mano de obra que la industria. Los trabajadores de las fábricas recién despedidos a veces podían encontrar empleo en tiendas más pequeñas (cuyo número había aumentado apreciablemente entre 1940 y 1960) o emplearse en la construcción, cuya fuerza laboral creció cerca de un 30% en esos años. Durante la presidencia de Ibáñez, se produjo un discreto auge de la construcción, aunque sus efectos económicos no fueron nada en comparación con los que marcó el auge anterior en la década de 1930.

Aunque los ingresos disminuyeron, el gobierno se negó a reducir los gastos, estableciendo un esquema depresivamente repetitivo que puede resumirse como sigue: (1) el déficit resultante de lo anterior llevó a la devaluación del peso; (2) esto, a su vez, hizo subir el precio de las importaciones y el coste de la vida; (3) rápidamente, comenzaron las peticiones de aumentos salariales; (4) la consiguiente crisis económica obligó al gobierno a destinar más fondos para sacar de apuros a las industrias más afectadas por los aumentos salariales y la devaluación del peso; (5) estos gastos devaluaron aún más el peso. Y así la «cuenca inflacionaria» siguió y siguió.

Obviamente este tiovivo económico tenía que ser detenido. Los partidarios de Ibáñez en el Congreso eran incoherentes y su arsenal fiscal desesperanzadoramente inadecuado. El sistema tributario seguía dependiendo fundamentalmente de dos impuestos: uno sobre las importaciones y el otro sobre el cobre exportado (que generaba aproximadamente un 40% de las divisas del país). En un comienzo, Ibáñez utilizó las leyes existentes para aumentar los ingresos, imponiendo un recargo sobre el Impuesto a la renta y reformando la tasa cambiaria de la Gran Minería. Ante la desesperada necesidad de fondos, estableció también nuevos impuestos a las ventas, aunque gran parte del dinero así obtenido fue tragado por la inflación.

El cobre siguió siendo el recurso fiscal más promisorio para Ibáñez. No obstante, los gravámenes existentes (junto con el impuesto oculto implícito en las tasas cambiarias diferenciales) se estaban volviendo prohibitivos para las propias compañías. En 1954, por ejemplo, la Compañía de los Andes (Anaconda) tuvo que pagar un 92,2% de sus ganancias al gobierno, mientras que la Kennecott traspasó el 79,7%. Vagamente consciente de que corría el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro, el gobierno trató de establecer un equilibrio entre las necesidades nacionales y las ganancias de las compañías. En 1955, instauró un Nuevo Trato que simplificaba en gran medida la estructura tributaria. En adelante, las compañías tendrían que traspasar al Estado el 50% de sus ganancias, sujetas a un 25% más en el caso de que la producción cayera por debajo de los volúmenes de 1949-1955. El Estado también se reservó el derecho de colocar directamente el cobre en el mercado. Teniendo que elegir el mal menor, las compañías invirtieron un promedio de

entre 22 y 40 millones de dólares al año en sus empresas chilenas. La producción aumentó en cerca de un 30% entre 1953 y 1958.

Los ingresos del cobre por sí solos nunca fueron suficientes; por ende, Ibáñez consideró la posibilidad de una reforma tributaria nacional. El segundo de sus ocho ministros de Hacienda, Felipe Herrera, tuvo la osadía de sugerir que «los poderosos» pagaran su cuota de contribuciones y fue retirado de su cargo. Su sucesor, Guillermo del Pedregal, autorizó un enorme aumento salarial creyendo que con ello traería la tranquilidad social y, por lo mismo, aumentaría la producción. Esta solución tuvo corta vida. Cuando la inflación alcanzó el 70% y estallaron las huelgas, Ibáñez se dirigió al líder de la Falange, Eduardo Frei, cuya fórmula (escaso dinero, fin de los reajustes automáticos de los pagos y reforma fiscal y agraria) impidió que llegara siquiera a asumir la cartera. El ministro siguiente, Jorge Prat, propuso un programa de austeridad (que incluía mayores impuestos y también la suspensión del derecho a huelga) lo que despertó una inmediata animosidad en el Congreso.

A mediados de la década de 1950, Chile parecía haber vuelto a los peores días de la República parlamentaria: el país estaba hundido en la crisis, los políticos contemporaban. En 1953, el coste de la vida aumentó en un 50%; al año siguiente, en un 58%; y en 1955, en un 88%. La situación se volvía cada vez más desesperada: el desempleo casi se duplicó; la utilización de las plantas cayó a los niveles más bajos desde mediados de la década de 1930; el PNB se precipitó en un 8%; se produjo una ola de huelgas, con las cuales los trabajadores trataban de protegerse; aumentó la especulación; el peso perdió el 60% de su valor en menos de un año.

Un Ibáñez desesperado pidió consejo a los extranjeros. A fines de 1955, la misión Klein-Saks llegó a Santiago para concebir un plan de estabilización económica. Klein-Saks era una firma consultora norteamericana, conocida por su tendencia al *laissez-faire* y con estrechos vínculos con Washington, lo cual hacía suponer que se conseguirían préstamos norteamericanos si se seguían los consejos de la misión. El Congreso, sin embargo, sólo llevó a cabo algunas de las proposiciones de Klein-Saks. Con un margen de un voto, el Senado limitó el reajuste de 1956 al 50% del alza en el coste de la vida, aunque, para amortiguar el golpe, se autorizaron otros beneficios (incluidas mayores asignaciones familiares) y se instituyó un salario mínimo⁹. El Congreso también restringió el crédito y abolió el bizantino sistema de control cambiario. El gobierno, no obstante, no redujo sustancialmente los gastos; tampoco logró que el Congreso aprobara la urgente reforma tributaria. La misma misión *si logró* una meta importante: al menos terminó con la fiebre inflacionaria

⁹ Una paga mínima para ciertas clases de empleados fue introducida en 1937. Tanto este «suelo vital» como el «salario mínimo» (para los obreros) se convirtieron luego en *unidades* para calcular los reajustes de los sueldos y salarios, más que en verdaderos sueldos y salarios mínimos.

de mediados de la década de 1950. Pero esto tenía un aspecto negativo: la industria de la construcción se desplomó con la contracción del mercado de bienes raíces, mientras que el fin de los controles cambiarios dejó a los fabricantes locales expuestos a los fuertes vientos de la competencia internacional. Nuevas restricciones crediticias redujeron el poder adquisitivo. Mientras que la inflación decaía (al 38% en 1956 y al 17% en 1957), el desempleo aumentaba.

Habiendo soportado estos dolorosos síntomas de repliegue económico, el gobierno retiró prematuramente el programa de austeridad. Puede que haya tenido pocas opciones: una repentina caída en el valor del cobre produjo dos déficit más elevados. Una sequía en el Valle Central elevó el coste de los alimentos. La construcción cayó a su nivel más bajo desde la década de 1930. Enfrentado a este colapso económico y al alto desempleo, el gobierno autorizó un «reajuste» del 20%. Lo anterior, sumado a mayores facilidades para el otorgamiento de un crédito bancario, hicieron que se redujera la inflación (33% en 1958). No todos consideraron que ésta fuera una pérdida. El ibañista Rafael Tarud denunció los reajustes por debajo de lo adecuado como inhumanos. La solución, sugirió, era reducir los privilegios de «los sectores minoristas, que han quedado históricamente retrasados en sus comprensiones de la dinámica social».¹⁰

El segundo gobierno de Ibáñez demostró cuán difícil era poner en práctica una reforma económica seria. Los controles de precios y salarios, por ejemplo, podrían haber desacelerado la espiral inflacionaria. Sin embargo, habían provocado la hostilidad tanto de los empresarios como de los empleados asalariados y los trabajadores. Los dirigentes políticos del país, incapaces de estabilizar la economía sin ofender a los empresarios, a los agricultores o a la fuerza de trabajo urbana, resolvieron el problema haciendo poco y nada. El resultado se acercaba peligrosamente al caos.

LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE JORGE ALESSANDRI

Jorge Alessandri representaba la última oportunidad que el sistema político tradicional tenía para remediar o, al menos, aliviar los males económicos de Chile. Quizá las iniquidades estaban demasiado arraigadas; quizá los partidos políticos carecían del valor, la imaginación o la sabiduría para resolver las cuestiones más dolorosas. Sean cuales fueran las razones, la situación económica no cambió fundamentalmente durante los seis años que duró su presidencia: los problemas que durante tanto tiempo habían obstruido el desarrollo nacional de Chile (el sistema de tenencia de la tierra poco equitativo, la dependencia respecto de los ingresos provenientes de la minería, el sistema impositivo regresivo en

términos generales, la inflación crónica), todo se mantuvo obcecadamente en su lugar. A pesar de eso, el segundo Alessandri fue un buen administrador y lo hizo lo mejor que pudo.

La cuestión agraria

La presión por la reforma agraria aumentó en la década de 1950. En 1962, la Iglesia católica creó su Instituto de Promoción Agraria, que distribuyó unas cuantas propiedades de la Iglesia entre campesinos sin tierras. El gobierno de Kennedy en los Estados Unidos defendió la reforma agraria como un elemento básico en lo que Arthur Schlesinger Jr. llamó más tarde el «gran proyecto para la modernización democrática de América Latina»¹¹ propuesto por la Alianza. Los conservadores y los liberales habían frustrado durante mucho tiempo todos los intentos por disminuir su dominio en el campo, no tenían ningún interés en ser modernizados democráticamente. Sin embargo, el Partido Radical, desesperado por volver a la presidencia, comenzó a considerar la adhesión a la reforma agraria como un medio para conseguir el voto rural. Dado que la derecha dependía de la ayuda radical para derrotar a la izquierda y a la Democracia Cristiana, llegó a aceptar las premisas de la reforma de la tierra.

Los conservadores, los liberales y los radicales discutieron mucho el tema de la compensación. La Constitución de 1925 facultaba al Estado para expropiar, pero a cambio debía realizar pagos en efectivo. Los radicales propusieron que se pagara con una combinación de dinero en efectivo y bonos a largo plazo, y la derecha se tragó a regañadientes este concepto de «compensación postergada». En agosto de 1962, el Congreso aprobó como era debido la Ley de la reforma agraria (Ley 15.020), autorizando al Estado a comprar tierras con un pago en efectivo del 20% y bonos que devengaban intereses pagaderos a diez años. Nadie (excepto los más antediluvianos) consideró que la medida de 1962 fuera revolucionaria o punitiva. Con pocas excepciones, el Estado fue habilitado para redistribuir solamente los terrenos abandonados o cultivados de manera ineficiente, o la tierra en barbecho de propiedad corporativa, que era relativamente escasa.

Además de autorizar la reforma de la tierra, la nueva Ley significaba un serio esfuerzo por mejorar las condiciones de vida rurales. A partir de ese momento los terratenientes estarían obligados a mejorar las viviendas de los arrendatarios; los salarios agrarios reflejarían la inflación; los trabajadores tendrían contratos a largo plazo si así lo deseaban y recibirían la totalidad de su salario en efectivo. A la larga, lo más significativo (como veremos) fue la creación de nuevos organismos fiscales: la Corporación de Reforma Agraria (CORA), para supervisar el proceso de expropiación; el Consejo Superior de Fomento Agropecuario

¹¹ Arthur Schlesinger Jr., *A Thousand Days*, Boston, 1965, pág. 186.

¹⁰ Rafael Tarud, *Contra el despojo de los reajustes*, s.f., págs. 6 y 26.

(CONESA), para garantizar el aprovechamiento eficaz de las tierras expropiadas; y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), para proporcionar asistencia y crédito a los campesinos.

A pesar de sus deficiencias, la legislación de 1962 *realmente* estableció el *principio* de la reforma de una vez y para siempre, e impulsó algunas responsabilidades mínimas a los terratenientes. En la práctica, sin embargo, apenas tocó el campo: sólo 60.000 hectáreas (más del 60% de las cuales ya pertenecían al Estado) fueron distribuidas entre alrededor de 1.000 campesinos. Tal como señaló cínicamente un observador de la época, los principales beneficiarios no fueron los sin tierra sino los burócratas contratados para administrar la nueva ley¹².

El cobre

Entre 1958 y 1964, en parte debido a que la Anaconda puso en marcha su nueva mina en línea en El Salvador (para reemplazar la entonces agotada Potrerillos), el valor de las exportaciones de cobre chilenas subió de 232 millones de dólares a 363 millones de dólares. Los ingresos por concepto de impuestos casi se duplicaron. Las mismas compañías lanzaron un programa «Compre chileno», que aumentó en gran medida las compras de productos fabricados a nivel nacional. La participación de Chile en el mercado mundial del cobre, sin embargo, se mantuvo entre el 14% y el 15%, más o menos la misma cifra que cuando se estableció el Nuevo Trato de 1955. La imposibilidad de aumentar su porcentaje en el mercado fue atribuida por muchos al hecho de que las compañías no estaban realizando las inversiones adecuadas en la Gran Minería. Aunque la Anaconda y la Kennecott invirtieron 203 millones de dólares en las minas durante la presidencia de Alessandri, esto fue considerado como totalmente insuficiente por sus críticos, cada vez más ácidos, quienes comenzaron a cuestionar la utilidad del acuerdo del Nuevo Trato.

Las compañías tenían sus razones para desconfiar del Nuevo Trato. Después del terremoto de mayo de 1960, el gobierno impulsó nuevos impuestos especiales en el cobre (violando el acuerdo) con el fin de financiar la reconstrucción. Dos años después, el Congreso aumentó los impuestos una vez más, lo que elevó la tasa tributaria de El Teniente y Chuquibambilla a más del doble de lo que pagaban las compañías cupríferas que operaban en Zambia. Dada la inactiva política dirigida contra ellos y la presión que sus accionistas ejercían para que diversificaran la producción globalmente, las compañías mostraron reacias a realizar más inversiones en Chile si no contaban con una garantía firmada por el gobierno. Expresaron su voluntad de invertir sumas adicionales (quizá hasta

¹² *Hispanic American Report*, 16, 2, 1963, pág. 164.

unos 500 millones de dólares) y de construir una refinería para producir cobre electrolítico pero, *quid pro quo*, pedían al gobierno que congelara los impuestos durante veinte años y que se cifrara a las especificaciones del Nuevo Trato. Tal esquema parecía demasiado rígido para muchos chilenos (especialmente para la izquierda), que lo vio como una forma de privar al Estado de la flexibilidad necesaria para llevar adelante futuros programas económicos. Algunos espíritus más críticos consideraron que los esfuerzos de las compañías por realizar un trueque inversiones/concesiones tributarias era una forma de extorsión y defendieron el monopolio estatal del mercado.

A la larga, toda la cuestión de la propiedad extranjera se resumió en una fusión de elementos políticos dispares que constituyeron una falange antinorteamericana. El conserador Francisco Bulnes («el Marqués») y el socialista Salvador Allende, por lo general, tenían pocos puntos en común, pero estaban de acuerdo en que había llegado la hora de considerar una nacionalización total. Por ende, este tema, al igual que la reforma agraria, quedó incluido por derecho propio en la agenda de la política de la década de 1960.

La inflación y la política fiscal

Alessandri creía que el gobierno debía intervenir en la economía lo menos posible. Mientras seguía activamente con sus políticas estabilizadoras, también ponía sus esperanzas en el fomento de la producción agrícola e industrial, considerando que, a fin de cuentas, la inflación podía ser controlada mejor si se satisfacían las demandas de los consumidores. Al parecer, en un comienzo, la inversión pública podía ser necesaria para reactivar la economía; el sector privado encabezaría así los esfuerzos por crear nuevas riquezas y dar empleo, estimulado por las adecuadas medidas liberalizadoras.

Como parte de sus medidas de estímulo económico para el sector privado, Alessandri incentivó la creación de Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Estas nuevas instituciones daban tasas de interés acordes a la inflación y también aceptaban cuentas en moneda extranjera —un incentivo para repatriar el capital que se mantenía en el extranjero—. Los bancos consiguieron así muchos fondos que, en teoría, podían ser canalizados hacia las empresas chilenas. En parte para que estos negocios fueran más competitivos, Alessandri redujo también muchas de las restricciones a las importaciones y simplificó los procedimientos. En 1959-1960, el comercio de ultramar chileno se vio menos limitado por el control burocrático que nunca antes desde el comienzo de la Depresión.

Mientras tanto, una ley excepcional (la DFL-2), puesta en vigencia en julio de 1959, brindó un fuerte estímulo a la construcción de viviendas pequeñas. Las «casas DFL-2» (como fueron conocidas) quedaron exentas de los impuestos a la propiedad y sus constructores recibían una rebaja tributaria. Al mismo tiempo, Alessandri lanzó un programa

de obras públicas (que incluía la construcción de una enorme cantidad de kilómetros de carreteras). La Ley DFL-2 tuvo resultados particularmente impresionantes: la empresa inmobiliaria se cuadruplicó: en 1959 era mayor que en los cuatro años previos juntos. Aunque el ritmo de la construcción disminuyó después, se mantuvo muy por encima de las cifras de 1958.

En sus esfuerzos por estabilizar la economía del país, Alessandri ofreció lo que esperaba sería un estímulo psicológico decisivo, estableciendo una sola tasa cambiaria y una nueva unidad monetaria, el escudo (1.000 pesos), que él deseaba mantener a la par con el dólar estadounidense: en enero de 1969, de hecho, el peso quedó fijo en 1,05 dólares¹³. Para fortalecer la confianza en la nueva moneda, se retiraron todos los controles cambiarios y se permitió la apertura de cuentas en dólares en los bancos. Alessandri también dejó claro, al asumir la presidencia, que los sueldos y los salarios ya no serían «reajustados» según la inflación, sino que deberían provenir de las ganancias y de una mejor productividad. El legado de los años de Ibáñez hizo que la aplicación inmediata de este plan fuera imposible: en parte, con miras a reactivar la demanda, Alessandri autorizó un único reajuste inicial de entre el 60% y el 100%.

Durante los dos primeros años de la presidencia de Alessandri, las condiciones económicas mejoraron mucho. En 1959, el presupuesto estaba equilibrado. El país gozaba de una balanza comercial positiva; la producción industrial aumentó en un 10%; el desempleo cayó del 9% al 7%. La tasa de inflación disminuyó al 5% en 1960, aumentando nuevamente al 10% en 1961. Todos estos síntomas parecían indicar que se había dado vuelta a la página, que las expectativas inflacionarias se estaban moderando y que la economía estaba a punto de despegar una vez más.

Desgraciadamente, no fue así. La expectativas de Alessandri respecto del sector privado resultaron demasiado optimistas. No hubo ninguna ola de nuevas inversiones, ni tampoco inversiones extranjeras directas, a pesar de los nuevos incentivos. Las medidas liberalizadoras de 1959, por otra parte, produjeron una verdadera lluvia de importaciones, financiadas en gran medida por préstamos extranjeros, pero no trajeron un aumento correlativo en las exportaciones (cuyo monto, además, se vio socavado por la tasa cambiaria fija). En 1961, el déficit comercial aumentó a 153 millones de dólares. Al final de ese año, el pánico financiero llevó a suspender durante tres semanas las transacciones en moneda extranjera, a introducir (en enero de 1962) una tasa cambiaria doble (a una tasa menor para las transacciones en capital y el turismo) y a imponer nuevamente controles más estrictos para el comercio externo. Temiendo el efecto inevitable que esto tendría en

¹³ La nueva moneda (con el signo *₱*) comenzó a usarse públicamente en 1960, aunque, al igual que en Francia tras la introducción del *franc lourd* por el presidente De Gaulle, la gente siguió hablando en términos de la antigua moneda durante años.

la inflación, Alessandri se negó a devaluar el escudo hasta octubre de 1962, cuando fue devaluado en un 38%, tras lo cual se le permitió «flotar» —cuesta abajo—. La depreciación de la moneda produjo nuevos aumentos en los precios. La inflación alcanzó un 28% en 1962, un 45% en 1963 y un 40% en 1964.

La inflación incrementaba los problemas fiscales del gobierno. La necesidad de financiar su política de inversiones para estimular la economía junto con las demandas de reconstrucción del sur devastado por el terremoto, hicieron imposible controlar el déficit sin pedir préstamos a gran escala: esto aumentó enormemente el monto de la deuda externa. Aun cuando Alessandri hubiera estado dispuesto a aumentar los impuestos internos para financiar los gastos del gobierno (lo que no hizo), habría sido más fácil sacarle sangre a una piedra. El sistema tributario sumamente regresivo, que en 1962 aún obtenía el 64,6% de sus ganancias de los impuestos indirectos, pareció impermeable al cambio. Lo que el gobierno sí hizo fue tomar medidas para mejorar la recaudación de impuestos, una hazaña en un país donde un tercio de los contribuyentes lograban evadir impuestos. Los impuestos a las ventas habían aumentado para entonces en un 20% y, en febrero de 1964, tras largos retrasos en el Congreso, se introdujo además una importante simplificación en el Impuesto a la renta¹⁴. Estos cambios no tuvieron un efecto real en el déficit, que bajó un poco en 1963-1964, más bien porque, para entonces, la inversión pública se había congelado.

A fines del gobierno de Alessandri, el 75% de las reservas externas de Chile se usaban para pagar sus deudas y más de la mitad del 25% restante se gastaba en alimentos importados. Quedaba poco para financiar las operaciones ordinarias del gobierno, y para qué hablar de modernizar la economía. El gran Ingeniero, al igual que el general de la esperanza, había fracasado. Había que buscar una nueva fórmula. Pero ¿sería posible encontrarla?

LA SOCIEDAD DE MEDIADOS DE SIGLO, 1930-1964

La estructura social, el nuevo papel de la mujer

Si el periodo parlamentario había sido la *Belle Époque* de la clase alta, los años posteriores a la década de 1930 vieron el florecimiento de la clase media. La industrialización, la ampliación de la educación y el desarrollo de la administración pública le abrieron nuevas oportunidades. No es que la elite terrateniente hubiera quedado al margen; en reali-

¹⁴ Los impuestos a la renta incluían lo que en otras partes se llamaban impuestos corporativos. La reforma de 1964 redujo las seis categorías previas de impuestos a dos: impuestos corporativos e impuestos personales a la renta.

dad, el crecimiento de la industria manufacturera permitió que la clase alta también ampliara sus intereses en forma muy notable. Durante mucho tiempo había habido importantes grupos financieros en Chile y su papel no se vio más que fortalecido por el auge industrial. En un estudio muy conocido de 1961, el joven y brillante economista Ricardo Lagos identificó once conglomerados líder, a menudo interrelacionados, que controlaban 290 de las compañías comanditarias del país, de un total aproximado de 1.300¹⁵.

En la política y los negocios, sin embargo, la clase alta se vio obligada desde entonces a coexistir (y colaborar cada vez más) con una floreciente clase media, todos los sectores de la cual parecían haber mejorado su posición económica. Después de 1938, por ejemplo, la mayoría de los oficinistas fueron protegidos por las diversas leyes de seguridad social. Todos los chilenos pueden haber sido iguales, pero definitivamente había algunos más iguales que otros: los empleados de las oficinas generalmente recibían beneficios familiares y por desempleo más altos que los de los obreros. No obstante, la clase trabajadora, aunque pequeña para los estándares de Europa y Norteamérica, obtuvo evidentes logros después de la década de 1930, tanto gracias al acceso a la seguridad social como a la sindicalización, aunque menos por las alzas salariales. Entre 1932 y 1964, la cantidad de sindicatos aumentó en más del 400%, al igual que sus miembros (a 270.000 en 1964).

La sociedad chilena de mediados del siglo xx era más diversa, por tanto, que nunca. Uno de sus rasgos más distintivos era la presencia predominante de las mujeres en las profesiones, las artes e incluso en la vida pública, algo que los visitantes extranjeros solían notar. Éste es un punto que merece un breve análisis.

Había algo levemente paradójico respecto de este progreso. Salvo algunas modificaciones al Código Civil, fuertemente orientado en favor del marido (en las décadas de 1930 y 1940), la ley limitaba el papel de las mujeres casadas en diversas materias (especialmente las relacionadas con la propiedad); aunque a finales de la década de 1950, una mujer soltera de más de 21 años era «ante el derecho civil plenamente capaz»¹⁶. Sin embargo, las mujeres chilenas de las clases alta y media habían comenzado a aprovechar las oportunidades creadas por el decreto de febrero de 1877 que les abría las puertas a la educación profesional. De los más de 8.000 grados obtenidos por mujeres en la Universidad de Chile entre 1920 y 1960 (la Universidad Católica admitió a las mujeres sólo en 1932), 464 fueron en medicina; 357, en leyes; 931, en odontología; 471, en farmacia; y 67, en arquitectura. En el mismo periodo, 3.200 mujeres eran maestras de escuela. En las décadas de 1930 y 1940, la presencia femenina se había vuelto mucho más notoria tanto en las diversas profesiones como en la salud pública, la educación, las artes, el periodismo y la radio.

¹⁵ Ricardo Lagos E., *La concentración del poder económico*, 1961.

¹⁶ Felicitas Klimpel, *La mujer chilena*, 1962, pág. 51.

Era natural que, llegado el momento, las chilenas instruidas desearan invadir el terreno predominantemente masculino de la política. En una Ley de 1884 habían quedado específicamente excluidas de votar. Su participación en los partidos políticos tradicionales había sido menor, aunque los radicales ya habían aceptado en 1888 a las mujeres como miembros. Había habido un Partido Cívico Femenino de corta duración en la década de 1920 y el Partido Femenino de Chile, más serio, se formó en 1946, comprometiéndose a realizar una campaña para obtener el sufragio femenino en las elecciones nacionales; objetivo que se logró con la Ley de febrero de 1949. La presidencia de González Videla fue bastante notable desde este punto de vista específico: vio el primer nombramiento de una mujer para formar parte de un gabinete de ministros (Adriana Olgún en Justicia), las primeras embajadoras mujeres (en los Países Bajos y los Estados Unidos) y la creación de la Oficina de la Mujer, un organismo nacional para los asuntos de la mujer.

La obtención del voto podría haber producido una lluvia de aspirantes femeninas al Congreso. En realidad, no lo hizo: la primera mujer que entró en la Cámara de Diputados fue Inés Enríquez Frödden, una radical, en una elección complementaria de 1951. Sólo tres más la siguieron durante la década de 1950. Ya en la década de 1960, aumentó esta cifra de manera importante. Quizá de un modo algo tranquilizador, el Partido Femenino (que se disolvió en 1953) resultó tan dado al fraccionamiento como sus colegas dominados por los hombres. Las clásicas defecciones no tardaron y se formó el Partido «Femenino Progresivo» llegada la elección presidencial de 1952, cuando la mayoría del Partido apoyaba al general Ibáñez. La mujer política más destacada del momento fue la presidenta del Partido, la insipida María de la Cruz (ella acuñó la frase «general de la esperanza» para Ibáñez). Elegida para ocupar el puesto que Ibáñez había dejado vacante en 1953, cayó en desgracia (y en la oscuridad) muy pronto. Esto se debió, por una parte, al ferviente entusiasmo que manifestó por el general Perón y sus ideas, y, por otra, a una acusación de estar implicada en prácticas corruptas¹⁷, pero, especialmente, sin duda, al tradicional prejuicio masculino.

¿Por qué las mujeres chilenas (de las clases alta y media, en todo caso) asumieron tan rápidamente un papel profesional, médico y educativo? Las feministas de habla inglesa pueden encontrar ociosa esta pregunta, pero no lo es dado el trasfondo histórico y la matriz hispánica de Chile. Queremos señalar a continuación algunas sugerencias más que respuestas, ya que este tema requiere una investigación más completa. Podemos indicar el hecho de que, en países con fuertes elites terratenientes, las mujeres propietarias (aunque generalmente fueran viudas o hijas) suelen ocupar un lugar bastante notorio, y son aceptadas por sus colegas masculinos. Las imágenes de fuertes caracteres femeninos en

¹⁷ Uno de sus «pecadillos» fue darle a un vendedor de relojes acceso privilegiado a los empleados del sistema ferroviario estatal a cambio de una donación de 150.000 pesos para el Partido feminista. El «asunto de los relojes» dio origen a muchas bromas en los años siguientes.

la historia (y en el folclore) también pueden predisponer a algunas culturas a ver el ideal femenino como algo natural, al menos en ciertas épocas. El propio pasado de Chile incluye algunos de estos casos: en la época colonial, Inés de Suárez (la voluntariosa amante de Pedro de Valdivia) y la sádica La Quintrala; y, en el siglo XIX, Javiera Carrera (destacada defensora de sus tres hermanos durante la Independencia) y Candelaria Goyenechea, madre de Pedro León Gallo y generosa contribuyente a su rebelión de 1859 (a pura fuerza de carácter, impidió que los soldados del presidente Montt registraran su casa en Copiapó). Todas estas mujeres tienen (o, en todo caso, solían tener) un lugar propio en la memoria colectiva de Chile. Por último, podemos señalar que la educación separada por sexos, regla general en Chile durante la mayor parte de su historia, parece haber incentivado los logros académicos o deportivos en las muchachas más que la coeducación, que posiblemente refuerza los estereotipos. Probablemente no sea accidental que Gran Bretaña (con su tradición aristocrática, sus imágenes históricas de reinas fuertes, como Boadicea, Isabel I y Victoria, y la difundida educación separada por sexos que tuvo antes) haya llegado a elegir a una mujer como primera ministra, mientras que Estados Unidos (sin una elite tradicional de la tierra salvo en el viejo sur, ya desaparecida hace tiempo, y con una extendida coeducación) aún no muestra signos de colocar a una mujer en la Casa Blanca.

Población, salud y educación

La población de Chile aumentó de alrededor de 4,5 millones en 1930 a, aproximadamente, 8 millones en 1964. Las ciudades de mayor tamaño, Santiago, Valparaíso (con la ciudad vecina Viña del Mar) y Concepción (con la ciudad vecina Talcahuano) conservaron y aumentaron su tradicional supremacía demográfica. Por otra parte, el colapso de la industria del salitre significó el despoblamiento relativo del Norte Grande. En 1930, los habitantes de Iquique sumaban sólo poco más que en 1907. Las ciudades del norte tendieron a marchitarse. Como rezaba una pegajosa canción popular de comienzos de la década de 1960 con ritmo de *foxtrot*:

Antofagasta dormida,
tus calles están desiertas.
¿Cómo pudiera yo darte
dinamismo siglo veinte?
¡Despierta de tu letargo!

Gran parte del aumento en la población nacional provino de las mejoras en las condiciones sanitarias. La creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) en 1952 y la ampliación

de los beneficios del sistema de seguridad social contribuyeron a mejorar los niveles de salud, como también lo hicieron las organizaciones que se preocupaban del cuidado y la alimentación de los niños. Estos servicios, junto con un mejor cuidado prenatal, la introducción de los antibióticos y fuertes programas para eliminar la tuberculosis (la mayor causa aislada de muerte), redujeron sustancialmente la tasa de mortalidad. Entre 1930 y 1952, las expectativas de vida para las mujeres aumentaron de 37,7 a 53,8 años; y para los hombres, de 35,4 a 49,8. Sobrevivir el primer año de vida todavía era difícil: proporcionalmente morían más chilenos a esa edad que a otras.

Hasta 1925, la educación había absorbido casi todos los gastos «sociales» del gobierno. En 1955, la educación sólo recibía un 20,3% del gasto público social; la vivienda y las obras públicas, el 20,4%. El programa de seguridad social, que constituía el 41,4% y el 51,4% del gasto público social en 1955 y en 1961, respectivamente, se convirtió en el capítulo más caro del presupuesto.

Ahora los chilenos vivían más, pero no necesariamente mejor. Todavía en 1960, casi la mitad de las casas de campo no contaban con más de dos habitaciones; más del 50% de ellas no tenían acceso al agua potable. La desnutrición, de hecho, seguía siendo un problema. En la provincia de Santiago, la más rica del país, el 60% de la población sufría de desnutrición entre 1968 y 1969. En ese periodo, sólo la mitad de todas las familias de Chile consumían 1.600 calorías diarias, mientras que alrededor de un 25% tenían una ingesta diaria de 2.100 calorías¹⁸. Los observadores extranjeros, es preciso decirlo, todavía solían quedarse impresionados por la miseria de las clases más pobres tanto en la ciudad como en el campo. El escritor norteamericano Waldo Frank, que visitó Chile en 1942, escribió: «La pobreza es impresionante; en su oscura atemporalidad, es casi oriental»¹⁹. Tras llegar a Santiago a los dieciocho años más o menos, el Loco Pepe, un asaltante de bancos argentino que pronto se hizo famoso por sus ingeniosos intentos de escapar de la cárcel, tuvo una «penosa impresión» cuando vio que «en el centro de la ciudad mujeres andrajosas con sus pequeños pibes en los brazos pedían limosna»²⁰. Ciertamente, la Argentina de la cual había emigrado el Loco Pepe en la década de 1960 era un país mucho más próspero que Chile.

En muchas sociedades, un camino clásico para salir de la pobreza había sido siempre la educación. En Chile, los años de aporte gubernamental comenzaron a dar frutos después de 1950. El alfabetismo aumentó al 84,6% en 1960. En 1990 era de un 94%. Esta

¹⁸ Peter Hakim y Giorgio Solimano, *Development, Reform and Malnutrition in Chile*, Cambridge, 1978, pág. 8.

¹⁹ Waldo Frank, *South American Journey*, Londres, 1944, pág. 146.

²⁰ José Roberto Rubio (El Loco Pepe), *La vuelta al pago en 82 años. Las memorias del Loco Pepe*, 1967, pág. 116.

cifra esconde, sin embargo, una realidad algo irregular: la mayoría de los que entraban en el sistema educativo primario permanecían en él menos de cinco años. Aún a comienzos de la década de 1960, sólo tres de cada diez niños pasaban del sexto año de educación básica y solo uno de cada veintidós llegaba hasta el último año de educación secundaria.

En cierta manera, de hecho, se podría decir que el país desarrolló un sistema educativo paralelo. Las familias ricas (y muchas de la clase media alta) mandaban a sus hijos a colegios privados: en las décadas de 1940 y 1950, respectivamente, un 28% y un 35% de los niños en edad escolar iban a colegios de primaria y secundaria privados. A nivel secundario, los colegios privados eran más numerosos (122 en 1915, 453 en 1956) que los liceos estatales, aunque tenían menos alumnos. Los católicos a menudo elegían colegios religiosos para sus vástagos. Los de espíritu más secular, especialmente aquellos que querían que sus hijos aprendieran un idioma extranjero, podían inscribirlos en el Lycée Français, la Deutsche Schule, el Grange School o el Santiago College, este último de orientación norteamericana. Las ciudades de provincia, al igual que Santiago, a menudo contaban con estos mismos minúsculos enclaves de cultura extranjera.

La cantidad de estudiantes universitarios también aumentaba (7.800 en 1940, 19.000 en 1956), así como la cantidad de universidades en las cuales cursaban sus estudios. A pesar de ello, en la década de 1950, el 75% de todos los estudiantes asistían a la venerable Universidad de Chile, organización monstruosa que a esas alturas estaba comenzando a sufrir una «hipertrofia» académica. Además de las otras dos universidades privadas existentes (la Católica en Santiago y su *campus* de Concepción), en la década de 1920 se establecieron dos nuevas casas de estudios en Valparaíso (la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa María). En Santiago, González Videla creó en 1947 una nueva Universidad Técnica Estatal²¹, muchos de cuyos graduados encontrarían empleo en las nuevas empresas industriales auspiciadas por la CORFO. Esta Universidad pronto estableció útiles filiales provinciales: en 1954, Ibáñez aprobó la formación de un nuevo *campus* en Valdivia, la Universidad Austral.

La urbanización y la vida urbana

En algún momento a finales de la década de 1930, Chile cruzó la frontera de convertirse en una nación predominantemente urbana, con la mayor parte de su población radicada en ciudades de más de 20.000 habitantes. La población de Santiago aumentaba vertiginosamente: de aproximadamente medio millón en la década de 1920 a más de 2 millones a comienzos de la década de 1960. Esto trajo consigo grandes cambios que nunca antes se

habían registrado. Después de la década de 1920, en términos físicos, la capital se extendió mucho más allá de su núcleo histórico colonial y sus limitadas ampliaciones del siglo XIX, siguiendo en parte el Plan regulador diseñado por el urbanista austriaco Karl Brunner, contratado en 1928 para dar una asesoría sobre el desarrollo futuro de la ciudad. En ese momento, las clases alta y media habían comenzado a abandonar progresivamente sus residencias tradicionales en el centro y se estaban reubicando en los barrios cada vez más grandes de la zona oriente («el barrio alto»), que ahora avanzaba impunemente hacia la cordillera²², con nuevos asentamientos, como Las Condes, La Reina y Vitacura. Simultáneamente surgieron otros barrios más modestos al norte del río Mapocho, mientras que la parte sur de la metrópoli se convirtió predominantemente (aunque nunca de manera exclusiva) en un área de la clase trabajadora. Si antes la distribución de las clases sociales en la ciudad había sido bastante discreta, ahora habían comenzado a aislarse unas de otras en comunas separadas. Stephen Clissold describió el Santiago de la década de 1940 como «estética y arquitectónicamente indiferenciado»²³, y no tenemos razones para dudar de esa opinión: seguramente entonces, al igual que después, los encantos de la ciudad se encontraban en sus rincones más que en su centro no muy monumental. En la década de 1960, la tecnología «antisísmica» permitió que los santiaguinos construyeran por primera vez edificios en altura, dándole un toque distintivo a la hasta entonces baja línea del horizonte de la capital.

La explosión demográfica de Santiago se debió no sólo al aumento natural de la población, sino también a la migración del interior del país, ya que miles de chilenos dejaron las haciendas o minifundios buscando trabajo en la gran ciudad. La contracción de la fuerza laboral en la Gran Minería también se sumó a lo anterior: 54.000 norteos se unieron a la marea que llegó a la capital entre la década de 1930 y el año 1952. Si antes Santiago dominaba la vida de la nación, ahora lo hacía en forma más absoluta que nunca. En 1960, el 28% de la industria manufacturera y cerca de la mitad de la fuerza laboral industrial del país se ubicaban allí. Cuatro de cada diez chilenos profesionales, técnicos y ejecutivos vivían y trabajaban en la capital, al igual que más de la mitad de las secretarías y los empleados de la nación.

Había un aspecto importante en el cual la capital era simplemente incapaz de resistir la presión de una rápida expansión. Ni la vivienda ni el empleo podían mantener el ritmo de la inundación de inmigrantes provenientes del campo. El resultado, especialmente evidente en la década de 1950 y comienzos de la de 1960, fue la formación de barriadas de pobres dentro y alrededor de la ciudad: las «callampas», como fueron conocidas. Sin electricidad, agua potable ni dotación médica, estos campamentos miserables

²² En la década de 1990, había llegado más o menos a ese punto.

²³ *Chilean Scrapbook*, Londres, 1952, pág. 89.

²¹ Que pasó a llamarse Universidad de Santiago de Chile en la década de 1970.

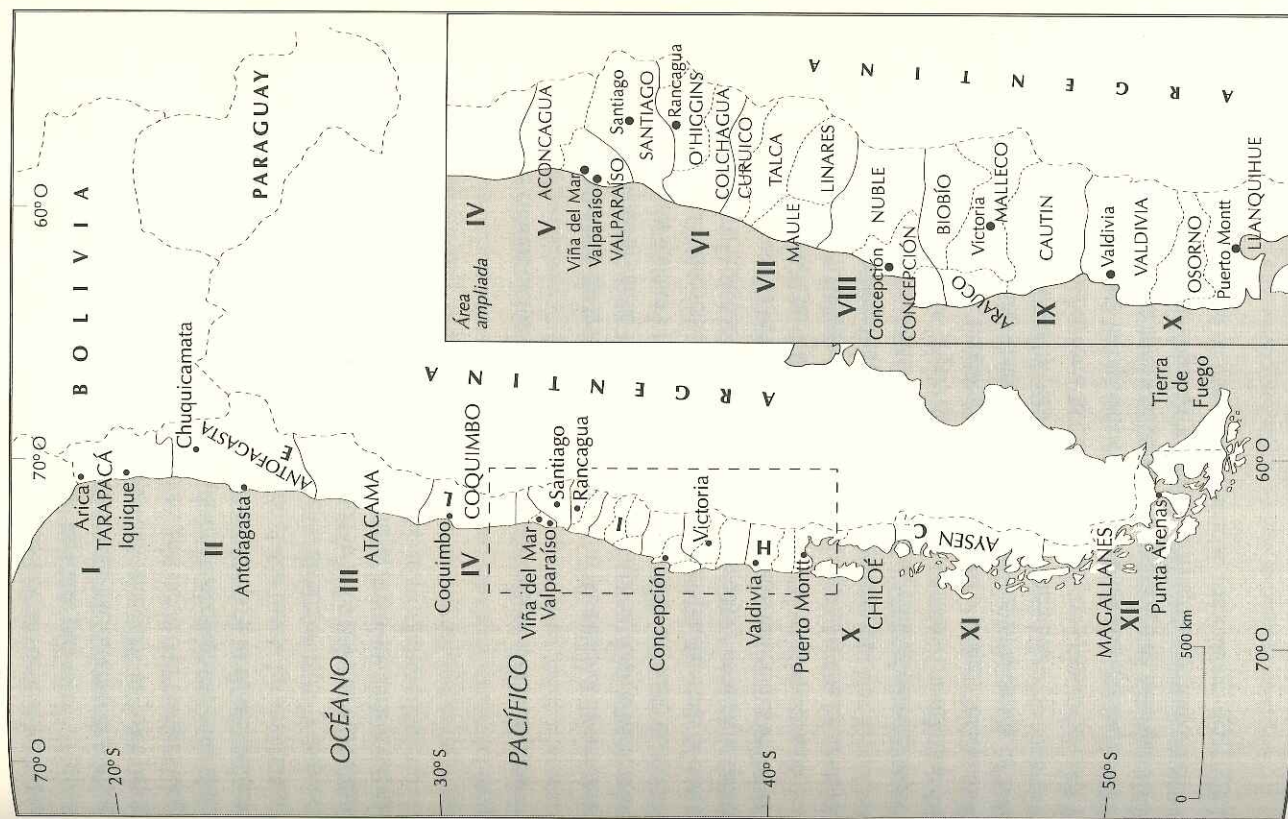
representaban la cara oculta más oscura de la vida chilena, un verdadero «cinturón de la miseria» que rodeaba y, en algunos casos, se infiltraba en la capital. Los habitantes de las campiñas, generalmente desempleados o subempleados, se defendían lo mejor que podían: en el comercio callejero, en el trabajo esporádico y en el servicio doméstico.

Santiago dejó atrás a todas las demás ciudades chilenas. Los conjuntos urbanos Valparaíso-Viña del Mar y Concepción-Talcahuano crecieron sostenidamente en las décadas de mediados de siglo (con poblaciones de 400.000 y 300.000 habitantes, respectivamente, a mediados de la década de 1960). Los tiempos de gloria de Valparaíso como puerto ya habían quedado muy atrás. El crecimiento de Viña del Mar disminuyó su atractivo como lugar de residencia para las clases alta y media, y entonces su atmósfera se fue haciendo cada vez más «popular» y ordinaria que la de la floreciente zona que la rodeaba. Otras ciudades siguieron siendo claramente menores y, en su mayor parte, más soperíferas.

Sólo es posible trazar aquí un boceto de la vida urbana en forma muy impresionista. Aunque la Iglesia y el Estado se habían separado en 1925, la nación siguió siendo más que nominalmente católica. Sin embargo, los chilenos ya no eran muy asiduos a asistir a la iglesia, si es que alguna vez lo habían sido. En este sentido también, como en la poesía, quizá sí eran los «ingleses de Suramérica» que ellos pretendían. El Estado secular aún celebraba las fiestas religiosas, aunque algunas de éstas fueron eliminadas en la década de 1960 (resulta irónico que esto haya ocurrido durante un gobierno democrata-cristiano). Quienes se casaban deprisa, a menudo lo lamentaban: aún no existía una ley de divorcio²⁴. Los más adinerados podían obtener la anulación; los pobres generalmente abandonaban a sus cónyuges. No era difícil acceder a los métodos de control de la natalidad, incluida la píldora cuando salió al mercado. Los abortos eran técnicamente ilegales; sin embargo, aún terminaban con casi el 25% de los embarazos. La prostitución abundaba, como siempre lo había hecho; no así las drogas.

Los sábados y los domingos, muchos de los ricos de la ciudad aún partían hacia sus fundos o chacras, o a la costa, también muy frecuentada en verano por la clase media. A los antiguos balnearios costeros, como Viña del Mar o (a una escala mucho menor) Constitución, se sumaban ahora una seguidilla de pequeños asentamientos a lo largo de la costa hacia el norte y el sur de Valparaíso. El turismo también se desarrolló a pequeña escala entre los maravillosos lagos y volcanes del sur. Durante la temporada invernal, las pistas de esquí de Farellones y Portillo atraían a un creciente número de jóvenes, para quienes, en Santiago, también había algunos clubes deportivos y estadios creados por las

²⁴ Mientras tanto, la pena capital (aún por un pelotón de fusilamiento) permaneció en los estatutos de la nación, aunque por suerte se aplicaba relativamente poco: entre 1890 y 1967, hubo 54 ejecuciones, un promedio de 0,7 al año.



Mapa 6: Chile, siglo xx, con las Nuevas Regiones (1974).

colonias extranjeras. Para las clases alta y media, el Chile de la década de 1950 y comienzos de la de 1960 era, en muchos sentidos, un país muy agradable para vivir.

La vida de la clase trabajadora urbana se encontraba mucho más circunscrita: partidos de fútbol²⁵ y empanadas los fines de semana o, para los más remilgados, un paseo por el Parque Cousiño o la Quinta Normal. Lamentablemente, gran número de hombres de la clase trabajadora todavía dedicaban su día-y-medio libre a emborracharse hasta la inconsciencia, y algunos sólo se recuperaban para volver a tiempo a su trabajo, generalmente miserable; otros se quedaban en casa celebrando el «San Lunes». Las «empleadas», aún universales en los hogares de clase alta y media en la década de 1960 (y después) solían disponer de los domingos por la tarde (a menudo su único descanso tras trabajar en las cocinas de sus empleadores) para ir a la peluquería, al cine o encontrarse con sus novios en unos pocos momentos furtivos.

Los medios de comunicación de masas, las comunicaciones, el transporte

Gradualmente, no obstante, los horizontes se ampliaban. Las posibilidades de entretenimiento popular cambiaron mucho en Chile a mediados del siglo xx, como lo hicieron en todas partes. La antigua «cultura impresa» debía enfrentarse ahora al desafío del avance de los medios de difusión electrónica, aunque todavía no la reemplazaban: más de cuatro millones de libros (1.400 títulos) se imprimieron en Chile en 1959 y un visitante habría encontrado ese año una amplia variedad de revistas y periódicos disponibles en los tradicionales quioscos de las veredas. A finales de la década de 1950, *El Mercurio* tenía una circulación diaria de unos 75.000 ejemplares, su hegemonía nacional se veía reforzada sin duda por su indispensable y completa sección de «avisos económicos».

Los más o menos trescientos cines del país, por su parte, exhibían películas importadas norteamericanas y europeas o, para quienes leían los subtítulos con dificultad, las producciones de las industrias cinematográficas de Argentina o México, florecientes a ratos. La industria cinematográfica chilena balbuceó brevemente en la década de 1940 (con el apoyo inevitable de la CORFO), pero su ímpetu no se mantuvo.

En 1960, los chilenos poseían cerca de un millón de equipos de radio. Las radios y transistores se extenderían como un reguero de pólvora en la década siguiente, tanto en la ciudad como en el campo. Las aproximadamente cien estaciones de radio que transmitían ese año lanzaban al aire un inagotable flujo de música popular (correspondiente a más de la mitad del tiempo total de transmisión), noticias, transmisiones deportivas y

²⁵ En esa época, el fútbol era profesional y estaba muy organizado, con divisiones al estilo británico —un equipo (en Viña del Mar) llevaba un nombre correspondiente a la quintaesencia del fútbol inglés: Everton—.

radionovelas. La televisión hizo su entrada con mayor lentitud en la República: en 1964 había tan sólo 31.000 equipos de televisión; en 1970, 374.000. La programación, tal como se había desarrollado para finales de la década de 1960, era una combinación ecléctica: programas importados norteamericanos o europeos, y telenovelas argentinas y mexicanas. Los programas producidos localmente, muchos dirigidos desde la Universidad de Chile o la Universidad Católica²⁶, iban desde los programas de conversación política en vivo hasta los *shows* de variedades muy elaborados y muy poco exigentes, como *Sábados Gigantes*.

Los chilenos de mediados del siglo xx se estaban volviendo cada vez más inquietos. Progresivamente desde 1920, los autobuses comenzaron a unir las principales ciudades del país y revolucionaron el transporte urbano, desplazando a la larga a los tranvías eléctricos que habían corrido por las calles de Santiago desde 1900. A las «góndolas» (término que hoy ya no se usa), llamadas así en forma algo inapropiada, y las «micros», se sumaron más tarde los rápidos minibuses conocidos de inmediato con mucha más propiedad como «lebres». A medida que eran más requeridos, el tráfico de pasajeros de los ferrocarriles comenzó a decaer, tendencia que se vio reforzada por el desarrollo de los servicios aéreos internos. Entre 1930 y 1960, se abrieron unos veinte aeródromos o aeropuertos regionales. Aunque los ferrocarriles seguían siendo importantes para el transporte de carga, también tuvieron que enfrentarse a la competencia de las empresas de camiones, de uno o dos hombres, que proliferaron desde la década de 1930 y cuyo papel en 1972 y 1973 sería muy decisivo. A mediados de la década de 1960, había en Chile unos 80.000 camiones (y alrededor de 60.000 vehículos comerciales más pequeños).

En parte debido a la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de automóviles privados aumentó lentamente desde 1940. No obstante, a mediados de la década de 1960, la cantidad de vehículos que circulaban por las carreteras prácticamente se había triplicado (llegando a más de 300.000). La mitad de ellos eran autos y no, como en el pasado, camiones o autobuses; aunque en 1960 más de la mitad de los coches tenían diez años. En Argentina se establecieron una serie de plantas de montaje de autos a comienzos de la década de 1960. Durante la década, era común ver en las calles Austin Minis y Citroenets (una adaptación del clásico *Dos Caballos* tan famoso en Francia un poco antes) montados en el país; ambos solían ser, de hecho, los primeros autos de los jóvenes chilenos de clase media. El aumento de la riqueza permitió que los más pudientes abandonaran el transporte público y fueran conduciendo al trabajo. De más está decir que así comenzó a empeorar el creciente problema de la congestión del tráfico en Santiago.

²⁶ Las primeras estaciones de televisión en Chile fueron administradas por estas dos universidades, que también administraban, como siguen haciéndolo, equipos *profesionales* de fútbol, práctica denunciada en una revista universitaria de 1962 por el historiador Claudio Véliz: sus severas críticas no surtieron efecto alguno.

Más autos significaban más carreteras, aunque la mayoría de éstas, incluso tras la finalización de la Carretera Panamericana norte-sur en 1970, siguieron sin pavimentar. La conducción no estaba libre de peligros. El sistema de semáforos de Santiago se instaló justo antes de la Segunda Guerra Mundial²⁷. Y estos semáforos tampoco lograron controlar el ímpetu con que los conductores solían conducir. Los peatones cruzaban las calles por su cuenta y riesgo. A comienzos de la década de 1960, la tasa de accidentes de tráfico en Chile era una de las más altas del mundo. Por su parte, los chilenos desarrollaron su propio folclore automotriz. La culpa de las congestiones de tráfico, por ejemplo, recaía a menudo (de manera muy injusta) en los carabineros: *donde hay paco hay taco* era un dicho popular entre los conductores.

Las comunicaciones en general se hicieron más fáciles en todas las latitudes a finales de la década de 1950. El servicio postal funcionaba entonces de manera adecuada, aunque la recogida de los paquetes del extranjero seguía siendo un procedimiento enojosamente lento. El sistema de telefonía nacional se fue modernizando lentamente. A comienzos de la década de 1930, unos 37.000 teléfonos estaban en funcionamiento, aunque la mayoría de las llamadas requerían la asistencia de una operadora. La demanda inevitablemente superaba la oferta. En 1952, había un teléfono por cada sesenta ciudadanos y los aparatos siguieron siendo difíciles de conseguir durante las dos décadas siguientes. Las llamadas internacionales podrían haber conectado Santiago con Buenos Aires ya en 1928, pero aún en la década de 1950, a veces, había que esperar cuarenta minutos la conexión entre Santiago y Valparaíso, cuando el viaje por carretera duraba dos horas y media. En la década de 1960, sin embargo, muchas de estas peculiaridades del sistema eran cosa del pasado.

Y para bien o para mal, Chile finalmente se hizo accesible para el resto del mundo: los aviones mitigaron su prolongado aislamiento. PANAGRA y Air France comenzaron a volar hasta Santiago en 1929. Ya en 1935, la línea aérea alemana Cónдор conectó Chile con Alemania, con paradas en Natal, Río de Janeiro y Buenos Aires. Unos cuantos chilenos, entre ellos el destacado periodista Abel Valdés Vicuña, cruzaron el Atlántico en el *Graf Zeppelin* durante los años en que éste voló desde y hacia Brasil. Mientras la Segunda Guerra Mundial detenía temporalmente los vuelos provenientes de Europa, los viajes desde y hacia Estados Unidos siguieron funcionando: el viajero podía volar ahora de Santiago a Miami en tres días, pernctando en Lima y Panamá. La *British Overseas Airways* comenzó a viajar a Chile a finales de la década de 1940, al igual que la KLM y otras compañías europeas que pronto se le sumaron. La aerolínea nacional, IAN-Chile, no se aventuró fuera del espacio aéreo chileno hasta 1946, cuando comenzó sus vuelos regula-

²⁷ En este sentido, Santiago se encontraba por delante de la metrópolis de Buenos Aires, de mucho mayor tamaño y que no lo hizo hasta la década de 1960.

res a Buenos Aires, agregando Lima y Miami a sus itinerarios en 1956 y 1958, respectivamente. Poco después, una segunda aerolínea chilena, LADECO (Línea Aérea del Cobre), que en un comienzo servía a la mina de cobre Chuquibambilla, comenzó a ampliar sus operaciones dentro del país; después volaría también al extranjero. Los viajes aéreos, desde y hacia Chile no fueron realmente fáciles para los europeos o los norteamericanos hasta la introducción de los aviones de reacción en la década de 1960. Esto tuvo como consecuencia directa la disminución en la cantidad de transatlánticos que recalaban regularmente en Valparaíso; la una vez ubicua *Pacific Steam Navigation Company* terminó cerrando su servicio principal en 1964²⁸. En 1964, IAN-Chile adquirió sus primeros aviones de reacción (*Sud-Aviation Caravelles* de fabricación francesa). Podríamos decir que los aviones de reacción y el presidente Frei llegaron prácticamente juntos. Ambos representaban una nueva imagen de modernidad; ambos buscaban desalojar lo antiguo; y ambos afectarían enormemente a Chile.

Una mirada a la cultura (1930-1964)

En las décadas de mediados del siglo xx, al igual que antes, la literatura chilena atrajo sobre sí la atención internacional, especialmente por su poesía. Ésos fueron los años en que el poeta Pablo Neruda se afianzó como una verdadera figura poética que se alzaba sobre el panorama cultural del Chile del siglo xx, como nadie lo había hecho antes. Al igual que Gabriela Mistral, ganó el Premio Nobel de Literatura (1971: hasta esa fecha Chile era el único país latinoamericano en obtenerlo dos veces) y nadie nunca tuvo más méritos que él para recibirlo. Era un poeta prolífico, que siguió escribiendo durante toda su vida, sumando logros literarios década tras década. Para los chilenos del siglo xx, él fue el maestro de maestros, «el vate», el Bardo. Y no es descabellado mencionar su nombre junto al de otro Bardo, cuyo *Romeo y Julieta* Neruda tradujo (en forma bastante libre, pero magnífica) en 1964.

La sombra de Neruda fue enorme y no sorprende que el mundo se tomara su tiempo antes de fijarse en otros autores chilenos, aunque la lista de novelistas y cuentistas locales era más que respetable en las décadas de 1950 y 1960. Desde 1930, la moda del «criollismo» de comienzos de siglo había sido abandonada en favor de otros temas más modernos y universales; tendencia que se vio fuertemente incentivada por el destacado crítico de la época, Hernán Díaz Arieta («Alone»). Los temas modernos y universales, no obstante, incluían sin duda los temas sociales, muy desarrollados (a veces con un marca-

²⁸ Ésta fue una tendencia mundial: en el Atlántico Norte, la cantidad de viajeros en avión excedió la de los barcos por primera vez en 1958.

do sesgo político) por la llamada «generación del 38». Aunque ya antes se habían encarnado en la obra de un novelista algo anterior, Manuel Rojas, cuya obra maestra es *Hijo de ladrón* (1951). Sin embargo, cuando a mediados de la década de 1960 se produjo el famoso «boom» de la novela hispanoamericana, ninguna de sus principales figuras era chilena. Es cierto que algunos talentos chilenos notables (especialmente algunos miembros de la «generación del 57», como José Donoso y Jorge Edwards, un poco más joven) ya eran bastante conocidos fuera de Chile. Como también lo era Nicanor Parra, poeta muy distinguido que escapó de la sombra de Neruda en parte porque abrazó la «antipoesía». No obstante, ya a mediados de la década de 1980, Isabel Allende se ganó la condición de «superestrella» internacional con su hipnotizadora novela *La casa de los espíritus*.

Una seria tradición teatral moderna comenzó a desarrollarse en Chile en la década de 1940. Tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica surgieron programas de teatro experimental (y pronto también en la Universidad de Concepción). Las semillas de la renovación así plantadas no demoraron en germinar y, en las décadas de 1950 y 1960, apareció una generación de dramaturgos chilenos de gran talento: Fernando Debesa, Egon Wolff, Sergio Vodanovic, Alejandro Sieveking y muchos otros. La tradición continuaría (especialmente con el notable Juan Radrigán) más allá del colapso de la democracia en 1973. En un nivel más liviano, sin duda, hay que mencionar *La pérgola de las flores* (1960), de Isidora Aguirre, la comedia musical más popular de los últimos tiempos en Chile. De hecho, siempre debemos recordar que, como señaló W. H. Auden:

The pious fable and the dirty story
Share in the total literary glory²⁹.

No hay que ignorar tampoco a novelistas populares, como Jorge Inostrosa, autor de una evocación en cinco volúmenes de la guerra del Pacífico, *Adiós al Séptimo de Línea* (1955-1959), que luego fue llevado a una radionovela de inusual extensión³⁰. Tampoco se puede omitir, ni siquiera en el resumen más simple de la cultura chilena moderna, a dos personas que contribuyeron de manera admirable a hacer la vida más llevadera: Paz y Pepo. Los libros del encantador *Papelucho*, de Marcela Paz (escritos como el diario de vida de un ingenuo niño) han deleitado hasta ahora a varias generaciones de niños chilenos (y también a gran cantidad de chilenos más crecidos). También a comienzos de la década de 1950 y gracias a la pluma genial de «Pepo» (René Ríos) los chilenos se familiarizaron con uno de los personajes de historietas más memorables que jamás hayan surgido en

²⁹ «Letter to Lord Byron», parte III. [N. de E.]: «La fábula piadosa y la sucia historia / se reparten la gloria literaria».

³⁰ A finales de la década de 1950 se habían vendido 500.000 ejemplares de la misma.

América Latina (o en cualquier otra parte): el inmortal Condorito. Nuestra admiración aquí es incondicional.

El abandono del «criollismo» por parte de los escritores en las décadas de 1920 y 1930 tuvo sus correlatos en la pintura y en la música. En la arquitectura, sin embargo, una tendencia contraria comenzó a producirse tras la década de 1920, con un nuevo interés por los diseños hispánicos tradicionales que reemplazaron la hegemonía europea precedente. Los pintores del «grupo Montparnasse» o «generación del 28» (Camilo Mori quizá merezca ser destacado aquí) trataron de abrazar el fermento artístico centrado entonces en Francia, país que varios de ellos habían visitado en la década de 1920. Esta tendencia recibió un impulso inesperado en 1929, cuando el general Ibáñez cerró la Escuela de Bellas Artes y mandó a veintiséis pintores y escultores (incluido el pintor Mori y el escultor Tótila Albert) a estudiar a Europa. Al regresar, su lealtad al movimiento moderno estaba naturalmente muy fortalecida. Mientras tanto, algunos pintores de la escuela de arquitectura de la Universidad Católica sucumbieron al surrealismo, entre ellos Nemesio Antúñez y Roberto Matta (quien se instaló en París). Ambos son los artistas chilenos más famosos del siglo xx y ya han ocupado el lugar que les correspondía en el panteón hispanoamericano.

En lo que se refiere a la música clásica, por su parte, lo que generalmente se ha llamado «nacionalismo» fue perdiendo terreno progresivamente entre los compositores chilenos ante el «internacionalismo» (la adaptación de las tendencias europeas modernas). La figura clave en este sentido fue sin duda el eminente Domingo Santa Cruz, cuyo colega más joven, Juan Orrego-Salas, también defendió las formas de composición modernas e internacionales. No podemos hablar de que existiera en Chile una vida musical realmente floreciente (dejando de lado la ópera) mucho antes de la década de 1940. Muchas obras excelentes fueron interpretadas por la Sociedad Bach, que fue creada en 1917 y perduró hasta 1932. Esto abrió el camino para que, en la década de 1920, se renovara el Conservatorio nacional y se incluyera la música entre las artes estudiadas en la Nueva Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile (fundada en 1929). El paso decisivo para avanzar en este rumbo fue dado en 1941, cuando el Congreso creó el Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile: uno de sus primeros actos fue la formación —*¡finalmente!*— de una orquesta sinfónica nacional.

A pesar del claro fortalecimiento que significaron estas medidas para la vida musical, ninguno de los compositores chilenos más importantes puede ser colocado junto a los «tres grandes» del siglo xx iberoamericano (el brasileño Heitor Villa-Lobos, el mexicano Carlos Chávez, el argentino Alberto Ginastera). No obstante, a otro nivel, los *intérpretes* chilenos han dejado una profunda huella en el mundo de la música. El célebre barítono Ramón Vinay, en primer lugar, fue muy conocido en el circuito operístico internacional. No podemos dejar de mencionar tampoco a uno de los mejores pianistas a escala mundial de su época, Claudio Arrau (como Vinay, nacido en Chillán), cuya profesión eminente-

temente internacional lo llevó, también, a pasar gran parte de su vida en el extranjero. Al final de su larga trayectoria, sus ocasionales visitas a Chile se fueron pareciendo cada vez más a viajes oficiales de la realeza. ¿Y por qué no?

Según el escultor Rodin, el progreso existe en el mundo, pero no en el arte. A un nivel profundo, esto es cierto sin duda alguna. Sin embargo, algunos periodos sí son reconocidos como peculiarmente fértiles en la expresión artística, como *mejores* que otros. Podemos aventurar que, aun cuando el progreso económico de Chile era deficiente e incluso los problemas sociales se intensificaban, la «producción cultural» del país nunca fue más viva que en las décadas de 1950 y 1960. Y el ímpetu no se perdió en modo alguno durante los malos momentos que vendrían³¹. Muchas cosas pueden decirse sobre los chilenos modernos, salvo que carecían de creatividad.

³¹ Aún no es posible apreciar desde una perspectiva correcta el desarrollo cultural que se inició en la década de 1960. Tras el colapso de la democracia en 1973, muchos intelectuales en Chile se quejaban, con cierta razón, de un apogeo cultural, que duró varios años, y diversas personalidades de la cultura se exiliaron. Entre ellas, Ariel Dorfman, muy conocido ya como crítico y que luego se haría internacionalmente famoso como dramaturgo y novelista. Un nuevo e importante talento poético internacional, Raúl Zurita, se abrió paso en el Chile de la década de 1980. El dramaturgo más notable del reciente periodo quizá sea Juan Radrigán. Sería injusto emitir comentarios aquí sobre los muchos escritores en prosa que han estado trabajando en las décadas de 1980 y 1990, aunque (en el momento de escribir este texto) parece especialmente interesante seguirle la pista al novelista Luis Sepúlveda.

Quinta parte Democracia y dictadura

Entre 1964 y 1973, dos gobiernos reformadores, con distintas formas de retórica revolucionaria, trataron de producir profundas reformas estructurales en un esfuerzo por remediar los graves problemas sociales y el lento crecimiento económico de Chile. Al margen de cuáles hayan sido sus éxitos inmediatos, ni la «revolución en libertad» de la Democracia Cristiana ni la «transición al socialismo» de los partidos marxistas lograron sus objetivos. Los políticos de todos los sectores se fueron cargando ideológicamente cada vez más, mientras el panorama de la opinión pública se polarizaba de forma creciente durante la presidencia de Salvador Allende. Esta crisis en aumento llevó a la ruptura del sistema político en septiembre de 1973 y a la toma del poder por las fuerzas armadas. Bajo el severo liderazgo del general Pinochet, se impulsó un programa económico neoliberal en Chile y se llevó a cabo una drástica reorganización nacional. Los resultados, inevitablemente, son mixtos. En un momento de sostenido crecimiento económico, basado de nuevo en las exportaciones, el régimen de Pinochet fue desafiado con éxito por la oposición democrática (liderada por los demócrata-cristianos y los socialistas), que, bajo la forma de una nueva y disciplinada coalición política, se hicieron cargo del país en marzo de 1990.

GOBIERNOS

1964–1970:	Eduardo Frei
1970–1973:	Salvador Allende
1973–1990:	General Augusto Pinochet
1990–1994:	Patricio Aylwin
Desde 1994:	Eduardo Frei*

* hijo del presidente de 1964–1970.

Revolución en libertad, 1964-1970

*Juan Verdejo¹ como un rey
si gobierna Eduardo Frei.*

Eslogan de la Democracia Cristiana, (h. 1963)

LOS REFORMADORES SOCIALES CATÓLICOS

El Partido Demócrata Cristiano de Chile (el PDC) fue el primer partido de su tipo en llegar al poder en América Latina. Internamente, resultaría el partido político más fuerte de la segunda mitad del siglo xx. Como hemos visto, su linaje puede rastreadse hasta un grupo de jóvenes conservadores disidentes, en su mayor parte antiguos estudiantes de la Universidad Católica, incluidos los futuros dirigentes del PDC: Eduardo Frei, Bernardo Leighton, Rafael Agustín Gumucio y Radomirio Tomic. Éstos habían creado su propio partido, la Falange Nacional, justo después de la elección presidencial de 1938.

Los falangistas se habían ganado un gran respeto por su integridad política, pero esto no les ayudó mucho en términos electorales, al menos antes de mediados de la década de 1950. Otros «socialcristianos» (incluido el querido Dr. Eduardo Cruz-Coke) permanecieron en el redil conservador y, en 1949, formaron un nuevo Partido Conservador Social Cristiano, que durante uno o dos años obtuvo en las elecciones mejores resultados que la Falange. Dado que no tenía sentido contar con dos movimientos de esta índole en Chile, en junio de 1957 se fusionaron para formar el nuevo PDC.

Induciría a un gran error ver el desarrollo del PDC como una acción promovida activamente por la Iglesia. Dos sacerdotes de espíritu reformista, fray Fernando Vives y fray Jorge Fernández Pradel, incentivaron de alguna manera al grupo de la Falange original, pero los intereses de la jerarquía eclesiástica en términos de reforma social eran limitados en ese momento. Los reformadores programas de la Acción Católica creados en la década de 1930 sólo involucraron a una pequeña minoría de católicos. Ya en 1947, el tan querido arzobispo de Santiago, José María Caro (el primer cardenal de Chile), denunció a los falangistas

¹ Juan Verdejo: personificación simbólica del hombre común, inventada por el caricaturista Jorge Délano («Coke») y conocida a través de las páginas de su revista *Topaze*.

por no ser lo suficientemente anticomunistas. Este clima fue cambiando muy lentamente con la asimilación de las «encíclicas sociales» del Papado (*Rerum novarum*, 1891, *Quadragesimo Anno*, 1931) y el pensamiento de filósofos católicos modernos, como Jacques Maritain. En 1947, un jesuita activo y muy respetado, fray Alberto Hurtado (famoso por sus incursiones nocturnas en una camioneta verde donde recogía a niños indigentes para llevarlos a los orfanatos que él mismo fundó) creó su Acción Sindical y Económica Chilena (ASICH), en un renovado esfuerzo por incentivar el sindicalismo comercial católico. El obispo de Talca, de gran conciencia social, Manuel Larraín, dio su apoyo al falangista Emilio Lorenzini, cuyos esfuerzos por organizar a los trabajadores vitivinícolas en los alrededores de Curicó le supusieron una pena carcelaria (1953). Tanto la Iglesia como la Falange estaban cada vez más interesadas en movilizar el campo, que todavía se encontraba casi totalmente «desorganizado».

Después de su formación en 1957, el PDC hizo muy rápidos progresos. La votación inesperadamente buena que obtuvo Eduardo Frei en las elecciones presidenciales de 1958 aumentaron su creciente importancia nacional. Gabriela Mistral lo describió como un hombre «de ideas concretas, poco sentimental, pero de naturaleza noble».² Era serio, muy culto y también alto. Después de 1958, Frei y el PDC emprendieron un denodado esfuerzo por crear nuevas redes de apoyo en las universidades, en las «callampas», en el campo y, también, entre los nuevos votantes que llegaban en gran número a los registros electorales.

El símbolo electoral del PDC (una flecha con dos barras horizontales que atraviesan el eje vertical) simbolizaba su afirmación de que tanto el capitalismo como el socialismo podían ser trascendidos en una «sociedad comunitaria». Las definiciones de «sociedad comunitaria» nunca fueron exactamente precisas. Sin embargo, a pesar de lo indefinido que haya sido esta visión del mundo, el PDC encarnaba claramente una seria aspiración de reformas sociales (y también de reforma agraria) combinada con un tenaz vínculo con la democracia. En resumen, una «revolución en libertad».

Para entonces, la Iglesia había comenzado a ver, evidentemente, con mejores ojos tales objetivos. Bajo la dirección de fray Emilio Tagle (arzobispo de Valparaíso desde 1961), el mayor de los dos seminarios del país estaba formando a una nueva generación de sacerdotes con una mayor conciencia de los problemas de los pobres. Además, la Iglesia puso en funcionamiento toda una serie de nuevas organizaciones para articular su creciente empuje social. Un formidable jesuita belga, fray Roger Vekemans, encabezó su propio centro de investigaciones (DESAL), y fue el ideólogo de toda una plataforma de «reformas revolucionarias» para América Latina.³ De mayor importancia incluso (tanto

² Eduardo Frei, *Memorias 1911-1934*, 1989, pág. 158.

³ La fuerte personalidad de fray Vekemans ayudó a crear la impresión de que él era la *éminence grise* del gobierno del PDC después de 1964. Habiendo fallado, según su propia opinión, en salvar a Chile del comunismo, dejó el país a los pocos días de la elección presidencial de 1970.

para el PDC como para la Iglesia), fue la creación de los comités vecinales de base católica, los centros de madres y los clubes de jóvenes en prácticamente la mitad de todas las «callampas» que circundaban Santiago. En 1962, dos notables cartas pastorales de los obispos confirmaron el nuevo acento en la acción y la reforma sociales. Todos estos avances habían recibido los efectos producidos por la renovación internacional de la Iglesia, el *aggiornamento* producido en el pontificado de Juan XXIII y en el Concilio Vaticano II.

Frei y el PDC sin duda se beneficiaron con la autorrenovación de la Iglesia, a pesar de su sincera afirmación de que el PDC no era un partido confesional. Lo anterior se evidencia en los análisis del comportamiento de los votantes. Las encuestas del Dr. Eduardo Hamuy de 1958 y 1964 muestran que el apoyo a Frei (sin contar la contribución de la derecha en su victoria) provenía de una base social muy heterogénea: católicos, clase media urbana y parte considerable de la clase trabajadora. También parece cierto que muchos de los que se unieron al PDC en sus años de expansión eran «algo más conservadores que los miembros que llevaban mucho tiempo en el partido».⁴ La postura de Frei —entre los «reaccionarios sin conciencia» y los «revolucionarios sin cabeza», como señaló en una reunión política en Valparaíso⁵— tenía un atractivo evidente para un amplio espectro de la opinión pública. Y, en 1964-1965, se produjo un claro brote de simpatía por el PDC que parecía un buen augurio para la «revolución en libertad».

UN «PARLAMENTO PARA FREI»

Esta simpatía no era generalizada. Los partidos del FRAP pronto declararon su inmediata oposición al gobierno del PDC, al cual los socialistas le restaron importancia, en una frase ya gastada, designándolo como la nueva cara de la derecha. Los partidos de derecha naturalmente tenían la esperanza de que el PDC fuera menos reformador de lo que parecía. Frei los sacó pronto de su error. Sin embargo, dada su minoría en el Congreso, el PDC poco podía hacer a comienzos de su mandato para iniciar su programa legislativo. Con las elecciones parlamentarias de marzo de 1965, el PDC lo apostó todo bajo el lema «¡un Parlamento para Frei!». De manera más bien inesperada, ganó la apuesta. Con sólo un poco más del 40% de los votos populares, el PDC logró ochenta y dos asientos en la Cámara de Diputados (mayoría) y aumentó sus senadores de tres a trece, no lo suficiente, sin embargo, para impedir que una oposición unida bloqueara su legislación.⁶ El rasgo

⁴ Michael Fleet, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, 1985, pág. 79.

⁵ *El Mercurio*, 1 de septiembre de 1964.

⁶ Trece mujeres fueron elegidas para el nuevo Congreso; porcentaje (6,5%) que, a pesar de ser pequeño, hizo avergonzar a la Casa de los Comunes británica o a *fortiori* al Congreso norteamericano de la época.

más notable de este «terremoto» electoral fue que casi eclipsó a la derecha, la cual bajó de un tercio de los votos (1961) a un octavo. Los radicales también perdieron terreno, mientras que la izquierda lo mantuvo. Tanto los socialistas (con vehemencia) como los comunistas (en forma más moderada) reiteraron entonces su oposición a Frei, aunque resentidos, puesto que el PDC estaba haciendo realidad su afirmación de que era el partido de la verdadera reforma, mientras los radicales consideraban una nueva alianza con la izquierda, muy a pesar de Julio Durán y sus seguidores.

Desgraciadamente, después del terremoto electoral vino uno de verdad, el más serio que haya afectado a Santiago en todo el siglo. Poco después, los problemas de Frei aumentaron aún más con la crisis internacional producida por la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana (abril de 1965). Esto provocó airadas manifestaciones en Santiago. Frei ya había afianzado la postura independiente de Chile, restaurando las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con Europa Oriental (aunque no con Cuba, con la cual Alessandri había roto relaciones) y ahora volvió a hacerlo: Chile, sin el apoyo de los otros delegados de América Latina, condenó la acción del presidente Johnson ante la Organización de Estados Americanos. En 1965, las relaciones entre Chile y Estados Unidos volvieron a tensarse por la revelación de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba auspiciando una investigación de ciencias sociales para ver el «potencial de guerra interna» de Chile. Esto fue considerado por algunos como un franco intento de espiar a la izquierda chilena y la gran molestia resultante hizo que dicha investigación, llamada grotescamente «Proyecto Camelot», fuera abandonada. Frei fue el último hombre que cayó en la retórica antiimperialista. A pesar de todo lo anterior, Estados Unidos estaba entregando a Chile cuantiosas sumas de dinero bajo la «Alianza por el Progreso» del presidente Kennedy (alrededor de 720 millones de dólares entre 1961 y 1970, la mayor cantidad, en términos *per cápita*, otorgada a cualquier país latinoamericano). Frei, sin embargo, creía en el fortalecimiento de los vínculos con Europa Oriental y viajó hacia allá en julio de 1965 para realizar una serie de visitas oficiales y de Estado muy provechosas. A su llegada al aeropuerto Los Cerrillos de Santiago, el presidente fue aclamado por una multitud de 100.000 personas. Tanto a escala nacional como internacional, la corriente parecía fluir en su favor.

Sin embargo, ningún reformador, como Maquiavelo señaló hace mucho tiempo, puede esperar que su vida sea fácil. En marzo de 1966, cuando las tropas mataron a siete trabajadores durante una huelga en la mina de cobre El Salvador, las diatribas de la izquierda ganaron credibilidad, incluso en el interior del PDC. La segunda asamblea nacional del PDC (agosto de 1966) reveló una división interna en tres facciones potencialmente seria: los «oficialistas», cuya lealtad a Frei era incondicional; los «rebeldes», que querían políticas mucho más radicales y mayor control del Partido sobre el gobierno; y los llamados «terceristas», cuyas críticas al gobierno eran más limitadas y que buscaban mayor com-

promiso en el interior del partido. Por el momento, los «oficialistas» no tuvieron dificultades para mantener el control.

Algunas de las dificultades del PDC, sin duda, provenían de la abrumadora dimensión de su triunfo en 1964-1965. Su decisión de gobernar por sí solo, sin aliados, era aberrante para las normas habituales de la política chilena. Las actitudes algo triunfalistas, por no decir arrogantes, de ciertos demócrata-cristianos (Radomiro Tomic y otros, incluso, hablaban de «treinta años en el poder») difícilmente iban a traerles amigos. Los emolientes traídos y concesiones de la política de coalición habían sido olvidados por este Partido recién llegado y con un éxito repentino entre los partidos tradicionales. Para algunos chilenos, los criterios del PDC al dispensar el patronazgo parecían más partidarios, incluso más ideológicos, de lo que habían sido cuando los radicales reinaban en el gallinero. La atmósfera política estaba cambiando de alguna manera. El escritor Cristián Huneeus, al volver a su país en 1966 después de tres años en Inglaterra, se preguntó si todavía sería posible vivir en Chile «como en el siglo XIX»⁷. No lo era. Tal como comentó sagazmente otro escritor en la misma época: «El poder se ha convertido en un supermercado. Antes era el almacén de la esquina»⁸.

LAS REFORMAS SOCIALES Y LAS FRUSTRACIONES ECONÓMICAS

Cuatro áreas de reforma específica tenían extrema prioridad para el gobierno del PDC: la «promoción popular», la educación y el bienestar, el campo y el cobre. La «promoción popular» (el fomento de la formación de redes de organización locales y de autoayuda, especialmente en las poblaciones «desorganizadas» de los barrios marginales) prendió con fuerza desde un comienzo y fue puesta bajo la tutela de una Conserjería nacional. Las juntas de vecinos, los centros de madres, las asociaciones de padres, los clubes para jóvenes y las asociaciones deportivas proliferaron. En 1970, según el gobierno, unas 20.000 «unidades» de este tipo habían cobrado vida, cerca de la mitad eran centros de madres con una cantidad de miembros total estimada en 450.000 mujeres.

En un comienzo, la izquierda se mostró cautelosa ante la «promoción popular», considerando un sistema paternalista con el cual el PDC podía ganar una nueva y vasta clientela, con el fin de equilibrar la sostenida preeminencia de la izquierda en el movimiento sindical. Ya en 1968, consiguió Frei que el Congreso concediera estatuto oficial a las juntas de vecinos. No obstante, allí donde el PDC se aventuraba, otros lo seguían con suma facilidad, y, a finales de la década de 1960, la izquierda había realizado importantes avances

⁷ *Autobiografía por encargo*, 1985, pág. 88.

⁸ Leonard Gross, *The Last Best Hope. Eduardo Frei and Chilean Democracy*, Nueva York, 1967, pág. 132.

en las «poblaciones», como ahora se llamaba con más cortesía a las callampas. La izquierda también se mostraba muy a favor de impulsar las tomas de terrenos urbanos (para nuevas poblaciones) por parte de los sin hogar, algo que ocurrió regularmente durante 1969-1970 y también durante los comienzos de la década de 1970.

Tales tomas de terrenos urbanos simplemente reflejaban un problema creciente: con una población urbana en expansión (Santiago creció en 800.000 personas en la década de 1960) el gobierno no podía satisfacer la incesante demanda de vivienda. Ni siquiera consiguió cumplir sus propias metas. Aun así, entre 1964 y 1970, fueron construidas unas 260.000 nuevas casas (alrededor del 30% por la CORVI, una corporación de vivienda estatal creada en 1953) y se establecieron unas 200.000 «soluciones habitacionales» (este término particular cubría la provisión de sitios para proyectos de vivienda autogestionados). Otro programa específico, la *Operación Sitio* se encargó de alrededor del 30% de esas «soluciones». La preocupación del PDC por mejorar el servicio de salud también se vio reflejada en el hecho de que la cantidad de hospitales (y camas) se duplicó durante este período.

El esfuerzo por fomentar la educación fue notable: en términos de su porcentaje dentro del gasto público, la educación subió de un 15% a un 20%. El gasto militar en 1970 era de alrededor de un 12%. Y, como ha sugerido Harold Blakemore, «en el período se produjo un extraordinario fermento en todos los niveles educacionales».⁹ Se construyeron algo así como 3.000 nuevos colegios: en 1970, la educación primaria cubría el 95% de los niños en edad escolar. Se introdujeron una serie de nuevos textos de estudios muy creativos. En Chile no se ha visto nada comparable a estos cambios después de la década de 1960.

La reforma agraria marcó una cesura aún mayor con el pasado; en muchos sentidos, se trató de la quiebra más fuerte desde la Independencia. Para entonces, en palabras de Brian Loveman, Chile había tenido «seis años de drásticos cambios en el campo».¹⁰ Tanto Frei como el PDC habían estimulado con creces la sindicalización rural y comenzaron a revalorizar expropiaciones en la zona rural de manera sostenida. La antigua hegemonía de los terratenientes se veía así seriamente amenazada por primera vez en la historia del país.

Una simplificación en los procedimientos legales (febrero de 1965) permitió a los sindicatos comerciales del campo crecer mucho más rápidamente que antes. La cantidad de miembros de los sindicatos en su totalidad prácticamente se duplicó entre 1964 y 1970; cerca de la mitad de este aumento se debió a los nuevos sindicatos rurales, para los cuales se puso en vigor una Ley especial en abril de 1967. A mediados de 1970, había unos 500 de ellos, agrupados en tres «federaciones» (Triunfo Campesino, Libertad, Ranquil)

con un total de alrededor de 130.000 miembros. La fuerza de trabajo sindicalizada todavía era una minoría en el campo, pero con el aumento del salario agrícola mínimo al mismo nivel del salario urbano, con las huelgas y las peleas, con leyes laborales a punto de entrar en vigor (aunque de manera selectiva) por primera vez, era obvio que el equilibrio del poder en el campo estaba cambiando. Al igual que con la «promoción popular», el PDC, sin duda, esperaba sacar dividendos políticos de estas acciones, pero una vez más, la izquierda aceptó el desafío: una de las tres nuevas federaciones campesinas, Ranquil, formaba parte de su red rural en expansión.

En sus primeros años, el gobierno del PDC hizo gran uso de la Ley de reforma agraria de Alessandri, ampliando tanto la CORA como la INDAP y expropiando unas 400 haciendas antes de mediados de 1967. No obstante, el gobierno naturalmente quería su propia Ley más ambiciosa. La necesaria reforma constitucional (Artículo 10.10) y la nueva Ley de reforma agraria tuvieron que soportar un prolongado paso a través del Congreso, pues ambas despertaban la ira de la derecha, en general, y de los hacendados, en particular. La Ley de reforma (Ley 16.625), firmada en julio de 1967 por Frei (durante una de esas espléndidas ceremonias públicas que tanto gustaban al PDC), hizo que todas las haciendas de más de 80 hectáreas «básicas»¹¹ fueran susceptibles de ser expropiadas; los propietarios tenían derecho a conservar una «reserva» de 80 hectáreas y a una compensación en la forma de un pequeño pago en efectivo y en bonos del gobierno a largo plazo. Las haciendas administradas de manera ineficiente fueron los primeros blancos de la expropiación. A finales del período presidencial de Frei, la CORA había expropiado más de 1.300 haciendas (entre el 20% y el 25% de todas las propiedades que se podían expropiar). La reforma agraria no se encontraba ni siquiera cerca de haber sido completada, pero sin duda avanzaba.

Inevitablemente hubo quienes quisieron ir más rápido. Las «tomas» de los campos por los campesinos, a menudo a instancias de la izquierda o de entusiastas agentes de la INDAP, se hicieron muy frecuentes: 400 entre 1969 y 1970. No es nada sorprendente que los terratenientes a veces se resistieran. El derramamiento de sangre no siempre se evitaba. El 30 de abril de 1970, Hernán Mery, encargado regional de la CORA, resultó herido mortalmente durante un enfrentamiento en una propiedad en Longaví (cerca de Linares) defendida por su combativo dueño. La reforma agraria había encontrado su mártir. En 1970, la movilización agraria ya era difícil de contener.

Una reforma agraria sería siempre plantea la pregunta sobre cómo debe organizarse después el campo. En Chile no faltaban las sugerencias. Los rebeldes del PDC (ejemplificados por Jacques Chonchol, vicepresidente de la INDAP) querían una reorganización

⁹ «Chile», en Nancy Parkinson (ed.), *Educational Aid and National Development*, Londres, 1976, pág. 343.

¹⁰ *Struggle in the Countryside*, Bloomington, Indiana, 1976, pág. 278.

¹¹ Esto significaba 80 hectáreas de tierra irrigada en el Valle Central. Las propiedades de más de 80 hectáreas pero menos irrigadas podían eximirse, por ende, de la expropiación.

total. Los campesinos, por su parte, no compartían los puntos de vista de los intelectuales urbanos. En un comienzo, los fundos expropiados no eran subdivididos, sino que se convertían en asentamientos trabajados por un comité electo de campesinos y la CORA. Al cabo de cinco años, los socios de cada asentamiento tenían que decidir si querían seguir trabajando colectivamente o subdividir. A finales del período presidencial de Frei, se habían constituido más de 900 asentamientos: entre ellos, unos 100 ya habían tomado una decisión, la mayoría eligió continuar como unidades no divididas.

Los principales beneficiarios a corto plazo de la reforma agraria fueron, de hecho, los socios de los asentamientos. Con salarios que aumentaban rapidísimamente, casi se convirtieron en una nueva clase privilegiada en el campo. Los jornaleros y los temporeros (a quienes se les negaba la condición de socio) sacaron considerablemente menos beneficios. La INDAP luchó valientemente para constituir cooperativas entre los minifundistas y los aparceros del «sector no reformado», con cierto éxito por lo demás. Los terratenientes, por su parte, respondieron ante la amenaza de extinción reorganizándose, ampliando el SNA y promoviendo los sindicatos de empleadores y pequeños propietarios; además, mostraban así que los conservadores, al igual que los radicales, eran capaces de movilizarse. Algunos indignados granjeros a veces bloqueaban las carreteras para hacer públicas sus demandas. La producción agrícola aumentó levemente durante los años del PDC, a pesar del hecho de que 1968 conoció la sequía más desastrosa en la memoria de los chilenos. La mayor parte de este aumento provino del «sector no reformado» más que de los asentamientos, donde mucho de lo que se cultivaba o se criaba era consumido comprensiblemente por los mismos socios.

Cualquier programa de reforma ambicioso es forzosamente caro. El gasto público se duplicó entre 1964 y 1970 (de 8.453.000 a 16.161.000 escudos de 1969). Buscando otras fuentes de ingresos, era natural que Frei viera qué podía sacar de la industria del cobre. El objetivo era garantizar un mayor control sobre las compañías norteamericanas y elevar la producción, para aumentar las ganancias. Más que una nacionalización total, Frei estaba a favor de una política más cauta: la «chilenización», como se la llamó (la adquisición del 51% de las acciones de las compañías mineras). A cambio de concesiones tributarias, éstas aumentarían tanto la inversión como la producción. La Kennecott (cuya filial, Braden, administraba El Teniente) estuvo inmediatamente de acuerdo con la chilenzación (diciembre de 1964). La Anaconda (dueña de Chuquibambilla y El Salvador) opuso mayor resistencia. Ya en 1969, tras fuertes demandas de nacionalización por parte de la izquierda (y parte del PDC), Frei renovó las negociaciones con la Anaconda, que entonces pidió ser nacionalizada con las debidas compensaciones. El trato definitivo (junio de 1969) estipulaba la chilenzación inmediata seguida por un traspaso final, lo que Frei llamó una «nacionalización pactada».

Mientras tanto, la producción aumentó y tanto la Kennecott como la Anaconda de-

sarrollaron planes para su mayor expansión. El propio gobierno realizó entonces una serie de nuevas e inteligentes acciones. El antiguo «Departamento del Cobre» (creado en 1954) fue elevado de categoría como CODELCO (Corporación del Cobre), asignándosele nuevas tareas así como una dotación de expertos. Los chilenos se volvieron mucho más importantes en los niveles gerenciales de las minas. Chile también estaba cobrando más importancia en la refinera, con una nueva planta (abierta en 1964 en Las Ventanas, al norte de Valparaíso), para complementar las antiguas obras de Paipote, cerca de Copiapó¹². La medida más importante, sin embargo, fue la intervención de los precios: desde 1966, el cobre se vendió a los precios que dictaba el Mercado de Metales de Londres, en ese momento el doble del precio aceptado por las compañías norteamericanas. Dado que ahora el precio del cobre estaba en ascenso, en parte debido a la guerra del Vietnam, esto significó un gran aumento en los ingresos por concepto de impuestos: entre 1966 y 1970, aumentó al doble las cifras de los años de Alessandri. El gobierno del PDC había tenido muy buena suerte.

En términos económicos generales, el gobierno del PDC tenía que equilibrar las exigencias en conflicto de la reforma, el crecimiento y la estabilidad. Su objetivo era promover una mayor producción y permitir que la reforma se mantuviera mientras se reducía la inflación. La primera etapa del régimen del PDC estuvo marcada por un momento de crecimiento total, repentino y bienvenido; sin embargo, tras este período, siguieron los últimos años de la década, que fueron menos impresionantes, con tasas de crecimiento más bajas y una inflación en alza, lo que significó menos recursos disponibles para los programas de reformas del PDC.

A pesar de lo anterior, se realizó entonces un esfuerzo consciente a favor de la racionalización y la planificación, cuyo mejor símbolo fue la creación de ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional). Para compensar los altibajos del comercio exterior, en abril de 1965 se puso en marcha una inteligente política de pequeñas devaluaciones regulares del escudo. Una serie de innovaciones fiscales —el aumento de los impuestos a la Renta y a las Ventas, el reajuste automático de otros impuestos específicos, la imposición de un impuesto patrimonial (sobre la fortuna) que afectaba a alrededor de 80.000 personas, la reevaluación de los valores de las propiedades, un nuevo impulso para detener la evasión de impuestos— significó la duplicación de los ingresos en concepto de impuestos directos en 1970. Esto, combinado con las mayores ganancias provenientes del cobre, permitió que Chile mantuviera una situación favorable en su balanza de pagos y que reuniera algunas reservas. Las exportaciones prácticamente duplicaron su valor. Se realizaron esfuerzos para diversificar los mercados de ultramar. En este sentido, hay que mencionar las iniciativas de Frei y de su afable ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés, con el fin de promover programas de integración económica latinoamericana, especialmente

¹² En el Norte Chico, «Paipote» es el sobrenombre que se les da a veces a los grandes bebedores.

el nuevo Pacto Andino (1969, con Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y, posteriormente, Venezuela) en el que se depositaron muchas esperanzas.

Con respecto a la industria, el gobierno siguió una política más conservadora. Así, la elite empresarial (sólo parte de la cual sentía simpatía por Frei) y la SOFOFA estaban lejos de apoyar sus políticas. Esto se vio reflejado por la baja de un 20% en la inversión privada que se produjo en la década de 1960. A raíz de ello, el Estado se vio poco menos que obligado a jugar un papel más activo. De hecho, todo el programa del PDC puede ser visto como una extensión e intensificación de la tradición intervencionista del Estado que se había desarrollado desde el primer régimen de Ibáñez. Entre 1969 y 1970, el Estado era responsable de más de la mitad de todas las inversiones industriales. Tampoco descuidó las mejoras en infraestructura. La capacidad hidroeléctrica fue ampliada por el enorme proyecto de ENDESA en Rapel (cerca de Rancagua), que comenzó a producir energía en 1968. La Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL), una nueva entidad estatal, comenzó a funcionar en un sistema de telecomunicaciones nacional. La ENAP construyó una refinería de petróleo en Concepción y continuó haciendo prospecciones petrolíferas en el extremo austral. El transporte también se vio beneficiado con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Pudahuel, el comienzo de las obras del Metro, diseñado por los franceses para Santiago, y la excavación del túnel Lo Prado de 2,75 kilómetros, que acortó considerablemente el viaje de Santiago a Valparaíso. El Estado también se mostró activo en una serie de empresas colectivas con firmas extranjeras, especialmente el impresionante complejo petroquímico instalado en Concepción con *Dow Chemical*.

Frei y el PDC heredaron y aplicaron la legislación liberal de Alessandri sobre inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras (especialmente norteamericanas) en la industria manufacturera fueron bienvenidas por el gobierno. Ya fuera a través de la creación de filiales locales o de la compra de firmas nacionales establecidas (como INSA, la compañía de neumáticos), las corporaciones multinacionales se afianzaron en el sector más nuevo y dinámico de la industria: la electrónica, la farmacia, el ensamble de automóviles. En 1970, unas cuarenta de las cien compañías chilenas más exitosas eran controladas por intereses extranjeros, incluidas las treinta principales multinacionales de Estados Unidos. En 1970, las firmas extranjeras controlaban cerca del 25% de todo el capital industrial. Dado que muchas de las nuevas industrias eran de gran densidad de capital, tenían poco impacto en los patrones de empleo. Y, aunque a finales de la década de 1960, Chile producía virtualmente todo tipo de bienes de consumo (incluidos artículos imperecederos, como equipos de televisión y lavadoras), gran parte de los bienes de capital debían ser importados. Los ventajosos términos en que operaban las firmas extranjeras, su creciente importancia en la manufactura, la repatriación de sus ganancias; todos estos aspectos se discutían mucho en la época.

A pesar de los genuinos signos de progreso económico (especialmente en 1965-1966), el perenne problema de la inflación continuó rondando al gobierno del PDC. Las primeras políticas de estabilización fueron bastante exitosas; el crecimiento era alto y la inflación disminuyó. Los aumentos en los salarios iban más allá de lo que el gobierno deseaba. A Frei le resultó imposible lograr una buena relación con los sindicatos del comercio. Los sindicalistas del PDC, efectivamente, se retiraron de la CUT, controlada por la izquierda, la principal federación sindical desde 1953. En 1967, Sergio Molina, el ministro de Hacienda de Frei, consciente de la baja en la tasa de inversiones, presentó un plan elegante pero absurdo en términos políticos: colocar el reajuste del 5% (para entonces el aumento anual tradicional de los sueldos y salarios) en un fondo de inversiones. Los empleados recibirían el 5% retenido en forma de bonos del gobierno a largo plazo y también prescindirían del derecho a la huelga por un año. El plan encontró inmediata resistencia. La oposición bautizó cáusticamente a los bonos a largo plazo «chiribonos»¹³ y la CUT realizó una huelga general de un día, durante la cual cuatro trabajadores y un niño fueron asesinados por la policía. El plan del «chiribono» se desvaneció.

Este episodio marcó un punto de ruptura crítico para la «revolución en libertad». La inflación aumentó nuevamente en 1968, 1969 y 1970. Con el crecimiento galopante de ésta, la sequía de 1968 que hacía subir el precio de los alimentos locales e importados, y los sindicatos que exigían nuevamente mayores salarios, se hizo cada vez más difícil mantener una política equilibrada. En su último discurso anual al Congreso, Frei denunció lo que llamó «el nuevo feudalismo», en otras palabras, los sindicatos de trabajadores y otros intereses particulares que ejercían una presión por conseguir demandas que iba más allá de los límites de lo que el gobierno consideraba razonable. Aunque las enmiendas constitucionales aprobadas en 1969-1970 sí aumentaron levemente el control del poder ejecutivo en materia económica¹⁴, había poco que Frei pudiera hacer para mantener en orden a los magnates.

En 1970, por ende, a algunos observadores les pareció que «el Gobierno había perdido en medida importante el control que había logrado sobre la situación económica»¹⁵. Sin embargo, las cifras económicas no nos dicen nada. Más chilenos se sentían más cómodos en 1970 de lo que nunca antes se habían sentido. Había muchos menos mendigos en las calles de Santiago que en otros tiempos. Desde la ventajosa posición de estar a tres años de distancia, el escritor y crítico de arte Jorge Elliott pensaba que «en 1970 Chile prosperaba. Parecía estar a punto de despegar hacia el desarrollo cabal»¹⁶. No obstante,

¹³ *Bonos + Chiribono* (de la fruta chirimoya, que se descompone rápidamente) es un modismo chileno para un cheque sin fondos.

¹⁴ Estas enmiendas también permitían realizar un plebiscito en caso de desacuerdo entre el presidente y el Congreso, la creación de un nuevo Tribunal Constitucional y la ampliación del sufragio a los analfabetos.

¹⁵ Ricardo French-Davis, *Políticas económicas en Chile, 1952-1970*, 1973, pág. 183.

¹⁶ *Chile y el subdesarrollo*, 1973, pág. 8.

también era cierto que algunas de las primeras promesas del gobierno del PDC se habían esfumado. Los antiguos dilemas seguían obstinadamente allí y eran inmanejables. En este sentido, Radomiro Tomic estaba en lo correcto al insistir, como lo hizo tan a menudo en 1969-1970, en que la «profundización» del proceso de reforma sería necesaria si el PDC lograba ganar un segundo período de seis años en la presidencia.

RADICALIZACIÓN, POLARIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN

En 1967, las perspectivas para una segunda presidencia del PDC no parecían muy buenas. La oposición al PDC no había disminuido. Las elecciones municipales (abril de 1967) dieron al gobierno y a la oposición la oportunidad de medir sus fuerzas. El apoyo al PDC se había erosionado. La derecha mostró un modesto repunte, al igual que los radicales. Los partidos del FRAP lograron éxitos más estimulantes. Tanto la derecha como la izquierda sufrieron algunos cambios interesantes. Los Partidos conservador y liberal, cediendo a la lógica de la época, finalmente, se habían fundido (mayo de 1966) bajo el nombre de Partido Nacional (cómo deben de haber sonreído las ilustres sombras de Montt y Varas!). La «nueva» derecha adoptó una postura de combate procapitalista: a finales de la década de 1960, los «momios» —con ese apodo bautizaron a los derechistas sus adversarios— recurrieron indudablemente su antiguo temple.

Mientras tanto, la izquierda, al tiempo que ganaba terreno electoral, se había debilitado a causa de sus luchas internas. En agosto de 1965, el nuevo Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) había sido fundado en la Universidad de Concepción. Sus pocos miembros activos, en su mayoría con estudios universitarios, adoptaron el enfoque guevarista respecto de la necesidad de una «lucha armada» para derrotar al capitalismo e instaurar un sistema revolucionario al estilo cubano. Un enfoque igualmente intransigente encontró aliados, por su parte, en algunos sectores del Partido Socialista. En su asamblea de Chillán en noviembre de 1967, el Partido se redefinió como marxista-leninista y declaró su objetivo de crear un «Estado revolucionario». Muchos socialistas, sin embargo, incluido Salvador Allende, continuaron defendiendo la estrategia electoral, al igual que los comunistas. Estos debates de la izquierda muchas veces llegaron a ser bastante duros.

La disensión interna no estaba restringida a la izquierda. En junio de 1967, los «rebeldes» y los «terceristas» se hicieron con la dirección del PDC. Las relaciones entre Frei y su partido se volvieron de pronto muy tensas. Un comité del PDC, encabezado por Jacques Chonchol (el líder rebelde), había esbozado recientemente un informe que defendía la «vía no capitalista de desarrollo». Bajo una nube de ampulosas generalidades, este documento exigía claramente una política muy radical, incluidas las nacionalizaciones y ciertos esquemas de control de los trabajadores. Aunque los disidentes fueron expulsados

de la dirección del partido en una asamblea del Comité nacional (enero de 1968) con la ayuda de una efectista aparición del mismo Frei, el descontento del ala izquierda del PDC y de su movimiento joven continuó madurando. En noviembre de 1968, Chonchol renunció a su cargo de vicepresidente del INDAP. La escisión del PDC parecía sólo una cuestión de tiempo.

El cambio se dejaba sentir en el aire casi en todas partes a finales de la década de 1960 y no sólo en la política. Las maravillosas canciones de los Beatles eran tan populares en Chile como en cualquier otro lugar del planeta. El *hippismo* de estilo norteamericano, es cierto, hizo pocos avances: unas cuantas escaramuzas entre algunos entusiastas del *rock* de pelo largo y unos «cuadrados» (Santiago, agosto de 1967) difícilmente podían agregarle mucho a la revolución de las costumbres de los jóvenes. El feminismo militante, la experimentación con drogas y el interés por las religiones orientales, tan evidentes en Estados Unidos, no afectaron en gran medida a Chile. Las barbas y el pelo largo se hicieron mucho más comunes en esos tiempos, es cierto; y los estilos de vestir, mucho más informales.

En 1967-1968, las universidades fueron sacudidas por el estallido de la revolución de los estudiantes, que comenzó en la Universidad Católica de Valparaíso ya en 1967 y se extendió a la Universidad Católica de Santiago y a la Universidad de Chile. No había elementos muy originales en estos movimientos estudiantiles (comparados con los de Francia y los Estados Unidos). En muchos sentidos, eran (o pronto se convertirían) en una simple extensión de la competencia más general entre los partidos. Sin embargo, sí se dio una excepción: el movimiento gremialista de derechos en la Universidad Católica de Santiago, encabezado por Jaime Guzmán, le arrebató al PDC el control de la Federación de estudiantes en 1968, centrando su atención estrictamente en los problemas de los estudiantes. En la Universidad de Chile, la pugna se daba entre el PDC y la izquierda, que ganó la Federación en 1969.

Sería absurdo suponer que estas manifestaciones de los jóvenes eran simplemente un eco de los movimientos de protesta norteamericanos o europeos. Había muchas carencias locales que podían alimentar la militancia estudiantil. Y las influencias generales latinoamericanas hacían su aporte al inducir un nuevo estado de ánimo mucho más radical. El general De Gaulle puede haber despreciado el episodio de la guerrilla boliviana de 1967 («el futuro del mundo no se decidirá en Bolivia»), pero no se puede negar su impacto en Chile. La radicalización también socavó el consenso «socialcristiano» que se había formado antes, en torno al PDC. En agosto de 1968, los sacerdotes y los laicos de un nuevo movimiento recién formado, la Iglesia Joven, organizaron una breve ocupación de la catedral de Santiago.

Un cambio cultural fuertemente asociado con esta radicalización fue la aparición de la llamada Nueva Canción Chilena, que después haría sentir su influencia en toda América Latina. En parte, esta tendencia constituía un rechazo consciente de la anodina música

comercial popular que emanaba de las aproximadamente 130 estaciones de radio del país. Gran parte de la inspiración inicial de la Nueva Canción provino del trabajo de la folclorista Violeta Parra. La apasionada y agitada vida de esta extraordinaria mujer terminó en febrero de 1967 (se suicidó), poco después de haber grabado su disco de *Últimas composiciones*. Esas canciones perturbadoramente hermosas quizá sean el legado máspreciado de la década de 1960 en Chile.

Y su conciencia dijo al fin:
cántale al hombre en su dolor,
en su miseria, y su sudor,
y en su motivo de existir.

Ángel e Isabel, hijos de Violeta, inauguraron su Peña, ahora legendaria, en Santiago, en 1965. En los años siguientes, ésta se convirtió en el punto focal de la Nueva Canción, con apariciones regulares de cantantes, como los mismos Parra, Rolando Alarcón, Patricio Manns y, quizá el más memorable, Víctor Jara, que más tarde encontraría un final horriblemente brutal en manos de los militares en 1973. Grupos instrumentales, como Inti-Illimani y Quilapayún también surgieron de ese terreno tan fértil en términos artísticos.

No obstante, mientras la retórica y la emoción revolucionarias se volvían cada vez más manifestas, la izquierda no produjo una ola avasalladora en términos electorales. Con todo esto, quedaba en evidencia la polarización —entre las posturas de la derecha y la izquierda que estaban cada vez más afianzadas—. A finales de la década de 1960, también se produjo una creciente movilización generalizada, en el más amplio sentido del término. La cantidad de huelgas aumentó sostenidamente, en parte porque ya había muchos más sindicatos para organizarlas. La toma de los terrenos urbanos a manos de los campesinos en 1969-1970, al igual que la ocupación de los terrenos urbanos a manos de los sin hogar. El MIR incentivaba activamente estos movimientos: en ciertas poblaciones («26 de julio» en Santiago, «Lenín» en Concepción) comenzaron a formarse rudimentarias «milicias populares». Fuertes manifestaciones estudiantiles y peleas a golpes entre grupos políticos rivales se hicieron perturbadoramente recurrentes.

Y lo que era más serio, desde marzo de 1968 habían comenzado a aparecer los signos de una campaña de terrorismo urbano menor: ataques con bombas al Consulado norteamericano, a los supermercados, a la casa del popular senador del Partido Nacional Francisco Bulnes e incluso a la tumba de Arturo Alessandri (agosto de 1969). Entre 1969 y 1970, el MIR realizó una serie de asaltos a bancos («expropiaciones» en la terminología mirista) e intentó varios secuestros de aviones, uno con éxito. Carabineros descubrió lo que se dio en llamar «escuelas de guerrilla» en el valle del Maipo (junio de 1969) y cerca

de Valdivia (mayo de 1970). Estas nuevas historias confirmaban las sospechas de la derecha de que el país se estaba desintegrando.

Las elecciones parlamentarias de marzo de 1969 trajeron nuevas derrotas para el PDC. Éste perdió veintisiete de sus puestos en la Cámara de Diputados, aunque aumentó su delegación senatorial a veinte. En comparación con 1967, la izquierda se mantuvo igual, pero la derecha mejoró su posición: los nacionales ocuparon su lugar como el partido más grande después del PDC. Casi antes de que tuvieran tiempo para reflexionar sobre estos resultados, los políticos se vieron inmersos en uno de esos trágicos desaciertos que empañan la historia de la humanidad: Carabineros, tratando de desalojar a los ocupantes ilegales de un terreno en la pampa Irigoin, en las afueras de Puerto Montt, mató a ocho personas e hirió a cincuenta más. El hecho ocasionó una de las más feroces canciones de protesta de Víctor Jara, en la cual señala con dedo acusador al duro ministro del Interior de Frei, Edmundo Pérez Zujovic. La izquierda atacó vehementemente a Pérez Zujovic. También lo hizo el movimiento joven del PDC. Puerto Montt fue la última goza para los disidentes del PDC. Al cabo de unas pocas semanas, éstos decidieron crear su propio partido, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (el MAPU, acrónimo que correspondía además a la palabra mapuche para «tierra») y aliarse con la izquierda. El Partido Radical también estaba en crisis. En este caso, el movimiento era en sentido opuesto: una serie de los miembros más derechistas del partido fueron expulsados. Después, en 1969, éstos también fundaron su propio Partido Demócrata Radical, cuyo miembro más destacado era el franco Julio Durán. El nuevo partido aprovechó el repunte de la revitalizada derecha.

EL «TACNAZO» Y EL TRIUNFO DE ALLENDE

El enérgico y elocuente Radomiro Tomic, al parecer el heredero de Frei, volvió a Chile en 1968, tras pasar tres años como embajador en Washington. Tomic había anhelado durante mucho tiempo una alianza más amplia entre el PDC y la izquierda, y por un tiempo había condicionado a ello su candidatura presidencial. La izquierda no tenía ninguna intención de desempeñar un papel secundario al lado de Tomic. «Con Tomic ni a misa», dijo el secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, en 1968. A mediados de 1969, Tomic cambió de idea y, el 15 de agosto, fue designado como candidato del PDC para las elecciones de 1970. En las semanas siguientes, otros partidos anunciaron sus opciones: Chonchol por el MAPU, Salvador Allende por los socialistas y Pablo Neruda por los comunistas. La derecha, mientras tanto, puso sus esperanzas en el ex-presidente Jorge Alessandri, cuyo nombre por sí solo era mágico. El anciano no hizo ningún gesto de aceptación. Un giro inusual de los acontecimientos lo haría cambiar de opinión.

La última cosa que nadie habría esperado en Chile en 1969 era un golpe militar. Los chilenos creían que eran inmunes a ese virus en particular. A finales de la década de 1960, sin embargo, los militares empezaron a sentirse afectados por el desarrollo de los acontecimientos. El gasto militar había disminuido drásticamente desde la década de 1950. Frei prestaba poca atención a los hombres de uniforme, pero no los había olvidado: en un discurso de septiembre de 1967, subrayó las responsabilidades cívicas de las fuerzas armadas. En abril de 1968, unos ochenta bisoños oficiales del Estado Mayor presentaron su renuncia, alegando abiertamente ciertas privaciones. Presintiendo los problemas, Frei nombró a un general en retiro, Tulio Marambio, como ministro de Defensa. No obstante, los oficiales más jóvenes, en particular, no se tranquilizaron. Durante las celebraciones del «dieciocho» de 1969, un batallón del Regimiento de Yungay deliberadamente llegó tarde a la ceremonia con el fin de poner en aprietos al presidente.

Un mes después, el gobierno pasó a retiro en forma prematura al comandante de la Primera División del Ejército (Antofagasta), general Roberto Viaux, de quien se sospechaba que estaba conspirando. Y lo estaba. El 21 de octubre, Viaux usurpó el mando del Regimiento Tacna en Santiago y desafió al gobierno. «¡Nadie me podrá mover!» respondió el presidente Frei. Todos los partidos políticos (excepto los socialistas) se aliaron inmediatamente al presidente. La CUT llamó a una huelga nacional. Los camiones basureros municipales se alinearon fuera del palacio para impedir el inevitable ataque. Éste nunca se produjo. Algunas unidades leales del Ejército (y una gran multitud de festivales miriones) se apostaron cerca de las barracas de ladrillo rojo del Tacna. El general Viaux, «un milico con cara de milico», según uno de los periodistas que lo entrevistó¹⁷, insistió en que su «movimiento» no era más que una forma de hacer pública la difícil situación del Ejército —casi el equivalente militar de una huelga o toma—. Temprano al día siguiente, Viaux se rindió. Como resultado del «Tacnazo» (como se apodó el episodio) la mayoría de sus demandas estilo sindicato fueron satisfechas: el general Marambio y el comandante en jefe del Ejército renunciaron, y el Congreso, con inusitada rapidez, votó un aumento sustancial en la paga de las fuerzas armadas.

Dentro del Ejército, los trastornos causados por Viaux significaron meses de minucioso trabajo de reparación para el nuevo comandante en jefe, general René Schneider y su leal jefe del Estado Mayor, general Carlos Prats. Para disipar las dudas sobre el futuro papel del Ejército, Schneider declaró públicamente (mayo de 1970) que las fuerzas armadas estaban obligadas por el deber a garantizar una elección presidencial limpia y a apoyar a quien resultara electo; proposición que después fue apodada la «Doctrina Schneider».

El Tacnazo obligó a Alessandri a salir de su mutismo. Consciente de que Viaux era visto en los círculos derechistas como un posible «hombre con destino» (ilusión que el

mismo Viaux no trató de corregir al hacerse propaganda), el ex presidente, entonces de 73 años, anunció su propia candidatura «independiente». Hacía caso omiso de su edad (vivió hasta los 90). La izquierda no tuvo más opción que unirse en torno a un candidato común. En octubre de 1969, se formó una nueva alianza de izquierda, que adoptó el nombre de Unidad Popular (UP) y que estaba constituida por socialistas, comunistas y radicales, y tres partidos menores: el MAPU, el nuevo Partido Social Demócrata (PSD) y la Acción Popular Independiente (API), dirigida por un antiguo ibañista, el senador Rafael Tarud. A mediados de diciembre, los partidos de la UP habían acordado una plataforma globalmente socialista. Elegir un candidato, sin embargo, resultó inesperadamente tortuoso. Salvador Allende era la opción más obvia, pero ya había perdido tres veces y siempre le había ido mal con las votantes, quizá por su reputación de mujeriego. Sus capacidades políticas, no obstante, eran reconocidas universalmente como excepcionales y, en enero de 1970, fue proclamado finalmente como el candidato presidencial de la UP.

El año de la elección estuvo marcado por una violencia menor: escaramuzas callejeras, ataques a las oficinas de los partidos, incluso algún esporádico atentado explosivo. Los tres candidatos hacían giras por el país promoviendo sus campañas para sumar partidarios y ganar votos. Conocido desde hacía tiempo como un poderoso orador, Tomic proclamó su proyecto de una «revolución nacional, popular y democrática», distanciándose de la propuesta de Frei en un claro intento por atraerse a los votantes de Allende. Allende, en forma mucho más calmada, explicó la «transición al socialismo» expuesta en el programa de la UP. Alessandri, aún más calmado, reiteró la evidente necesidad de ley y orden, y del fin de la demagogia. Por primera vez en Chile, la televisión jugó un papel claro en la lid. En las últimas semanas de la campaña, los chilenos, una vez más, se entregaron a los alegres rituales de las elecciones: marchas y reuniones políticas, discursos, afiches, eslóganes en los muros, canciones de campaña. La derecha publicó avisos en la prensa que mostraban tanques rusos fuera de La Moneda y trató de socavar el atractivo de Tomic con la consigna «Pero no es Frei». El periódico popular e indiscriminadamente populista *Clarín*, que apoyaba a Allende y a Tomic al mismo tiempo, atacó a Alessandri sin piedad, describiéndolo como «el candidato de los ricos» (lo que era bastante cierto) y alegando que era homosexual (lo que ciertamente no era).

Algunos observadores supuestamente bien informados (incluidos los de la Embajada de Estados Unidos) estaban convencidos de que Alessandri ganaría. Las tendencias electorales de los últimos años indicaban otra cosa. Tan sólo dieciocho meses antes, los partidos que ahora formaban la UP habían ganado más del 40% de los votos. En una contienda de tres miembros, esto le daba a Allende el margen que necesitaba. Sin embargo, cuando se anunció el resultado de la elección en las primeras horas del 5 de septiembre, quedó claro que apenas había logrado derrotar a su mayor contrincante, Alessandri. El margen fue de tan sólo 40.000 votos.

¹⁷ Eugenio Lira Massi, *Abora le toca al golpe*, 1969, pág. 73.

La elección de un marxista confeso (a pesar de que tenía un historial democrático impecable) creó inmediata intranquilidad. Las acciones en la Bolsa de Santiago se precipitaron; hubo un asedio a los bancos sin precedentes; los que no podían permitirse comprar oro compraron bienes de consumo en cantidad. Dado que ninguno de los tres candidatos había obtenido la mayoría absoluta, el Congreso tenía que ratificar la elección de Allende. El 9 de septiembre, Alessandri anunció que si el Congreso votaba por él en vez de por Allende, renunciaría inmediatamente, allanando así el camino para nuevas elecciones. El PDC, árbitro de la situación, no escuchó este canto de sirenas. Aceptó apoyar a Allende con la condición de que la UP firmara un «estatuto de garantías democráticas» —una estipulación algo ociosa de las libertades ya expuestas en la Constitución—. El hecho de que esto haya parecido necesario, como ha señalado Arturo Valenzuela, «muestra el deterioro de la confianza entre los líderes políticos que habían estado cerca durante décadas»¹⁸. Las propias actitudes conciliatorias de Allende disminuyeron la tensión durante esas difíciles semanas. Cuando algunos manifestantes se encaramaron a la estatua del general Baquedano en la plaza que lleva su nombre (8 de octubre), él y la UP apoyaron de inmediato las indignadas protestas del Ejército.

La derecha, sin embargo, estaba muy desilusionada con el fracaso del PDC ante la amenaza marxista. Un movimiento organizado rápidamente y bautizado «Patria y Libertad» realizó reuniones políticas y una o dos veces lanzaron panfletos sobre Santiago desde avionetas. Algunos impetuosos derechistas colocaron bombas, pero pronto fueron atrapados por la policía. Por su parte, el futuro «hombre con destino», el general Viaux, estaba tramando fomentar un golpe de estado para impedir que Allende asumiera el cargo. Otros generales (algunos de ellos en el servicio activo) también estaban conspirando, incentivados (e incluso abastecidos con armas) por la CIA norteamericana —una síntesis señal del trato que Allende podía esperar de la administración de Nixon, que ya se mostraba inquieta ante la perspectiva de una «segunda Cuba»—. La táctica de los conspiradores era secuestrar al despreciado constitucionalista, general Schneider, y obligar así al Ejército a entrar en acción. El grupo de Viaux se puso en marcha primero y estropeó el plan. Schneider se resistió al intento de secuestro y fue herido de muerte (22 de octubre). Falleció tres días después. Su sucesor, el comandante en jefe, general Prats, lo describió como un «héroe de la paz y un mártir de la democracia»¹⁹.

El asesinato estremeció a toda la nación. Nada comparable había ocurrido desde el asesinato de Portales en 1837. La opinión pública apoyó firmemente a Allende y la tradición democrática. La elección de Allende fue ratificada por el Congreso con 153 votos

¹⁸ *The Breakdown of Democratic Regimes. Chile*, Baltimore, 1978, pág. 49.

¹⁹ *Memorias. Testimonio de un soldado*, 2ª ed., 1985, pág. 188.

contra 35, el Partido Nacional seguía manteniendo su oposición *à outrance*. Cuando se leyó el resultado, quienes estaban escuchando la radio oyeron al diputado socialista Mario Palestro²⁰ dar un grito profundamente demótico: «Viva Chile, mierda!». Algunas personas se escandalizaron. La mayoría se rió.

²⁰ Recientemente se ha escrito de Palestro que su socialismo no era «el producto de un complicado proceso intelectual» (Eugenio Lira Massi, *La Cámara y los 147 a dieta*, Santiago, 1968, pág. 62). Él y sus hermanos eran caudillos políticos al viejo y pintoresco estilo. En esa época administraban la municipalidad de San Miguel (dotada con un fuerte componente de clase trabajadora y ubicada en el sector sur de Santiago) como un feudo. Su estilo fue eminentemente populista.

La vía chilena hacia el socialismo, 1970-1973

Como en las tragedias del teatro griego clásico, todos saben lo que va a ocurrir, todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar.

Radomiro Tomic al general Carlos Prats, agosto de 1973

Nacido en una familia acomodada de Valparaíso, aunque no muy pudiente, Salvador Allende (62 años en 1970) originalmente había querido ser médico, como su abuelo, Ramón Allende Padín, político radical y líder de la masonería. El mismo Allende fue masón durante toda su vida. Mientras estudiaba medicina, se vio enfrentado directamente con la espantosa situación de la salud para los pobres. Aunque se graduó como médico, la política gradualmente reemplazó a la medicina como su verdadera vocación. Se hizo famoso en el bisonito Partido Socialista de la década de 1930, en 1937 fue elegido diputado por Valparaíso y, entre 1939 y 1942, estuvo al cargo del Ministerio de Salud. En 1945, obtuvo un puesto en el Senado y se mantuvo allí hasta que se convirtió en presidente. Era un político de tomo y lomo.

Desde el comienzo, el nuevo gobierno luchó denodadamente por llevar a cabo su programa político. Aumentó el gasto social considerablemente y realizó decididos esfuerzos por redistribuir la riqueza entre los peor pagados y los pobres. Como resultado de los mayores salarios y las nuevas iniciativas en salud y alimentación, muchos chilenos más pobres comían y se vestían mejor que antes. No obstante, el Estado no sólo luchó por mejorar su bienestar material: creó gran cantidad de iniciativas culturales, en un gran esfuerzo por llevar las artes a las masas. Uno de los muchos programas de este tipo, recordado por Joan, esposa de Víctor Jara, «llevó presentaciones regulares de ballet, música orquestal, folklore, teatro, poesía y mimos a los barrios marginales de la clase trabajadora de Santiago en una carpa de circo o en un gran escenario móvil al aire libre»¹. Ahora que los analfabetos y los mayores de dieciocho años podían votar, la postura pública del gobierno parecía favorecer una participación masiva más amplia en la toma de decisiones,

¹ Joan Jara, Víctor. *An Unfinished Song*, Londres, 1983, pág. 164.

con mayor igualitarismo social en vez de las actitudes jerárquicas tradicionales. Ciertamente, el gobierno podía recurrir a las grandes reservas de idealismo de quienes lo apoyaban. Para muchos parecía como si los sueños de Bilbao y Arcos, para no mencionar los de Balmaceda, Recabarren y Aguirre Cerda, estuvieran finalmente a punto de convertirse en realidad en el mundo socialista que se avecinaba.

Gran parte de la tragedia que vino a continuación provino del hecho de que esa visión (que sin ninguna duda tenía un lado noble) nunca fue compartida por una clara mayoría de chilenos. La naturaleza radical del programa de la UP ciertamente iba a despertar la oposición por parte de los intereses establecidos. Tal como resultaron las cosas, no obstante, muchas de las dificultades a las que debió enfrentarse el presidente provinieron tanto de su propia coalición como de sus adversarios. Un factor crucial en este sentido fue que, mientras Allende y muchos de sus seguidores creían sinceramente que el socialismo podía construirse sobre las sólidas bases de la tradición democrática chilena, muchos de sus seguidores querían pasar por encima de esa tradición. Eran los herederos de la impetuosa radicalización de la década de 1960. Tal como ha señalado Hugo Cancino en un estudio muy detallado del periodo, «un sector amplio de la izquierda chilena [...] comenzó a mediados de los años 60, un proceso de extrañamiento de la realidad chilena, asumiendo las versiones más ortodoxas, canonizadas y formalizadas del marxismo leninismo»². No obstante —y Cancino también lo dijo sabiamente—, el Chile de 1970 no era la Rusia de 1917.

Esta contradicción entre los propios objetivos de Allende y las demandas radicales de los «ultras» que militaban en el interior (y al lado) de la coalición, provocaría muchos de los dilemas del gobierno de la UP. Los objetivos revolucionarios de los «ultras» eran utópicos y de largo alcance. Entre los más militantes había incluso quienes sostenían la creencia apocalíptica —tales creencias tienden a convertirse en profecías autocumplidas— de que, para el futuro de la izquierda y del socialismo, era *mejor* que Allende «cayera por un acto de fuerza», como algunos de ellos lo hicieron saber a un observador norteamericano en 1971: «estamos tratando de crear una situación de desorden y caos que obligue a los reaccionarios a dar un golpe de estado»³. Ésta es la razón de que, a pesar de su vasta experiencia política, su pericia parlamentaria y su atractiva personalidad, el presidente Allende nunca pareciera tener el control total de la situación después de su optimista primer año en el cargo —y puede señalarse que, durante su último año, estaba a punto de perder el control por completo—.

² Hugo Cancino, *Chile. La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo*, Aarhus, Dinamarca, 1988, pág. 439.

³ Norman Gall, «The Agrarian Revolt in Cautín, Part Two», *American Field Service Reports, West Coast South America Series*, 14, 5, Chile, pág. 15.

Dada la posición política global de Allende, quizá se podrían haber realizado esfuerzos para ampliar la base política de la UP tentando al PDC con una alianza y aislando así a la derecha obsecadamente hostil. En vez de ello, el gobierno siguió adelante impetuosa y firmemente con los programas que había anunciado (una reforma agraria acelerada, la nacionalización a gran escala) y que a la larga dejaron al PDC. Cuando se hizo evidente que Allende tenía que modificar estas políticas para sobrevivir políticamente, fue incapaz de hacerlo. Dentro de la coalición, los comunistas y los radicales estaban a favor de la moderación y del enfoque general del presidente. A diferencia de ellos, los propios socialistas de Allende (bajo el dominio de su revolucionario secretario general Carlos Altamirano), el MAPU y el MIR (fuera de la coalición) presionaban por sacar adelante su propio programa, obligando al presidente, a veces, contra su instintiva sabiduría política, a adherirse a las orientaciones políticas que llevaron al desastre final.

No obstante, no debemos anticiparnos. Durante la mayor parte de 1971, Allende y la UP mejoraron su posición política. En la oposición reinaba la confusión. El PDC no sabía muy bien qué hacer, pero ciertamente no deseaba colaborar con los detestados nacionalistas. En su primera gran prueba, la coalición de la UP ganó el 49,7% de los votos en las elecciones municipales de abril de 1971, casi dos puntos más que la oposición. Las elecciones municipales, sin embargo, aunque alentaron a la UP, no marcaron ninguna diferencia en su posición en el Congreso, donde la UP controlaba sólo el 30% del Senado y el 40% de la Cámara de Diputados.

Una posibilidad que se discutió en su momento fue que Allende llamara a un plebiscito con el fin de convocar una «asamblea del pueblo» que preparara el borrador de una nueva constitución —como estaba propuesto en el «Programa Básico» de la UP—. Dicho programa contemplaba una Presidencia más fuerte, un poder legislativo unicameral y elecciones simultáneas. Gracias a la inercia política producida por las elecciones municipales, la UP podría haber ganado tal plebiscito en 1971. Allende vaciló y al final decidió no seguir adelante. Evidentemente él mismo tendría tiempo después para reconocer que había sido un error estratégico.

En esos momentos, no obstante, la decisión no parecía demasiado importante. La victoria en las elecciones municipales, una oposición desunida y algunas cifras económicas muy positivas parecían indicar una creciente ola de popularidad para la «transición hacia el socialismo». El gobierno se atrevió a avanzar rápidamente con su programa económico.

¿HACIA UNA ECONOMÍA SOCIALISTA?

La nacionalización del cobre

Nacionalizando el cobre
dejaremos de ser pobres.

Así rezaba un eslogan del Partido Comunista de la cosecha de 1969-1970. En diciembre de 1970, Allende introdujo una enmienda constitucional para nacionalizar la Gran Minería (aprobada unánimemente por el Congreso en julio de 1971). El PDC ya no se oponía. La derecha apoyó la medida en parte porque aún se resentía de la defensa que los norteamericanos habían hecho de la reforma agraria en la década de 1960. Para la UP, el que la Gran Minería perteneciera a dueños extranjeros era «la causa básica de nuestro subdesarrollo [...], de nuestro magro crecimiento industrial, de nuestra primitiva agricultura, desempleo, bajos salarios, nuestro bajísimo estándar de vida, la alta tasa de mortalidad infantil y [...] nuestra pobreza y retraso»⁴. En palabras de Allende, el cobre era «el sueldo de Chile»: las enormes ganancias del cobre (mucho más de 120 millones de dólares al año) debían beneficiar ahora a la nación. «Con ese decreto», afirmó Luis Figueroa, dirigente de la CUT, «el presidente Allende ha hecho justicia a Chile y a su historia»⁵.

Allende anunció que las acciones de la Kennecott y la Anaconda serían compradas con bonos a 30 años (con intereses de, por lo menos, el 3%). Esta compensación se calculaba sumando el valor contable de los intereses financieros de las compañías, menos las deducciones por la amortización y la depreciación, a las «ganancias excesivas». Sólo Allende estaba habilitado para calcular las «ganancias excesivas»; en septiembre de 1971, definió así cualquier beneficio que superara el 12% obtenido después de 1955. Como resultado de este cálculo, en vez de recibir una compensación, la Anaconda y la Kennecott debían pagarle al Estado 78 millones de dólares y 310 millones de dólares, respectivamente. Las compañías objetaron que sus beneficios no habían sido de ninguna manera tan sustanciales.

La nacionalización de las minas no trajo consigo el cuerno de la abundancia previsto. Tanto la producción como los beneficios disminuyeron drásticamente. Los allendistas afirmaron que los Estados Unidos estaban saboteando la producción al negar el acceso a la maquinaria y los repuestos norteamericanos. Y *efectivamente* se había vuelto difícil para las minas obtener repuestos, aunque a menudo era posible comprarlos a través de

⁴ *New York Times*, 25 de enero de 1971, citado en Eric Baklanoff, *The Expropriation of U. S. Investment in Cuba, Mexico and Chile*, Nueva York, 1975, pág. 96.

⁵ *Ercilla*, 6-12 de octubre de 1971, pág. 20.

terceros. El reemplazo de los técnicos de alto nivel (incluidos numerosos chilenos) que dejaron las minas tras la nacionalización resultó muy difícil. Algunos se fueron como una forma de protestar por las decisiones del gobierno; otros, porque ya no se les pagaba en dólares (una gratificación tradicional); otros, porque no podían adaptarse a la nueva gerencia. La partida de estos funcionarios especializados paralizó la producción, especialmente en áreas técnicas tales como la refinera.

En las mismas minas, las rencillas entre los sindicatos del PDC y aquellos controlados por los independientes, por una parte, y los funcionarios socialistas y comunistas, por otra, llevaron a huelgas no autorizadas por los sindicatos y a la ruptura de la disciplina de la fuerza de trabajo. Mientras tanto, la fuerza laboral había aumentado: en Chuquibambilla, aproximadamente, un 30%. Otro observador norteamericano señaló que muchos de los nuevos empleados eran «personal no cualificado, tales como sociólogos y psicólogos y hombres de relaciones públicas, que se habían dedicado al trabajo político por el bien de la Unidad Popular o por rivalidades infantiles entre ellos mismos».⁶ David Silberman, ingeniero en minas, comunista, que trabajaba en Chuquibambilla, lamentaba que la afiliación política contara más que la formación a la hora de decidir muchas contrataciones, y concluyó que «los problemas en las minas son principalmente políticos y sociales».⁷ Entre 1967-1969 y 1973, el empleo en las minas aumentó en un 45%, mientras que la producción *per cápita* disminuyó al menos en un 20%.

El mismo presidente Allende se quejó de la deficiente disciplina. Quienes lo apoyaban desde la militancia con más fuerza consideraron que estos desajustes eran temporales, argumentando que «nuevas formas de ejercer la autoridad [...], y, en términos generales, el desarrollo de una nueva estructura de poder» estaban cambiando inevitablemente los «esquemas tradicionales a que estaban acostumbrados tanto los mineros como el personal técnico».⁸ Sin embargo, incluso los fieles tenían sus dudas. Según Joaquín Figueroa (anterior gerente general de la mina de cobre Andina), a mediados de 1972, las minas estaban «pagando menos que en los tiempos de los imperialistas yanquis».⁹

Mientras los norteamericanos habían sido los dueños, la izquierda había apoyado consistentemente las peticiones de alzas en los salarios por parte de los mineros. Tras la nacionalización, el gobierno esperaba que se moderaran o que renunciaran a tales demandas. Los trabajadores no lo hicieron y los sindicalistas del PDC incentivaron el descontento para poner en aprietos al gobierno. Los mineros se declararon en huelga ochenta

⁶ Norman Gall, «Copper is the Wage of Chile», *Field Staff Reports, West Coast, South American Series*, 19, 3, 1972, pág. 7.

⁷ *Ibid.*, pág. 6.

⁸ Baklanoff, *Expropriation*, pág. 258.

⁹ «How Politicians Manage Mines», *Business Week*, 12 de agosto de 1972, pág. 46.

y cinco veces entre 1971 y 1972. La lucha más dramática por los salarios duró desde abril hasta julio de 1973, en El Teniente, y se extendió brevemente a Chuquibambilla. Las palabras que el presidente Allende dirigió a los mineros no dieron resultado.

Los mineros recalcitrantes no eran de ninguna manera el único problema. Tanto la Kennecott como la Anaconda demandaron al gobierno en Europa y en los Estados Unidos, haciendo desistir a los compradores de cobre chileno. Dado que el gobierno de los Estados Unidos había avalado parte de los préstamos de la Kennecott, tenía intereses financieros para presionar a Chile en este asunto y lo hizo por medio de una restricción crediticia. Washington se opuso a las solicitudes de préstamos que Chile había presentado en el Banco de Desarrollo Interamericano y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. También disuadió a los bancos norteamericanos de otorgarle préstamos a Chile.

¿Podrían haberse evitado estos desagradables incidentes producidos por la nacionalización del cobre? El embajador de Estados Unidos en Chile, Edward Korry, trató de negociar una avenencia¹⁰. Korry quería que Allende dejara que la *U. S. Overseas Private Development Corporation* (OPIC) avalara los bonos del gobierno chileno, permitiendo así que las compañías cupríferas vendieran los bonos de inmediato, aunque fuera con un descuento. Allende consideró esta proposición seriamente, pero los ministros socialistas se opusieron. Sin embargo, aunque hubiera habido una avenencia y ninguna represalia norteamericana, no queda del todo claro que la nacionalización de la Gran Minería hubiera dado frutos inmediatos, puesto que, entre 1970 y 1973, el precio mundial del cobre cayó 35 centavos por libra. Mientras Allende era la víctima de un destino adverso en este ámbito, no puede negarse tampoco que la forma en que se llevó a cabo la nacionalización agravó los efectos de la simple mala suerte.

La aceleración de la reforma agraria

La ampliación de la reforma agraria resultó más controvertida y fue más polémica, en tanto que golpeaba más cerca del corazón del país. La UP no tenía una concepción única sobre la forma en que debía ser reorganizado el campo en el futuro. Los socialistas defendían la colectivización que se estaba llevando a cabo, viendo a los campesinos de los asentamientos como potenciales «*hulaks* reaccionarios». Los comunistas y los radicales estaban a favor de las cooperativas en que los campesinos podían trabajar sin perder el derecho a poseer parcelas privadas. En la práctica, todas estas discusiones produjeron un alto grado de confusión en el campo.

¹⁰ Negoció con éxito la nacionalización de la *Bethlehem Steel Company*, la *Northern Indiana Brass Company* y los *holdings* Río Blanco de Cerro Corporation.

El ritmo de la reforma agraria fue acelerado sustantivamente. Jacques Chonchol, entonces ministro de Agricultura, prometió que se expropiarían todas las propiedades de más de las ochenta hectáreas «básicas»¹¹. A finales de 1972, ya no había en Chile ningún predio que excediera ese límite básico. Los «ultras» de la UP y del MIR, que se oponían a que el ministro recurriera a la Ley de reforma del PDC, lenta y «burguesa», organizaron a los campesinos (y a los mapuches desposeídos) en un Movimiento Campesino Revolucionario, que se «tomó» más de 1.700 propiedades, muchas de ellas con una superficie inferior a ochenta hectáreas. Las tomas colocaron al presidente Allende en una difícil posición. Si Carabineros desalojaba a los campesinos, él mismo despejaba el camino para que lo acusaran de «traicionar al pueblo»; por otra parte, si toleraba las tomas, sus adversarios sin duda las utilizarían como una prueba de que la UP estaba burlando la ley. Para evitar este dilema, Allende recurrió a una provisión de la Ley de reforma poco conocida que permitía al gobierno expropiar una propiedad y nombrar a un interventor (administrador temporal) si algún obstáculo interrumpía el trabajo. El uso de esta medida aplacó a los «ultras», pero no logró suavizar demasiado el mal humor de la oposición.

Sólo los ex-inquilinos compartían la tierra de una hacienda expropiada; los «afuerinos» (alrededor del 60% de la fuerza de trabajo rural) no recibían nada. El ala radical de la UP presionó para que se confiscaran todas las propiedades y se crearan nuevas unidades agrícolas, las «haciendas del Estado», cultivadas por ex-inquilinos y por afuerinos sin distinción. Los campesinos de los «asentamientos» se opusieron enérgicamente a esta propuesta. El PDC les había prometido a ellos la tierra de sus patrones y, al parecer, ahora la UP quería quitárselas. El gobierno no podía ignorarlos: la sindicalización rural se había extendido demasiado. Impulsado por el PDC, los antiguos inquilinos insistieron de manera inflexible en mantener los «asentamientos». Chonchol se vio obligado a tolerar los que ya existían, pero se negó rotundamente a formar otros nuevos. En enero de 1971, con el fin de avanzar en sus propios planes, el gobierno creó el Consejo Nacional Campesino (CNC). Esta nueva organización funcional, compuesta por representantes de diversos grupos campesinos, relegaba cuidadosamente a los campesinos a un papel asesor más que a la toma de decisiones. La táctica falló, fundamentalmente porque los sindicatos de campesinos del PDC se opusieron con tenacidad al control del gobierno.

Para completar la reforma agraria, el gobierno fusionó los predios expropiados que eran limitrofes en nuevas entidades conocidas como Centros de Reforma Agraria (CERAs). Cada CERA tenía que darle al Estado el 90% de sus ganancias. El gobierno pagaba a sus miembros (tanto ex-inquilinos como afuerinos) un salario y comercializaba sus productos. Las leyes que regulaban los CERAs estaban redactadas de manera tan vaga que nadie sabía precisamente qué forma debían tomar las unidades. El CERA, de hecho, parece

¹¹ Ver capítulo 11, nota 11.

haber sido más bien un mecanismo para evadir la legislación de la reforma agraria existente y para promover la formación de una «sociedad sin clases en el campo»¹². No obstante, pronto surgieron muchas críticas que atacaban el CERA como un sistema que «simplemente transfería más prerrogativas de los derechos de propiedad a manos de los burócratas, mientras quitaba a la empresa individual o al grupo de campesinos el control sobre el superávit generado en el sector rural»¹³. A finales de septiembre de 1971 y nuevamente a comienzos de 1972, algunos miembros de los sindicatos agrarios opositores y otras organizaciones de campesinos exigieron que el Estado cumpliera la ley dividiendo los asentamientos en parcelas individuales. Incluso el CNC, el nuevo consejo de campesinos, se volvió ingobernable.

El gobierno también estableció Centros de Producción (CEPROs), unidades propiedad del Estado creadas para tratar con formas de agricultura «excepcionales»¹⁴. Sus trabajadores eran empleados del Estado que recibían un sueldo y los beneficios del seguro social. No obstante, más allá de que se las denominara asentamientos, CERAs o CEPROs, las nuevas unidades agrarias cambiaron la topografía rural de Chile. Los predios de ochenta hectáreas o más, que todavía en 1965 abarcaban el 55% de la tierra, ya no cubrían más del 3% en 1972. Poco más de la mitad de todas las propiedades rurales consistían ahora en parcelas con una superficie de entre cinco y ochenta hectáreas —comparadas con menos del 20% en 1965—. La hacienda tradicional (y todo lo que ella significaba) había desaparecido —y con sorprendente rapidez si consideramos la posición preponderante que históricamente había tenido—.

El campo reprodujo muchos de los problemas que en ese momento estaban afectando a las minas de cobre, donde las rivalidades políticas jugaban una vez más un papel que llenaba de confusión y donde los objetivos del gobierno estaban en conflicto con las aspiraciones de los campesinos (especialmente con las de los ex-inquilinos). Los campesinos temían que el Estado tomara el lugar de sus antiguos patrones. Como señaló Emilio Lorenzini, un democrata cristiano que trabajó mucho tiempo en el movimiento de reforma agraria:

No importa quién sea el dueño del capital, sino más bien quién tiene el poder de decidir, de obtener los frutos de la empresa y de orientar la producción nacional. No conseguimos nada si sólo cambiamos el grupo que explora a los trabajadores en el sistema capitalista por [...] un interventor designado por los burócratas [...] Los trabajadores le seguirán vendiendo su trabajo a quienes controlan el capital [...] Antes eran accionistas; ahora son burócratas»¹⁵.

¹² Brian Loveman, *Struggle in the Countryside*, Bloomington, Indiana, 1976, pág. 293.

¹³ *Ibid.*, pág. 295.

¹⁴ Stefan de Vylder, *Allende's Chile*, Cambridge, 1975, pág. 188.

¹⁵ *La Prensa*, 26 de noviembre de 1971, citado en Loveman, *Struggle in the Countryside*, págs. 298-299.

La combinación de agitación rural, erosión de la disciplina campesina y condiciones climáticas adversas hizo decaer la producción agrícola. Entre 1969-1970 y 1972-1973, la superficie de tierra cultivada disminuyó en, aproximadamente, un 20%. Las cosechas de algunos cultivos se redujeron considerablemente: el trigo en más del 30%, las patatas en más del 15%, el arroz en un 20%, el azúcar de remolacha en un 40%, aunque otros cultivos (avena, maíz, cebada) tuvieron mucho mejor rendimiento. Algo similar ocurría con el ganado. Si bien ahora había menos vacas y ovejas, sí había más cerdos y gallinas. En general, no obstante, estas condiciones anormales produjeron incertidumbre. El temor a sufrir una toma o a ser expropiados aterró de tal manera a algunos agricultores privados, que simplemente se negaron a plantar, liquidaron su maquinaria y sacrificaron su ganado o bien mandaron sus animales al otro lado de la cordillera, a Argentina. Los campesinos del «sector reformado» se mostraron casi tan recalcitrantes como los agricultores, poniendo sus mejores esfuerzos en el cultivo de sus propias parcelas (para su propio consumo o la venta de los productos en el floreciente mercado negro) más que en el trabajo de la tierra de propiedad común.

Todo esto ya era bastante malo, pero las dificultades todavía iban a aumentar debido a otras políticas. Una congelación de los precios combinado con aumentos en los salarios hizo subir desmedidamente el consumo de alimentos interno. Para satisfacer la demanda, el gobierno se vio obligado a importar más alimentos. En 1972, estaba gastando el 56% de los ingresos por concepto de exportaciones.

La nacionalización de la industria

La UP tenía la intención de nacionalizar los elementos más significativos de la base industrial del país. El Estado chileno ya poseía o controlaba la industria del acero, los campos petrolíferos y las refinerías, la mayoría de los ferrocarriles, la línea aérea nacional, etc. A través de la CORFO, el Estado también era dueño parcial de varias compañías manufactureras importantes, que en 1970 controlaban alrededor del 40% de la producción nacional. Sin embargo, el gobierno de la UP siguió empeñado en erradicar *todas* las grandes corporaciones privadas —que calificaba como «los monopolios»—.

El «Programa Básico» de la UP contemplaba una economía con tres sectores diferenciados: (1) el Área de la Propiedad Social, más brevemente el «Área Social» (compañías propiedad del Estado); (2) el «Área Mixta» (firmas en las que el Estado era el principal accionista); y (3) el «Área Privada» (pequeños negocios). Los comunistas y los radicales sugirieron que sólo fueran consideradas en el programa aquellas empresas que ejercieran un «poder de monopolio» —un camino que podía ganar el apoyo político de la clase media—. Los socialistas y el MAPU (sin mencionar el MIR) deseaban la nacionalización

inmediata de, virtualmente, todos los medios de producción. Una vez más, Allende tuvo que enfrentarse a una pugna difícil.

En octubre de 1971, el presidente propuso que se transfirieran a las Áreas Social o Mixta todas las compañías cuyo activo neto excediera los 14 millones de escudos (alrededor de 1 millón de dólares). Había unas 253 corporaciones de tales características (150 de ellas eran empresas manufactureras) y que controlaban alrededor del 90% de todos los haberes de la corporación. El gobierno aceptó comprar estas compañías mediante bonos con intereses equivalentes al valor contable de su activo de 1969. Los inversores menores recibirían un reajuste por la inflación. Los mayores accionistas obtendrían un trato menos favorable. En el Congreso, la mayoría se opuso a este plan temiendo que fuera usado para controlar los medios de comunicación.¹⁶ En enero de 1972, las compañías consideradas para la expropiación fueron reducidas a noventa; lo cual no aplacó a la oposición.

El gobierno descubrió una manera de soslayar al Congreso. La República Socialista de 1932 había emitido un decreto (DFL 520) que permitía la expropiación de cualquier empresa industrial considerada «esencial» para la economía si ésta infringía la Ley. Cualquier infracción menor podría ser interpretada fácilmente bajo esta luz. El DFL 520 había permanecido en la penumbra hasta que fue descubierto repentinamente por un abogado de la UP. Entonces, este edicto olvidado pasó a ser uno de los instrumentos más poderosos de La Moneda, el más importante de los llamados «resquicios legales» que despertaron la ira de la oposición. Una segunda medida de este tipo, puesta en vigor durante el Frente Popular, permitió que el Estado requisara las fábricas administradas de manera ineficiente, aunque sin transferir su propiedad formalmente al Estado. Gracias a estas dos medidas, el Estado pudo instalar interventores en las fábricas correspondientes.

Aunque no en todos los casos fue necesario recurrir a este tipo de subterfugios. El gobierno no tuvo demasiadas dificultades para adquirir las acciones de los principales bancos. Como era bastante predecible, las empresas norteamericanas se convirtieron en el blanco favorito para la nacionalización: Ford, ITT (la última con justa razón, dado su grotesco comportamiento durante la elección de Allende)¹⁷ y *Ralston Purina* pasaron a formar parte rápidamente del Área Social. En 1973, gracias a una combinación de requisas,

¹⁶ Una cuestión particularmente polémica en este marco fue el intento del gobierno de comprar el 51% del *holding* de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (conocida localmente como la «Papelería»), la principal fuente de papel de prensa del país y una compañía dirigida por el ex presidente Jorge Alessandri. Los accionistas se negaron a la adquisición y se produjo un prolongado forcejeo, en el que el gobierno trató de extorsionar a la compañía congelando el precio del papel.

¹⁷ Tanto antes como después de septiembre de 1970, la ITT ofreció dinero a la CIA para impedir la elección y la toma de posesión del mando de Allende, un ejemplo de la «subversión corporativa» que despertó intensa indignación en Chile, no sólo en la izquierda.

tomas y compras de acciones, el Estado controlaba el 80% de la producción industrial del país, más de 400 empresas y alrededor del 60% del PNB¹⁸.

No obstante, las fábricas nacionalizadas o «intervenido» sufrieron las mismas dificultades que entonces afectaban a la minería y la agricultura. Los interventores solían ser elegidos no tanto por sus calificaciones técnicas como por su influencia en los partidos de la coalición; los socialistas y los comunistas recibían los mejores cargos. Además, la política de empleo del gobierno a menudo infló las nóminas de salarios de las fábricas. A medida que la disciplina se fue relajando aumentaron las dificultades: «corrupción; robo; absentismo; costoso descuido en el uso de la maquinaria, incluida negligencia en la mantención; simplemente el no trabajar; llevar a cabo venganzas (en parte basadas en lealtades políticas)»¹⁹. Las huelgas se hicieron más frecuentes, a veces incentivadas por la oposición. En 1970 y 1972 las suspensiones del trabajo casi se duplicaron, lo que costó al país 162 millones de días laborales perdidos.

No obstante, aún llevó algún tiempo antes de que las implicaciones de la rápida nacionalización quedaran en evidencia. De hecho, 1971 fue un año de opulencia: con la congelación de los precios y la subida de los salarios, el poder adquisitivo aumentó sustancialmente. El PNB se disparó en un 8,3%; la producción industrial aumentó en un 12,1%; el desempleo se redujo en un 3,8%. Estas prometedoras cifras habían sido alcanzadas porque las fábricas pudieron explorar las existencias almacenadas, los suministros de materias primas acumulados y una capacidad industrial en desuso de casi el 25%. Los buenos tiempos, desgraciadamente, no podían durar. El prolongado congelamiento de los precios hizo que, para las compañías, ya no fuera provechoso producir. A la espera de la expropiación, los dueños de las fábricas privadas se negaron a invertir. La producción industrial lentamente comenzó a bajar. A mediados de 1972, la producción todavía se mantenía levemente por encima de las cifras de 1971; durante los últimos meses del año, la caída se volvió penosamente evidente y el Área Social comenzó a endeudarse cada vez más. En 1972, el déficit llegaba a aproximadamente 22.000 millones de escudos (equivalente al 60% de los ingresos nacionales). Según palabras de Stefan de Vylder: «el Área Social se convirtió en un balde con un agujero, que echaba carbón al volumen de circulante y a la galopante tasa inflacionaria»²⁰.

En muchos sentidos, el proceso de nacionalización quedó fuera de control. En abril de 1971, los trabajadores de la planta textil Yarur tomaron la fábrica y exigieron que fuera incorporada al Área Social. Ésta era la primera vez que los trabajadores, antes que el

gobierno, tomaban una fábrica. El ejemplo fue imitado con presteza. En junio de 1972, los trabajadores de la planta enlazarora Perlak en Los Cerrillos también exigieron que fuera incluida en el Área Social. Perlak, junto con otras dos fábricas vecinas, crearon el Cerdón Cerrillos, el primero de los llamados «cordones industriales» —áreas controladas por los trabajadores, efectivamente independientes del gobierno—. Una vez más, Allende debió afrontar una elección penosa. ¿Aceptaría las acciones de los trabajadores o devolvería las fábricas ocupadas a sus dueños? Cuando La Moneda optó por lo primero, los militantes socialistas y miristas tomaron otras fábricas más, exigiendo que los trabajadores ejercieran el control. Parece evidente que la capacidad del gobierno para conducir la nacionalización a su propio ritmo se vio seriamente obstaculizada.

A medida que la producción industrial (y agrícola) decaía, Allende se vio obligado a comprar productos importados para cumplir su promesa de llegar a un nivel de vida más alto. Sin embargo, la bajada del precio del cobre redujo la capacidad del país para recaudar reservas extranjeras y, por ende, su capacidad para pagar las importaciones. Reació a reducir el nivel de vida, pero enfrentado a una crisis económica creciente, Allende se dio cuenta de que no tenía los medios para lograr los cambios que él defendía. Una planificación sería a largo plazo quizá habría señalado que el gobierno tenía que usar sus menegadas reservadas para comprar materias primas y repuestos esenciales. Al final, los cálculos políticos triunfaron sobre el buen criterio económico. Allende optó por los bienes de consumo (incluidos los alimentos) antes que por los bienes de capital. A fines de 1972, la balanza comercial del país estaba absolutamente desequilibrada: las exportaciones habían disminuido en un 25% desde 1970, mientras que las importaciones habían aumentado en un 40%. El déficit comercial aumentó de 18 millones de dólares a 255 millones de dólares en 1971-1972.

El fracaso de la estrategia económica de la UP

Una clave sobre la estrategia general de la UP para mejorar la fortuna de los peor pagados y los más necesitados —una estrategia «keynesiana», como se la describió a menudo en la época— era darles empleo ya fuera en las nuevas empresas nacionalizadas o en los proyectos de obras públicas. Tan sólo en 1971, por ejemplo, los fondos para las obras públicas aumentaron de 19 millones a 33.000 millones de escudos. Esto también debía estimular la economía produciendo un mayor consumo. Allende prometió proteger al consumidor de la inflación «reajustando» los salarios. Durante el primer año de su mandato, los salarios aumentaron en un 55% (mucho más que la inflación del año anterior, de un 33%, y muy por encima de las directrices iniciales del gobierno). Los obreros recibieron mayores aumentos para disminuir la brecha entre ellos y los empleados que, hasta entonces, habían sido los más mimados. La Moneda también elevó sustancialmente los

¹⁸ Alberto Balra, *La gestión económica del Gobierno de la Unidad Popular*, 1973, págs. 53-54.

¹⁹ Henry Landsberger y Tim McDaniel, «Hypermobilization in Chile, 1970-1973», *World Politics*, 28, 4, 1976, pág. 529.

²⁰ De Vylder, *Allende's Chile*, pág. 154.

gastos sociales (salud, vivienda y educación), al igual que el acceso público al sistema de seguridad social, entregando mayores beneficios fiscales así como mejores asignaciones familiares.

Las implicaciones inflacionarias de tales políticas no fueron consideradas por los funcionarios del gobierno, quienes argumentaron que los controles de precios podían ponerle una cota a la inflación hasta que la producción fuera igual a la demanda. De hecho, cuando el coste de la vida aumentó sólo el 22% en 1971, el enfoque económico de la UP pareció lógico. Este discreto aumento, sin embargo, ocultaba una presión inflacionaria soterrada. Los negocios (privados o públicos) florecieron en 1971 mediante una reducción de sus provisiones de materias primas y existencias. En 1972, los productores se vieron obligados a adquirir las reposiciones y las materias primas a precios mucho más altos. La Moneda usó sus sustanciales reservas de divisas con el fin de subsidiar las importaciones para el consumidor. Sin embargo, con la baja de las exportaciones, dichas reservas menguaron en un 90%. A la larga, al gobierno le resultó imposible continuar suscribiendo la economía del consumidor.

Además habían comenzado a aparecer otras siniestras estadísticas: durante 1971, el volumen de circulante se duplicó y la cantidad de créditos disponibles tanto para el sector privado como para el sector público se triplicó. Los ingresos por concepto de impuestos también bajaron. Para cubrir el déficit y conseguir fondos para los bienes de consumo y de capital, el gobierno pidió préstamos extranjeros. Sabía que no obtendría buenos resultados en Washington: como ya se señaló, el gobierno de Estados Unidos estaba utilizando su poder para vetar las solicitudes chilenas a los bancos internacionales. La reducción del crédito norteamericano empeoró sin duda las dificultades económicas de Chile; en el caso de que Estados Unidos se hubiera adherido a un «bloqueo invisible», cuya existencia se solía alegar, la eficacia de esta medida puede ser cuestionada. Como señalaría luego Clodomiro Almeyda, el leal ministro de Relaciones Exteriores de Allende, «Chile había logrado a mediados de 1973 disponer en [Europa Occidental] de líneas de crédito bancarias normales, que le permitían adquirir allí muchas de las mercancías que ya no podía comprar en Estados Unidos»²¹. Los préstamos y los créditos de China, del bloque soviético y de algunos países de América Latina alcanzaron la suma aproximada de 750 millones de dólares; cuánto fue girado realmente es otro tema.

Las presiones inflacionarias simplemente se hicieron demasiado fuertes. Las menguantes provisiones de bienes de fabricación local junto con la aparición de un fuerte mercado negro impulsaron un alza inexorable de los precios. En realidad, tampoco se realizó ningún esfuerzo serio para imponer el racionamiento. En un intento cada vez más desesperado por mantener los niveles salariales, el gobierno continuó «reajustando».

²¹ Citado en Joaquín Fermandois, *Chile y el mundo, 1970-1973*, 1985, pág. 395.

Tales medidas elevaron las proyecciones inflacionarias. Entre julio de 1971 y julio de 1972, el coste de la vida aumentó en un 45,9%. La inflación se duplicó en agosto de 1972 y subió la mitad de eso una vez más en septiembre (en las mismas seis semanas, el escudo cayó en picado de 150 a 300 por dólar en el mercado negro). Al año siguiente, la inflación aumentó en más de un 300%. Muchas personas se lanzaron a adquirir desenfrenadamente bienes de consumo como una medida contra la inflación futura o para protegerse contra la escasez que se había vuelto demasiado común a fines del tercer año del mandato de Allende.

A mediados de 1973, la economía estaba a punto de hundirse. Después, muchos atribuirían esta debacle económica a la hostilidad de las clases media y alta, y a Estados Unidos —cuyo ataque fue real y fuerte—. Sin embargo, las principales decisiones económicas no fueron tomadas por la oposición. La situación económica de los años de la UP puede ser reinterpretada con razón, quizá, como una instancia clásica de «primacía de la política». Pedro Vuskovic, ministro de Economía de Allende (1970-1972), lo admitió: «La política económica está subordinada, en sus contenidos, aspecto y forma», afirmó en marzo de 1972, «a las necesidades políticas del creciente apoyo a la Unidad Popular [...]»; un objetivo central es ampliar el apoyo al gobierno»²². Este objetivo central, simplemente, no se alcanzó.

CONFRONTACIÓN Y PARALIZACIÓN

El deterioro de la atmósfera política reflejaba (y de alguna manera anticipaba) el empeoramiento de la situación económica. En junio de 1971, un grupo extremista, el VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), asesinó al antiguo ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic. Los terroristas eran hombres a quienes Allende había concedido una amnistía muy polémica cuando asumió la Presidencia y el PDC estaba furioso. Exigió al presidente que controlara y desarmara a los diversos grupos paramilitares «ultra», tales como el VOP y el MIR, cuyas actividades sospechaba que eran toleradas por Allende. Si bien el gobierno rápidamente aplastó al VOP, hizo poco por frenar al MIR. Los efectos electorales del asesinato se dejaron sentir en julio en una elección complementaria en Valparaíso, donde el Partido Nacional aceptó apoyar al candidato del PDC, el Dr. Óscar Marín. El PDC negó que hubiera una alianza formal, pero aceptó el apoyo del ala derecha, solicitando el apoyo en las urnas de todos quienes «repudiaran la violencia y el odio, el

²² Pedro Vuskovic, «The Economic Policy of Popular Unity Government», en J. Ann Zammit (ed.), *The Chilean Road to Socialism*, Austin, Texas, 1973, pág. 50.

secretarismo y los grupos armados ilegales»²³. La escasa victoria del Dr. Marín marcó un límite y colocó a la UP a la defensiva en términos políticos.

Las posiciones políticas se habían endurecido. El PDC se arrogaba el oponerse a cualquier intento por convertir a Chile en una «sociedad totalitaria», y de introducir una legislación que protegiera a los pequeños comerciantes y a los terratenientes, exigiendo que el Congreso aprobara cualquier ampliación del Área Social. Algunos miembros del ala izquierda del PDC rompieron filas en este punto y formaron la nueva Izquierda Cristiana, que se unió inmediatamente a la coalición de la UP. La misma UP también sufrió la defecación de un grupo de radicales, inquietos por la creciente influencia marxista en su partido, y crearon el Partido de Izquierda Radical.

Para el PDC, los meses de mediados de 1971 fueron algo así como el momento de la verdad. La lógica de la competencia tradicional entre los partidos lo obligó, poco menos, a adoptar una postura de oposición. En octubre de 1971, sus diputados introdujeron formalmente la legislación que exigía la aprobación del Congreso para que se pudieran ampliar las Áreas Social o Mixta. También querían restringir el uso del DFL 520, limitando las requisiciones de propiedad a un periodo de seis meses y permitiendo que los dueños de las propiedades pudieran apelar ante la Corte Suprema.

La resistencia a la UP tanto dentro como fuera del Congreso fue aumentando gradualmente. Durante una prolongada visita a Chile del primer ministro de Cuba, Fidel Castro, las amas de casa de las clases media y alta realizaron su famosa «Marcha de las Cacerolas Vacías» (1 de diciembre de 1971), desfilando por las calles de Santiago y golpeando las cacerolas para denunciar las escasez de alimentos y la inflación. Quienes apoyaban a la UP atacaron a las manifestantes, incidente que llevó a la oposición a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Tóhá. Antes de que la acusación llegara al Senado, Allende transfirió a Tóhá al Ministerio de Defensa —acto que la oposición vio como un calculado desaire al Congreso—. Esto afianzó aún más la alianza informal entre el PDC y los nacionales. En enero de 1972, se realizaron dos elecciones: en O'Higgins-Colchagua para el Senado y en Linares para la Cámara de Diputados. Tanto el gobierno como la oposición se arrojaron con todas sus fuerzas a la lucha. La UP perdió ambas batallas.

Claramente preocupado por el creciente deterioro de la situación política, el presidente Allende convocó a una reunión de los dirigentes de la coalición en El Arrayán (febrero de 1972). La asamblea mostró ampliamente las divisiones que asolaban a la UP. Los comunistas y los radicales (y los propios seguidores personales de Allende entre los socialistas) predicaban la moderación; algunos sugerían incluso un «diálogo» con el PDC. La mayoría de los socialistas y el MAPU respondían exigiendo que el gobierno «acelerara

el proceso revolucionario». La reunión de El Arrayán subrayó el dilema fundamental de Allende. Y, además de tener que luchar con sus supuestos amigos, el presidente nuevamente tuvo que batallar con sus adversarios *reales*, cuyos ataques al gobierno se estaban volviendo cada vez más feroces. En abril de 1972, el PDC ganó el estratégico Rectorado de la Universidad de Chile. En julio, el Partido alegó estrepitosamente que la UP había manipulado fraudulentamente las recientes elecciones en la CUT y el Congreso logró sus objetivos al procesar a Hernán del Canto, ministro del Interior, por permitir el contrabando de armas a Chile a bordo de un avión cubano. Aunque la UP ganó las elecciones complementarias en Coquimbo (también en julio de 1972), sus resultados fueron muy poco brillantes.

Gran parte de la discusión política de la primera mitad de 1972 se centró en un espinoso tema constitucional. En febrero de 1972, el Congreso aprobó una enmienda constitucional impulsada por el PDC que prohibía las expropiaciones no autorizadas por el poder legislativo. Allende vetó la propuesta y una mayoría del poder legislativo respondió votando para revocar el veto, acción que amenazaba con hundir a la nación en una clásica crisis institucional. Allende alegó que el Congreso sólo podía revocar su veto con una mayoría de dos tercios y no con una mayoría simple, como alegaban los parlamentarios. Esta diferencia de interpretaciones se suscitó a raíz de la enmienda constitucional de enero de 1970, la cual, al establecer un mecanismo para los plebiscitos en casos de enmiendas constitucionales en disputa, había empañado esta cuestión en particular. Las discusiones se sucedían; la oposición presionaba en favor de un plebiscito; Allende insistía en que era necesaria una mayoría de dos tercios (al igual que para revocar su veto en la legislación normal) y que el asunto sólo podía ser resuelto por el Tribunal Constitucional creado por la enmienda de 1970. Por el momento, la situación quedaría sin resolver.

No obstante, la presión parlamentaria siguió aumentando. En junio de 1972, el PDC introdujo una nueva enmienda constitucional que prohibía la expropiación de los predios de menos de cuarenta hectáreas y que exigía que el gobierno (de acuerdo con la Ley de 1967) convirtiera los «asentamientos» en cooperativas o unidades agrícolas de explotación individual. Una vez más, los políticos estaban inmersos en la discusión de ciertos asuntos constitucionales, por lo cual el creciente conflicto entre el gobierno y la oposición llegaba ahora cada vez con mayor frecuencia a las calles: las demostraciones se habían vuelto más y más violentas, obligando a Allende a decretar el estado de emergencia en Santiago y en Concepción en agosto y septiembre de 1972. Muchos sospecharon que los «ultras», tanto de la izquierda como de la derecha, estaban convirtiendo a Chile en un campo armado. Ante el estado de ánimo generalizado, el Congreso legisló para restringir la tenencia de armas automáticas sólo a las fuerzas armadas y a Carabineros, y también otorgó a los militares el poder para registrar (y confiscar) armas de fuego encontradas en manos de civiles. Esta nueva Ley de control de armas, debidamente firmada por Allende, entró en vigor en octubre de 1972.

²³ Paul Sigmund, *The Overthrow of Allende*, Pittsburgh, 1977, pág. 149.